

★ Debate sobre las redes "sociales" ¡Cállate! por Serge Halimi

Año XXI, número 226 ♦ MARZO 2021

Edición chilena

Precio del ejemplar \$ 2.500
Regiones I, II, XI, XII y XV \$ 2.750

LE
MONDE
diplomatique
Aún Creemos en los Sueños



Nuevo libro
**REFORMA TRIBUTARIA
JUSTICIA FISCAL**
Por Michel Jorratt, Ricardo Martner,
Juan Apablaza Gallardo, Ramón E. López,
Gino Sturla, Jorge Andrés Thibaut,
Rosa Cañete Alonso y Nayareth Quevedo
Versión digital en venta a \$2.950 en
www.editorialauncreemos.cl

No hay Constitución sin pueblo

Por Álvaro Ramis

Momento constituyente y política exterior

por Libio Pérez

La guerra de las drogas en La Araucanía

por Ibán de Rementería

El mapuche en la ciudad

por Arturo Castro

Debate sobre el retorno a clases presenciales

por Dante Castillo y Mario Torres

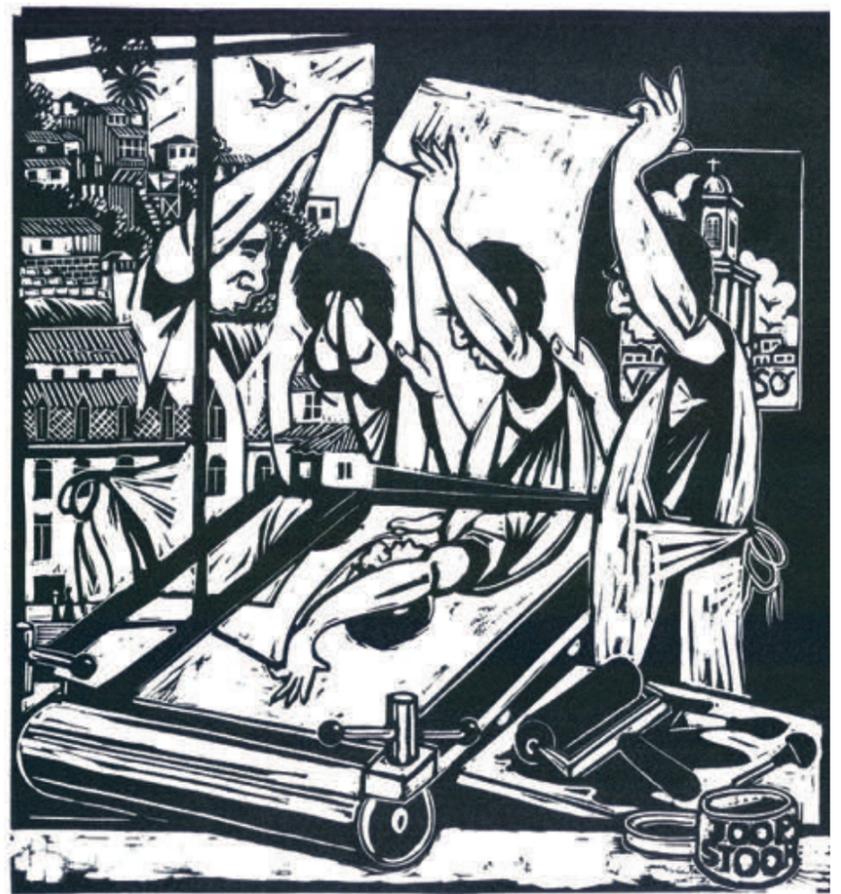
Liceos "emblemáticos" y cambios sociales

por Marianela Aravena

Chile y su primer año de pandemia

por Yuc Ramón Kong

Las patentes obstaculizan las vacunas para todos



Loro Coirón, Multiplicación (linografía), 2015

Textos sobre Estados Unidos, Rusia, Birmania, India, Escocia, Egipto y Transcaucasia



LE MONDE diplomatique

Equipo

EDICIÓN CHILENA

Director:
Victor Hugo de la Fuente

Editor General:
Libio Pérez Zúñiga

Iconografía:
Dominique Monteau

Diseño y diagramación:
Cristián Escobar

Administración:
Ruth Flores
Carolina Muñoz
Freddy Araneda
Consultora en administración y finanzas: Allende y Montes Asociados Ltda

Colaboradores:
Clara González
Margarita Iglesias
Federica Matta
Ricardo Parvex
Álvaro Ramis
Gonzalo Rovira
María Emilia Tijoux

Le Monde Diplomatique Edición chilena es una publicación mensual de la Editorial "Aún Creemos en los Sueños"

Dirección: San Antonio 434 local 14 - Santiago Chile

Teléfono: 22 608 35 24

E-mail: edicion.chile@lemondediplomatique.cl

Página web: www.lemondediplomatique.cl

Venta de ejemplares: www.editorialauncreemos.cl

Impresión: Copesa

De este número se imprimieron 8.000 ejemplares

Distribución:
Quioscos: Meta
Librerías: LOM Ediciones

EDICIÓN CONO SUR

Director:
José Natanson

Redacción:
Carlos Alfieri
Creusa Muñoz
Luciana Garvarino
Nuria Sol Vega
Pablo Stancanelli

Le Monde Diplomatique (Francia)

Fundador:
Hubert Beuve-Méry
Presidente del Directorio y Director de la redacción:
Serge Halimi
Jefe de redacción: Benoît Bréville
Jefes de redacción adjuntos:
Martine Bulard y Renaud Lambert
Encargada de desarrollo y ediciones internacionales:
Anne-Cécile Robert

1-3 rue Stephen-Pichon,
75013 París Francia
Tél.: (33) 53 94 96 21
Fax: (33) 53 94 96 26
E-mail:
secretariat@monde-diplomatique.fr
Internet: www.monde-diplomatique.fr

Difusión

Ediciones internacionales de Le Monde Diplomatique

ALBANIA Y KOSOVO. Mensual, editado por Bota Diplomatike, Eduard Lir, Nr 50, Ap.10, 10000 Prishtina, Kosovo. 500 ejemplares (Friedrich)

ALEMANIA. Die Tageszeitung. (Friedrichstraße 21, 10969 Berlín); 80.000 ejemplares, supl. mensual. www.monde-diplomatique.de

BRASIL. Palavra Livre (Rua Araújo 124, São Paulo); 30.000 ejemplares, mensual.

BULGARIA. Les Amis du Monde diplomatique. (Rakovski 78, 1000 Sofía); 6.000 ejemplares, suplemento de Duma.

CHILE. Editorial "Aún Creemos en los Sueños" (San Antonio 434, Local 14, Santiago); mensual, 8.000 ejemplares. www.lemondediplomatique.cl

COLOMBIA. Tebeo Comunicaciones S.A. (Avenida 19, N° 4-20, Bogotá); 6.000 ejemplares, mensual.

COREA DEL SUR. Sociedad Le Monde Corea. (Seúl); 5.000 ejemplares, mensual.

ESLOVENIA. Novinarski Klub. (Tavcarjeva 15, Ljubljana, Eslovenia); 1.000 ej., mensual.

ESPAÑA. Ediciones Cybermonde SL. (Aparisi i Guíjarro N° 5, 2º, 46003, Valencia); 30.000 ejemplares, mensual.

GRECIA. Avgi. (Agiou Konstantinou 12, 10431 Atenas); 10.000 ejemplares, suplemento semanal, www.monde-diplomatique.gr

HUNGRÍA. Edición electrónica difundida por Közép-Európai Fejlesztési Egyesület, Múzeum u. 7. Kossuth Klub, Budapest). www.magyardiplo.hu

INDIA. Hard News. (Gautam Nagar 110049, Nueva Delhi); 40.000 ejemplares, suplemento mensual en inglés.

IRÁN. Sedaye Edalat. (60/6 rue Sarve, Ave Vali Asr, Teherán); 5.000 ejemplares, suplemento mensual.

IRLANDA. Village. (44 Westland Row, Dublin 2); suplemento semanal en inglés.

ITALIA. Il Manifesto. (via Angelo Bargonzi 8, 00153 Roma); 49.000 ejemplares, suplemento mensual.

LUXEMBURGO. Tageblatt. (44, rue du Canal, 4050 Esch-sur-Alzette); 30.000 ejemplares, suplemento mensual en alemán.

GRAN BRETAÑA Y MUNDO ANGLÓFONO. Edición mensual, 5.000 ejemplares. https://mondediplo.com.

MUNDO ÁRABE. La versión árabe es editada por la Sociedad Nouvelles Presses disponible por suscripción (www.editionarabediplo.com); publicada en varios diarios de Medio Oriente, el Golfo y el Magreb.

NORUEGA. Diplo AS. Distribuido en Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca por la Sociedad (Le Monde diplomatique Norge AS, Postboks 33 Grefsen, 0409 Oslo); Mensual 25.000 ejemplares www.lmd.no

POLONIA. Livres et presse. (Rue twarda, 60, Varsovia); 10.000 ejemplares, mensual.

PORTUGAL. Cooperativa Outro Modo, Rua Febo Moniz, nº 13, R/C, 1150-152 Lisboa; 4.000 ejemplares, mensual.

RUSIA. Asociación Le Monde diplomatique rusa. (Kakhovka 9-1-176, 113303, Moscú; ru.mondediplo.com)

SERBIA. Mensual, l'hebdomadaire Nedeljnik. 20.000 ejemplares. www.nedeljnik.rs

SUIZA. El semanario Wochenzeitung. (Hardturmstrasse 66, Postfach 8031, Zurich); 20.000 ej., suplemento mensual.

TURQUÍA. Suplemento mensual del diario Cumhuriyet. Empresa Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık Anonim Şirketi, oficina principal Prof Nurettin Öktem Sok. No: 2 Şişli, Estambul. 50.000 ejemplares.

VENEZUELA. (Cuarta av. Res Unión. Torre B. Local E y F, Caracas), 5.000 ejemplares.

EN INTERNET
Chino: http://cn.mondediplo.com
Esperanto: http://eo.MondeDiplo.com
Inglés: http://MondeDiplo.com
Japonés: www.diplo.jp

Le Monde diplomatique se difunde en 22 idiomas en sus 31 ediciones internacionales

https://www.monde-diplomatique.fr/diplo/int/

Nuevo horario de librería

La librería de *Le Monde Diplomatique* abre con nuevo horario:

De lunes a viernes de **10 a 17:30 horas.**

San Antonio 434 - T: 22 608 35 24

Calendario de fiestas nacionales 1 al 31 de marzo

3 Bulgaria	Fiesta Nacional	17 Irlanda	Fiesta Nacional	23 Pakistán	Fiesta Nacional
6 Ghana	Independencia	20 Túnez	Independencia	25 Grecia	Fiesta Nacional
12 Islas Mauricio	Independencia	21 Namibia	Independencia	26 Bangladesh	Independencia

Suscríbese a Le Monde Diplomatique y sus libros mensuales

Suscríbese con pago automático (PAT) y reciba cada mes *Le Monde Diplomatique* más un libro por \$4.900 mensual.

Periódico y libro en versión digital por \$4.300 mensual con Pago automático con tarjeta

Teléfono: 22 608 35 24

<https://editorialauncreemos.cl/producto/suscripcion-periodico-libro-mensual/>



UdeSantiago Radio

Una emisora con real sentido público y compromiso con la ciudadanía que promueve el debate de los grandes temas país y divulga la ciencia, la cultura y las artes.

Te invitamos a visitar nuestra nueva señal online Escena Viva.

SOMOS TU RADIO UNIVERSITARIA

94.5 FM - WWW.RADIOUSACH.CL

Editorial "Aún Creemos en los Sueños"

La Editorial "Aún Creemos en los Sueños" publica la Edición chilena de Le Monde Diplomatique

Director: Victor Hugo de la Fuente

San Antonio 434 - local 14 - Santiago-Chile

Tel.: (56) 22 608 35 24

E-mail: edicion.chile@lemondediplomatique.cl

www.lemondediplomatique.cl

www.editorialauncreemos.cl

“¡Cállese!”

por Serge Halimi*

El 19 de enero de 2021, once días antes del final del mandato de Donald Trump, e incluso cuando una parte de sus fieles republicanos lo habían abandonado, Twitter decidió cerrar su cuenta, y Facebook suspenderla. Las fechorías del ex presidente no eran sin embargo más letales que las de la Central Intelligence Agency (CIA) u otros jefes de Estado cuyas cuentas nunca se vieron amenazadas: pretender (erróneamente) que su derrota electoral había sido causada por un fraude no era más repudiable que haber amenazado (por Twitter) a Corea del Norte con un ataque nuclear. Y los “discursos de odio” que las plataformas electrónicas le reprochan hoy a Trump, tras haber sacado un enorme provecho de ellos, no igualan la gravedad extrema de aquellos que esas mismas redes “sociales” difundieron en Myanmar o en la India contra las minorías musulmanas. Pero Twitter y Facebook no se caracterizan ni por su co-

herencia ni por su valentía. Animados por la increíble mansedumbre con la cual tanto gobiernos como individuos los han dejado actuar y crecer, supusieron que todo les estaba permitido. Que puedan cerrar la boca al presidente de Estados Unidos expresa la dimensión vertiginosa del poder que han adquirido.

Pero cuando la derecha estadounidense se indigna, uno se ve casi tentado a responderle: ¿acaso no fueron ustedes y sus pensadores de Chicago los que instalaron la idea de que el poder público no debía controlar ni el poder de las empresas ni la fortuna de sus propietarios, legitimados según ustedes por la libre elección de los consumidores (1)? Pues bien, hoy se han vuelto víctimas de ese “populismo de mercado”. La primera enmienda de la Constitución estadounidense protege la libre expresión frente a la censura del Estado federal y los gobiernos locales, pero no de las empresas privadas en situación monopóli-

ca. Su “expresión” es vuestro silencio. *Vae victis*, en suma, y ¡todo el poder a las GAFAM (2) cuando los hacen callar!

Ahora bien, he aquí el otro peligro de la gente peligrosa y las ideas que expresan. Se acepta todo para protegerse de ellas, incluso la suspensión indefinida de las libertades comunes. Pero cuando se trata de combatir las ideas terroristas, racistas, antisemitas, “separatistas”, la guerra nunca se gana, y menos aun se termina, con una capitulación oficial del vencido. Sólo conocerá un estado de excepción que perdura y se endurece. Nada más fácil, en efecto, que identificar un objetivo detestado al que nadie desearía quedar asociado, y luego ampliar continuamente el perímetro de los anatemas y las prohibiciones. Los adversarios de las guerras de Afganistán e Irak fueron calificados de abogados de Al Qaeda; los críticos a las políticas de Israel, de antisemitas; aquellos a los que el sermoneo universitario importado de Estados Uni-

dos abruma, de trumpistas o racistas. En casos semejantes, ya no se busca contradecir a sus adversarios, sino hacerlos callar.

Y fue así, en medio de un silencio preocupante, que el asesinato de Samuel Paty sirvió de pretexto para la disolución del Colectivo contra la Islamofobia en Francia. Como si, día tras día, lejos de ampliar el perímetro de las libertades, la explosión de las comunicaciones instaurara sociedades disciplinarias que nos condenan a ir y venir entre nuestros lugares de encierro. ■

1. Un argumento formulado por el pensador reaganiano William Buckley Jr. Véase Serge Halimi, “El pueblo contra los intelectuales”, *Le Monde diplomatique*, París, edición chilena, mayo de 2006.

2. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft.

*Director de *Le Monde diplomatique*.

Traducción: Gustavo Recalde

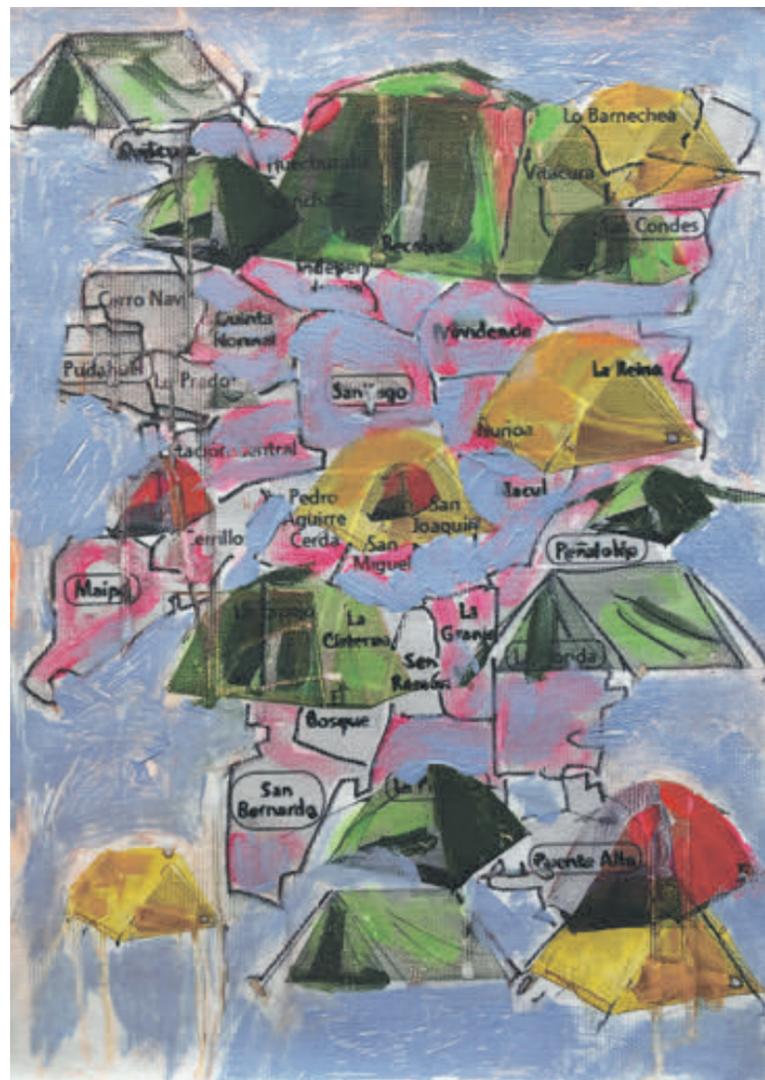
El momento constituyente y la política exterior

por Libio Pérez*

Un antiguo axioma dice que la política exterior de un país refleja sus valores y prioridades internas; por años esa definición dominó el trabajo diplomático de Chile, a partir del término de la dictadura cívico-militar y la necesidad de impulsar una “reinserción en el concierto internacional y resituarse su imagen país”, profundamente deteriorada por los años de autoritarismo, sobre todo por la sistemática violación a los derechos humanos y la persistencia de condenas en organismos multilaterales, como las Naciones Unidas y en cuanto foro mundial que examinara el estado interno de respeto a los derechos básicos.

La reinserción internacional chilena se vio reforzada por los informes de comisiones especiales (Rettig y Valech) que investigaron los crímenes de la dictadura, los juicios y condenas que se multiplicaron tras el arresto del general Augusto Pinochet en Londres, donde estuvo más de 500 días, y al mismo tiempo la política exterior chilena puso en marcha una ambiciosa política de inserción económica que, a la larga, acumuló más de treinta tratados de libre comercio con los principales mercados globales, lo que al final terminó dominando el trabajo de la Cancillería y sus organismos especializados en comercio exterior. Así fue creciendo la imagen de un Chile “Jaguar”, con estabilidad, garantías para las inversiones, libre circulación de capitales, crecimiento sostenido y gobernabilidad política. “Un oasis”, según las palabras del actual presidente.

Para un sector de la alta sociedad, las condiciones internas de Chile comenzaron a ser incompatibles con el retraso de la región, cuyos países en las últimas décadas comenzaron a desarrollar proyectos políticos transformadores y autónomos. En algunos casos estallaron fuertes y delicadas crisis, como en Haití a mediados de los 90, momento en que Chile junto a Brasil con acuerdo de la ONU participa en una vasta operación de paz que duró casi quince años y que llevó a miles de efectivos de las Fuerzas Armadas chilenas a ese país golpeado por una pobreza endémica, con alta inestabilidad política, corrupción y varias veces destruido por fenómenos naturales. La larga permanencia de tropas



Fernanda Levine, *Camping Santiago*, 2019 (Insta: @levineflanagan)

chilenas en Haití explica, en parte, la fuerte corriente migratoria de ciudadanos de ese país hacia Chile.

Solo razones ideológicas hicieron que el gobierno chileno actual impulsara una fuerte política de intervención en Venezuela, al punto que el propio presidente chileno via-

jara hasta la frontera colombo-venezolana para presionar por la caída del gobierno de Caracas. En ese lugar ofreció a Chile como refugio a los opositores, prestó apoyo diplomático al “presidente encargado” Juan Guaidó, y ofreció a los ciudadanos venezolanos una inexistente “visa de responsabi-

lidad democrática”. Según datos obtenidos por el Servicio Jesuita a Migrantes, el 2020 un total de 223.801 venezolanos solicitaron esa visa, pero el gobierno chileno solo otorgó 59.525 (27%), el restante 73% fue rechazado. La señal equívoca de ofrecer ingresos generó la ola migratoria que alcanzó uno de sus momentos más dramáticos en la crisis de Colchane, cuando casi dos mil personas impedidas de ingresar legalmente optaron por los pasos fronterizos ilegales, con riesgo de sus vidas y el colapso del pequeño pueblo nortino de 1.500 habitantes, en su mayoría aymaras.

La crisis migratoria se agudizó con la pandemia, el cierre de las fronteras en la región y el aumento de los flujos migratorios, que el gobierno ha querido saldarlos con las expulsiones masivas como la ocurrida en febrero.

El gobierno de Piñera tuvo una activa participación en el desmantelamiento de algunos organismos regionales que pudieron ser útiles para enfrentar los dos problemas más complejos de estos años: la pandemia global que sigue matando personas y golpeando las economías, y la migración de poblaciones pobres, que además son víctimas de cadenas de tráfico ilegal de personas. El diálogo casi inexistente entre los gobiernos regionales para buscar soluciones compartidas y coordinadas solo han agudizado los problemas, y abrir paso a una suerte de “cada cual resuelve sus dificultades”.

Ya no son tiempos para discursos como el que Chile es una “bonita casa en un mal barrio”, cuando la prioridad es la cooperación regional, para hacer frente a las pandemias (comprar o desarrollar vacunas, por ejemplo), los flujos migratorios, el crimen organizado (como los traficantes de personas o de drogas), los desastres naturales, etc.

El momento constitucional que vive Chile es el oportuno para debatir sobre estos problemas y sus soluciones, con respeto a los derechos humanos, en el que las personas están por sobre el mercado, la independencia por sobre los acuerdos comerciales y un desarrollo no subordinado a los poderes globales. ■

*Editor general de la edición chilena de *Le Monde Diplomatique*.

No hay Carta Magna sin pueblo

Epitafio para una Constitución

por Álvaro Ramis*

Uno de los argumentos que levantan los sectores conservadores durante el actual proceso constituyente consiste en afirmar que redactar una nueva Constitución desde una hoja en blanco implica un “maximalismo refundacional”. Afirman, con arraigo a la historia comparada, que un acierto de los ejercicios constitucionalistas exitosos radica en no desatender la tradición, sino resignificar para satisfacer las necesidades del presente. En esta línea argumental cabe situar a Juan Luis Ossa Santa Cruz (1), quien ha mostrado con mucho detalle y evidencias documentales, la continuidad fundamental que se puede advertir entre las constituciones de 1828, 1833 y 1925.

Acertadamente Ossa sostiene que la Constitución de 1828 puede considerarse como la “columna vertebral de la política chilena del siglo XIX y gran parte del XX”. Su estructura fundamental y su racionalidad de base, síntesis de distintas fuentes teóricas anglosajonas, españolas y francesas, permaneció vigente, más allá de las vicisitudes políticas, por lo cual se podría apreciar en la historia constitucional de Chile un espíritu reformista y gradual que inspiró a las dos constituciones siguientes (1833 y 1925). De esa forma la Constitución de 1833 comienza declarando explícitamente su continuidad con la precedente, al afirmar: “Por cuanto la Gran Convención ha sancionado i decretado la siguiente reforma de la Constitución Política de Chile, promulgada en 1828”. De igual forma la Constitución de 1925 utiliza la misma retórica al afirmar “Por cuanto la voluntad soberana de la Nación, solemnemente manifestada en el plebiscito verificado el 30 de Agosto último, ha acordado reformar la Constitución Política promulgada el 25 de Mayo de 1833 y sus modificaciones posteriores”.

Pero el gradualismo y la continuidad entre estos cuerpos constitucionales debería ser matizado, recordando las profundas rupturas que cada nueva constitución generó en la realidad política del país. En el texto de 1833 se expresó todo el peso de los vencedores de la batalla de Lircay (1830), y más allá de las formalidades jurídicas, el texto constitucional barrió con los liberales, favoreciendo la consolidación del poder conservador, y el establecimiento de gobiernos autoritarios. A modo de ejemplo restableció los mayorazgos, como forma tradicional de heredar los bienes familiares al primogénito, con el fin de asegurar la acumulación de riquezas y perpetuar los privilegios, y eliminó las Asambleas Provinciales, germen de poder local descentralizado, instauradas en la Constitución de 1828.

De la misma forma, la continuidad formal entre la Constitución de 1833 y la de 1925 también se debe analizar asumiendo las evidentes rupturas institucionales y políticas que generó el nuevo texto constitucional, una vez que entró plenamente en vigencia a fines de 1932, con la elección de Arturo Alessandri Palma como Presidente. Entre 1932 y 1973 Chile evolucionó hacia la instauración de derechos sociales, impensables en el marco de la Constitución anterior. Como señala Christian Viera: “La Constitución de 1925 es la que más se acerca a una Constitución con componentes sociales ya que en el caso de la propiedad se le otorga a esta última una función social que no se agota en la utilidad pública o el interés general, ya que también se señala como propio de esta función el mejor aprovechamiento de las fuentes y energías productivas en el servicio de la colectividad y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes” (2). De igual forma la Constitución de 1925 es una clara ruptura en materias



Elvira Valenzuela, Contención develada V (Mármol Brescia y acero inoxidable), 2017 (www.elviravalenzuela.cl)

tales como la separación de la Iglesia del Estado, la protección al trabajo, a la industria y a las obras de previsión social, y en general en la ampliación de la ciudadanía en su sentido integral.

La hoja en blanco en 1980

Más allá de estas observaciones, se puede compartir con Juan Luis Ossa Santa Cruz que en 1833 y en 1925 operó un principio de gradualidad que permitió dar continuidad institucional al país en lo sustantivo. Lo que contrasta con la voluntad decididamente refundacional que asumió la dictadura desde el momento mismo del golpe militar de 1973. Esta ruptura es contradictoria con el discurso que los golpistas invocaron para justificar su acción, ya que en teoría la legitimidad invocada por la Junta de Gobierno radicaba en las supuestas transgresiones constitucionales del gobierno de la Unidad Popular. Paradojalmente, la acción de los golpistas fue totalmente alejada al respeto a la constitución vigente, comenzando por el bando 29, del 14 de septiembre, que clausuró el Congreso Nacional y declaró vacantes los cargos parlamentarios vigentes.

Pero la verdadera ruptura radical y definitiva con la Constitución de 1925 se puede observar en el decreto ley 128, del 12 de noviembre de 1973, cuando declara: “Que la asunción del Mando Supremo de la Nación supone el ejercicio de todas las atribuciones de las personas y órganos que componen los Poderes Legislativos y Ejecutivo, y en consecuencia el Poder Constituyente que a ellos corresponde”. Este decreto se impementó bajo la interpretación de Jaime Guzmán que asumió que la Constitución de 1925 estaba “muerta en la realidad práctica, y lo que es aún más importante, en la mente del pueblo chileno” (3). Se inició así

una construcción de lo que se declaró como el primer año de la reconstrucción nacional, y el inicio de una “Nueva Sociedad”. En un ejercicio de retórica casi jacobina, se instaura una revolución re-institucionalizante, que como señala Ossa: “llevó a cabo un ejercicio refundacional, promoviendo, de arriba hacia abajo y sin la participación democrática, una reconstrucción total y completa del entramado político chileno. De ese modo, al ser ésta una nueva Constitución se lanzaron por la borda décadas de aprendizaje y continuidad”.

La legitimidad de la Junta Militar para atribuirse a sí misma el poder constituyente se debe entender bajo los argumentos que recogieron del Constitucionalista del III Reich, Carl Schmitt, específicamente en su definición de la Dictadura Soberana. Para Schmitt, a diferencia de una “dictadura comisaria”, regulada por necesidades excepcionales previstas en la legislación vigente, limitada y regulada por esta misma vía, una dictadura soberana es un régimen que no posee limitaciones en el ejercicio de su poder: “La dictadura soberana ve en el orden existente, tomado en su conjunto, el estado de cosas al que pretende poner fin a través de su acción. No suspende una constitución en vigencia en virtud de un derecho fundado en esta, es decir, conforme a la Constitución; procura, al contrario, instaurar el estado de cosas que haga posible una Constitución que ella considera como la verdadera. No invoca pues la Constitución en vigor, sino otra que debe establecerse” (4).

De esta manera Schmitt no defiende la comunidad constituida, sino la comunidad que ha de ser constituida, bajo los parámetros que define el detentador fáctico del poder, bajo un criterio fideísta de la verdad: la Constitución será “verdadera” si se atiene a lo que el

detentor del poder constituyente define según su adscripción doctrinal. De esa forma la verdad instalada en la Constitución de 1980 ha impregnado toda su redacción, más allá de las adecuaciones y reformas que se han dado hasta la fecha.

La fallida estocada final

Desde 1990 en adelante la tesis que imperó en los círculos de gobierno y en el Congreso fue la de legitimar, poco a poco, la Constitución “revolucionaria” de 1980. Las continuas y graduales reformas fueron levantando, como si fueran “capas de cebolla”, las distintas formas de “enclaves autoritarios” que se identificaron, siendo la reforma de 2005 la que supuestamente debía dar la estocada final al núcleo pétreo de la Constitución de 1980. Sin embargo, eso no ocurrió. La Constitución mantuvo su racionalidad privatizadora, disgregadora y atomizante de la sociedad. El estallido del 18 de octubre de 2019 fue la consecuencia de la futilidad de las reformas precedentes, que no fueron capaces de desandar el camino instalado políticamente en 1973 y consolidado jurídicamente en 1980.

Tal vez, la ilusión de tantos juristas sinceramente democráticos durante estas últimas décadas fue pensar que el Estado es Derecho, y el Derecho es una realidad autónoma, a pesar de que resulta evidente la dependencia existencial de los hechos jurídicos respecto de los hechos políticos, más allá del lenguaje del liberalismo. Si la validez de los actos del Estado depende de las leyes, y éstas dependen a su vez de la Constitución, lo que ocurrió fue la captura del Estado por un orden jurídico que buscó deliberadamente apartar al pueblo como poder constituyente. Pero en la práctica no hay Constitución sin pueblo, al cual la ficción del orden constitucional de 1980 pretendió eliminar de la existencia política.

La contracara de este ciclo es lo que se aprobó el 25 de octubre de 2020. El 78,24% a favor del Apruebo no se puede interpretar como un mandato de cambio gradualista, que permita la continuidad de la racionalidad fundante de la Constitución de 1980. Recuperar la sana y deseable relación con la tradición constitucional chilena será imposible si no se establece que la última reforma a la Constitución de 1980 es y debe ser la que se originó en el acuerdo político del 25 de noviembre de 2019. Desde ahora, la hoja en blanco es la única posibilidad de enmendar la verdadera ruptura constitucional, que instauró el decreto ley 128, en 1973. La nueva Constitución nacerá de una decisión política. Pero este nuevo decisionismo no se fundará en la verdad revelada o en una teología política como sostenía Carl Schmitt. Surgirá de la voz democrática, plural y polifónica de un pueblo que se dignará escribir, ex nihilo, una nueva Constitución, con toda la memoria, tradición y experiencia acumulada desde su propia historia colectiva, representada en la Convención Constitucional. ■

1. Ossa Santa Cruz, Juan Luis (2020) Chile Constitucional, FCE, Santiago.

2. Viera, Christian (2015) Estado social como fórmula en la Nueva Constitución, originada en democracia. FES, Instituto Igualdad, Facultad de Derecho U. de Chile, Santiago, p. 103.

3. Cfr. Ossa Santa Cruz, p. 80.

4. Schmitt, Carl (1921) La Dictature, Seuil, Paris, p. 142.

*Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano

Un giro que produjo un fracaso táctico y estratégico a la política del gobierno

La guerra de las drogas en La Araucanía

por Ibán de Rementería*

Después del fracaso de la guerra contra la “subversión” mapuche en el Walmapu, asoman nuevas políticas de control del orden público. Allí destaca el fiasco de la Operación Huracán, que de sofisticada operación de inteligencia simplemente mostró ser un vulgar montaje inexperto, lo cual en el pasado gobierno golpea al sistema de inteligencia de la policía de Carabineros, en marzo de 2018. Este deterioro culmina a inicios de este gobierno con el asesinato de Camilo Catrillanca en su comunidad de Temuicui por una patrulla de Carabineros, el 14 de noviembre de 2018. Estos dos hechos señalaron claramente al gobierno que esta fuerza policial no podía seguir a cargo del control del asunto mapuche.

La más reciente participación de Carabineros en el control del orden público en la Araucanía termina con la muerte de cabo 2º Eugenio Nain Caniumil (24) en medio de una emboscada protagonizada supuestamente por diez desconocidos tras un corte en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 682, al sur de la comuna de Padre Las Casas, el 30 de octubre del 2021.

El gobierno cambia de estrategia y de ejecutor de esta en el Walmapu, ahora se implementará una guerra contra el narcotráfico en ese territorio, asimismo su brazo ejecutor será la Policía de Investigaciones (PDI). El primer objetivo escogido es la comunidad de Temuicui y el momento considerado oportuno para actuar, por coincidencia, es el mismo día en que la justicia dictaba sentencia por el crimen de Catrillanca, el 7 de enero de este año.

Aquí el gobierno hace suya la estrategia ya empleada en otros países de América Latina donde la incapacidad de controlar a los “movimientos subversivos” ha consistido en convertir esos intentos en guerras contra las drogas, lo cual se ve facilitado por el hecho real de que algunos movimientos otorgan protección a cambio de pagos (“gramaje”), tanto a los campesinos que producen las materias primas básicas (cultivos de cannabis para obtener marihuana, de coca para cocaína, de amapola para heroína), como a los acopiadores locales y los contrabandistas internacionales, los narcos. Además, esta narcotización de los asuntos de orden público tienen la ventaja de poder contar con la cooperación internacional antidrogas, tanto bilateral, especialmente de los EEUU, como la multilateral de las Naciones Unidas. Así se ha hecho en Colombia, Perú, Nicaragua y Paraguay. Asimismo, se cuenta con la supuesta legitimidad que da la lucha contra “el flagelo de las drogas”.

En las zonas urbanas

Por lo demás, bien sabemos que la guerra de las drogas también ha servido para controlar el orden público en barrios conflictivos y resistentes en su pobreza y abandono, tales ha sido los casos de la comuna nororiental de Medellín en Colombia, en las favelas de Río de Janeiro en Brasil, de todo un país como es el caso de la guerra contra las *Maras* en El Salvador, que es una guerra contra los jóvenes pobres, o nuestro ejemplo para mostrar en el caso de la Legua de Emergencia, a minutos del centro de Santiago.

Los primeros resultados de la narcotización de la guerra del Walmapu han sido cuando menos deplorables, en dos sentidos, tanto en lo táctico y en lo estratégico, como en lo comunicacional y lo político. La primera participación masiva de la PDI en la guerra de Walmapu consistió, el pasado 7 de enero, en la movilización 850 hombres y mujeres que tendrían por misión allanar 31 domicilios en la comunidad de Temuicui para confiscar allí drogas, armas y municiones, así como detener a las personas sorprendidas con estas tenencias ilícitas. El resultado fue el decomiso de un poco más de mil plantas de marihuana, una subametralladora UZI, otras nueve armas de fuego, 12 millones de pesos en efectivo y dos mujeres detenidas, estos magros resultados se obtuvieron al costo de la muerte del inspector de la PDI, Luis Morales Balcázar, y otros diez funcionarios heridos, en un enfrentamiento a tiros durante el allanamiento.

La nula capacidad de respuesta de 850 efectivos armados a cualquier contraataque por parte de un contingente de narcotraficantes o subversivos, que no podían ser superiores en número ni con mayor poder de fuego al de las fuerzas del orden, hace suponer que tal contingente simplemente entró en la confusión de la “niebla

de la guerra” y optó por abortar el operativo para evitar daños mayores, como es sabido la niebla de la guerra en un operativo es el resultado de serias fallas de inteligencia y planificación de operaciones. El fracaso táctico es claro. Además, otros hechos colaterales como la detención con “exceso de uso de la fuerza” de la hija de Catrillanca y su madre, así como la oportunidad del día escogido, el momento de la sentencia del crimen de Catrillanca, dan una imagen penosa de la intervención en lo comunicacional, que es en estos casos el aspecto estratégico central para mostrar, tanto del dominio sobre el territorio como del control del orden público en el mismo.

Operación comunicacional

Este fracaso táctico y estratégico ha tratado de ser suplido mediante una operación mediática que articula la respuesta de las organizaciones mapuches a la acusación de estarse convirtiendo en productores y traficantes de drogas, lo que rechazan categóricamente y con la finalidad de diferenciarse radicalmente de esas actividades ilícitas se proponen la creación una fuerza policial mapuche, propuesta hecha en el *Lef Trawün* (reunión de emergencia), del 18 y 19 de enero pasado, cuando los integrantes de las comunidades mapuches de Chacaico, Huañaco Millao, Temuicui, Pancho Curamil y Coñomil Epuleo entregaron un comunicado donde se refirieron a su rechazo a los cultivos y tráfico de drogas y explicitaron las medidas que adoptarán para su control, entre ellas la creación de una “Policía Comunitaria Mapuche”.

La respuesta a esta propuesta comunitaria mapuche del control del delito no ha provenido del gobierno u otra institución del Estado, sino que de un representante político local y un actor de la academia universitaria, el ex fiscal regional de la Araucanía hasta el 2013, Francisco Ljubetic quien en *El Mercurio* (23.01.2021) manifiestan que: “..., este cuerpo de vigilancia ‘responde a la lógica de una guerrilla entrenada y organizada’... ‘que ya estaría en actividades y cuyo ‘estreno, a plena luz del día, se produjo el 14 de noviembre’ cuando un grupo de unos 40 encapuchados armados se enfrentó a carabineros en la ruta 5 Sur...’este mismo grupo fue el que repelió el operativo de la PDI’ del 7 de enero, en que murió un detective”... “el grupo ‘logro hacer frente a un contingente de 850 PDI, mantener el fuego constantemente y lograr el retiro de los agentes del Estado’”. Por su parte: “El diputado RN de la zona, Miguel Mellado coincide con Ljubetic y afirma que la ‘denominada comunitaria mapuche fue la que recibió el operativo de la PDI, en el que murió un detective, y el Estado se debe dar por notificado de que tiene alto poder de fuego’”. Como se puede ver esta no es solamente una respuesta de la institucionalidad contra del delito y el crimen organizado, es, además, una respuesta política en contra de la resistencia mapuche.

Finalmente, hay que preguntarse qué se esconde, qué es lo que se intenta tapar con esta ofensiva mediática. ■

*Observatorio de Gobierno del Miedo, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

INCAUTACIONES RECIENTES DE PLANTACIONES DE MARIHUANA

En esta relación informativa no exhaustiva se consideran las principales incautaciones de cultivos de marihuana entre lo corrido de los años 2020 y éste, no se contemplan ni los pequeños cultivos, ni los cultivos en recintos cerrados (in door), tenemos lo siguiente:

Fecha	Lugar	Fuente	Cantidad de plantas	Personal empleado
06/02/2020	Petorca	El Observador	3.503 plantas	No se especifica
11/07/2020	La Ligua	El Diario de la Ligua	3.640 plantas	No se especifica
02/11/2020	La Ligua	La Tercera	No se especifica	100 carabineros
09/11/2020	Atacama	Nostalgica.cl	1.253 plantas	No se especifica
04/01/2021	Choapa	El Día	3.000 plantas	No se especifica
08/01/2021	Temuicui	Araucanía diario	1.277 plantas	850 detectives
08/01/2021	Zapallar	Biobio.cl	3.600 plantas	No se especifica
22/01/2021	O'Higgins	24 horas	13 mil plantas	No se especifica
12/02/2021	San Felipe	Carabineros	2.783 plantas	No se especifica
17/02/2021	Los Vilos	El Diario Los Vilos	7 mil plantas	No se especifica

En casi ninguna de las noticias sobre incautaciones de cultivos de marihuana se indica el contingente policial empleado, excepto en el caso de la Ligua el 02/11/2020 donde se señalan 100 carabineros, pero en plantas se afirma miles de ellas sin especificar la cantidad. En el caso de Temuicui donde el número de detectives empleados fue de 850, solo se informó después. En todo caso, tampoco se indica que en esos operativos se hayan empleado contingentes extraordinarios, menos aún de una cantidad tan relevante como la usada en Temuicui.

Más allá de los galardones académicos

Liceos “emblemáticos”: Un motor de cambios sociales

por Marianela Aravena Garrido*

En el estreno de la nueva prueba de transición (PDT) de ingreso a la universidad, se mantuvo la brecha en la desigualdad educativa del país, a tal punto que este era uno de los principios a resolver por la PDT, pero no logró y las diferencias educativas han sido sumamente notorias en los puntajes de los 100 establecimientos con puntajes más altos en el país, donde los conocidos liceos “emblemáticos” (1) han quedado fuera de este ranking, a pesar de su centenaria historia de buenos resultados académicos, que permitieron a una gran masa de generaciones que pasaron por estas aulas e ingresar a prestigiosas universidades del país y así “ascender” socialmente, mientras la mayoría de los jóvenes no tenía ese privilegio. ¿A qué se debe la “merma académica en la PDT” de los estudiantes de estos establecimientos?

La respuesta está en las condiciones de vida de gran parte de la población chilena y más aún de aquellos que estudian en colegios municipalizados, incluyendo a los estudiantes de los liceos emblemáticos, quienes en su mayoría viven en casas de pocos metros cuadrados, donde compartieron sus estudios online con el teletrabajo o la cesantía de sus padres, en cuyas casas no hay más de dos computadores, que debieron intercambiar con el trabajo desplegado por sus padres y los estudios de sus hermanos, con un ruido constante y el hacinamiento.

Claramente, el contexto de pandemia no era el mejor para el estudio de los estudiantes “mateos” o “brillantes” de la educación pública, pues no pudieron sacar a relucir todo su potencial por las condiciones materiales que lo acompañan en sus hogares. Más bien sacó a relucir su verdadero origen de precariedad, aquel que los motivó a movilizarse desde el Mochilazo de 2001, próximo a conmemorar 20 años en abril.

La municipalización

Han sido las mismas desigualdades educativas y las desigualdades sociales existentes las que han ido acabando con un sistema educativo que ya no da más, que viene arrastrándose desde la implementación de la educación subsidiada por bonos de asistencia pagados a las municipalidades desde los años ochenta, motivos por los que los estudiantes secundarios de esos años se movilizaron, hasta incluso profetizaron que con la municipalización aumentarían las brechas educativas, tal como lo dicen las palabras de un recordado ex dirigente secundario de los ochenta Juan Alfaro, expresidente del Liceo de Aplicación y de la Federación de Estudiantes Secundarios (FESES) en la Revista Basta en junio de 1986 (citado por Rolando Álvarez):

“La municipalización sigue la privatización, es decir, cuando la municipalidad no pueda seguir manteniendo a los Liceos, estos pasarán a manos privadas. Nos afecta en cuanto a la calidad de la educación que recibimos, que se supedita a los medios con que cuenta una determinada municipalidad, por lo tanto, la educación va a ser más clasista aún, porque evidentemente la educación en Las Condes va a ser muy distinta a la de Pudahuel” (2).

Tan proféticas parecen ser estas palabras, que el análisis hecho empezó a ser interpretado como un hecho y como una

realidad consumada a revertir por los estudiantes de los Liceos públicos tradicionales de Santiago, de fines de los noventa y principios del 2000, por medio de agrupaciones secundarias que recordaron la lucha educativa de los ochenta, como el colectivo Rafael Vergara en el Liceo de Aplicación en 1998 y 1999, siendo uno de los primeros en discutir sobre las problemáticas educativas que los aquejan a los estudiantes de su establecimiento del país (3).

No es extraño, que de estos colectivos emergiera la idea de generar un movimiento estudiantil que congregará masas y que no se quedará atomizado en los liderazgos y acuerdos partidistas, sino que fuese una instancia nacida desde las bases. Por eso, los mismos dirigentes secundarios que conducían la Federación de Estudiantes Secundarios (FESES) la autoeliminaron e impulsaron la creación de otro tipo de organización más asamblearia, naciendo el colectivo CREAM, donde nace la idea de crear la ACES, todo durante el segundo semestre del año 2000 (4).

Las movilizaciones

La recién nacida ACES fue partícipe del primer periodo de grandes movilizaciones en la transición, el “Mochilazo” en abril del 2001, evidenciando en el discurso la necesidad de un Estado más presente en materia educativa, donde solicitaron la entrega pronta del pase escolar, debido a que el gremio de transportistas no lo entregó cuando correspondía, por lo que el Estado debía velar por el derecho de la rebaja escolar, por eso el petitorio fue hecho al Ministerio de Educación y no al gremio de transportistas, porque el conflicto suscitado en torno a la tarjeta estudiantil era concebido como un derecho social de responsabilidad estatal y no un conflicto entre privados (5).

En relación con lo expuesto, desde el Colectivo CREAM en marzo de 2001, escribieron un artículo donde criticaban la ausencia de un rol educativo por parte del Estado y explicitaron la estrategia a seguir para el movimiento estudiantil del siglo XXI:

“Lo que se busca es una privatización paulatina de la educación pública, es por eso que como revolucionarios y secundarios debemos llevar a cabo una férrea defensa de la educación pública, profundizando las demandas por una educación gratuita y de calidad en todos sus niveles” (6).

Fue esta interpretación, la que adoptó la ACES y otras organizaciones secundarias, las que impulsaron el debate en torno al sistema educativo, impulsando el debate frente al rol del Estado en materia educativa, por lo que las demandas pasaron de una entrega efectiva del pase escolar a demandas sistémicas, cuyo fin era el fin de la municipalización y el fin del sistema de *vouchers*, demanda visiblemente hegemónica en el accionar colectivo desde 2002 en adelante (7), cuya mayor visibilidad fue en la Revolución Pingüina de 2006 y en el masivo movimiento estudiantil de 2011. Sumándose otras necesidades al petitorio que se repetían y estaban presentes en todo el país, tal como fue la necesidad de mejora de la infraestructura escolar.

Otro aspecto a considerar, es el rol histórico de los principales artífices de los orígenes del movimiento estudiantil del siglo XXI, los estudiantes de liceos emblemáticos, han sido protagonistas de las principales jornadas de movilización del país, como su participación en la Revolución de la Chaucha en agosto de 1949, en las movilizaciones de abril de 1957, más conocida como la “Batalla de Santiago”, en el auge de la FESES (Federación de Estudiantes Secundarios) en los sesenta y setenta, en las jornadas de protesta y movilizaciones estudiantiles acontecidas entre 1983 y 1987, nacidas en liceos poblacionales hasta concentrarse en los sectores “céntricos de la capital”, cuyo epicentro fue el Liceo de Aplicación (8).

Si no fuera poco, fueron estos mismos establecimientos, los que iniciaron las movilizaciones previas a la revuelta social de octubre de 2019, por lo que podríamos decir, que gran parte del Movimiento Estudiantil que se forjó en los Liceos Públicos tradicionales de Santiago, fue partícipe de los principales hitos sociales del siglo XX y el causante del despertar social del Chile del siglo XXI.

La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es que justo en estos establecimientos no tan solo asistían los estudiantes con mejores galardones académicos de la educación pública, sino que también los cerebros más inquietos de los sectores populares, una especie de vanguardia, con un análisis más agudo de su propia realidad, a tal punto, de develar los elementos que afligen al sistema educacional.

Pateando piedras

Eran estas problemáticas, las vivencias experimentadas por ellos mismos, como los largos viajes cruzando todo Santiago para asistir al liceo desde las 6 de la mañana para ingresar a las aulas minutos antes de las 8 de la mañana, más la realidad que ellos observaban las precariedades educativas que vivían sus familiares, hermanos y amigos que no pudieron asistir a las aulas de estos liceos, la que los ayudó a empatizar y sentirse parte de esta precariedad. Como muy bien dice la canción de Los Prisioneros, no les gustaba que los suyos se quedaran pateando piedras, mientras ellos eran “la rareza” y los “privilegiados” de los estratos más populares y así y todo asumen que tenían carencias académicas para desempeñarse en la universidad, pues mucho de sus colegios no tenían laboratorios, ni computadores y menos aún tener esos implementos en sus propias casas.

Su rol histórico no es académico, si no propiciar los procesos de cambio del país, así lo han hecho desde fines del siglo XIX, a mediados del siglo XX y en nuestro presente en el siglo XXI. Su trayectoria mirada desde la larga duración, desde el diseño de estos establecimientos, ha sido para defender el Estado Docente, siendo este último aspecto el principal objetivo de su nacimiento, ideario que mantuvieron a pesar del paso del tiempo y de los cambios sociales experimentados en sus aulas, desde el paso de estudiantes pertenecientes en su mayoría a la elite, hasta un proceso de heterogeneidad de sus aulas, las que se han ido proletarizando al paso del tiempo, creciendo el alumnado de origen popular (9) hasta el día de hoy.

Al fin al cabo, estos establecimientos fueron los primeros en desarrollar un movimiento social para advertir que las cosas no estaban bien, cuestionaron la constitución de 1980, el Estado Subsidiario y por eso ahora estamos en proceso de cambiarla. Son un patrimonio vivo educacional y del movimiento social, años de historia que no se acaban con la caída de los resultados académicos, los objetivos cambian y las condiciones materiales para desarrollar su proceso educativo también, hechos que van en directa relación con la “proletarización” de su alumnado. La dificultad que viven hoy los liceos “emblemáticos” es parte de la misma crisis que vive la educación pública en su conjunto, por eso han levantado la bandera de un mayor rol social del Estado y el fin al Estado Subsidiario. ■

1. Instituto Nacional, Liceo Carvajal de Prat, Liceo José Victorino Lastarria, Liceo 1, Liceo de Aplicación, etc.

2. Revista Basta, Santiago, (72): 3, junio 1986, citado en Álvarez, Rolando. *El Movimiento Estudiantil Secundario Bajo Dictadura y las Juventudes Comunistas: Un caso de Radicalización de Masas en Chile (1983 - 1988)*, Revista Movimientos Sociales (1): 11 - 40, Universidad Bolivariana. Octubre 2007.

3. ARAVENA, Marianela. *La influencia del Pasado en la Construcción de la Identidad y las Motivaciones del Movimiento Estudiantil Secundario en los Liceos Públicos Tradicionales de Santiago, 1998 - 2005*. Tesis para optar al título de Magíster en Historia guiada por María Elisa Fernández, Santiago, Chile. Universidad de Chile, Escuela de Postgrado, Facultad de Filosofía y Humanidades, 2014.

4. *Ibidem*.

5. *Ibidem*.

6. Sobre el Financiamiento Compartido”. Revista Creando, del colectivo CREAM, año 1, número 1, marzo de 2001. Pág. 5.

7. ARAVENA, Marianela. *La influencia del Pasado en la Construcción de la Identidad y las Motivaciones del Movimiento Estudiantil Secundario en los Liceos Públicos Tradicionales de Santiago, 1998 - 2005*. Tesis para optar al título de Magíster en Historia guiada por María Elisa Fernández, Santiago, Chile. Universidad de Chile, Escuela de Postgrado, Facultad de Filosofía y Humanidades, 2014.

8. MILOS, Pedro. *Historia y Memoria, 2 de Abril de 1957*. Santiago, LOM Ediciones. 2007; MILOS, Pedro. “Participación de los Estudiantes en los Sucesos del 2 de Abril de 1957 en Santiago”. Revista Movimientos Sociales (1): 53 - 78, Universidad Bolivariana. Octubre 2007; RUIZ Schneider, Carlos. *De la República al Mercado, Ideas Educativas y Política en Chile*. Santiago, LOM Ediciones, 2010; ROJAS, Jorge. *Moral y Prácticas Cívicas en los Niños Chilenos, 1880 - 1950*. Santiago, Editorial Ariadna. 2004; ROJAS, Jorge. “Los Estudiantes Secundarios Durante la Unidad Popular, 1970 - 1973”.

Revista Historia, del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile Vol. II (42): 471 - 503, julio - diciembre 2009; ARAVENA, Marianela. *La influencia del Pasado en la Construcción de la Identidad y las Motivaciones del Movimiento Estudiantil Secundario en los Liceos Públicos Tradicionales de Santiago, 1998 - 2005*. Tesis para optar al título de Magíster en Historia guiada por María Elisa Fernández, Santiago, Chile. Universidad de Chile, Escuela de Postgrado, Facultad de Filosofía y Humanidades, 2014.

9. ARAVENA, Marianela. *La influencia del Pasado en la Construcción de la Identidad y las Motivaciones del Movimiento Estudiantil Secundario en los Liceos Públicos Tradicionales de Santiago, 1998 - 2005*. Tesis para optar al título de Magíster en Historia guiada por María Elisa Fernández, Santiago, Chile. Universidad de Chile, Escuela de Postgrado, Facultad de Filosofía y Humanidades, 2014.

10. ARAVENA, Marianela. *La influencia del Pasado en la Construcción de la Identidad y las Motivaciones del Movimiento Estudiantil Secundario en los Liceos Públicos Tradicionales de Santiago, 1998 - 2005*. Tesis para optar al título de Magíster en Historia guiada por María Elisa Fernández, Santiago, Chile. Universidad de Chile, Escuela de Postgrado, Facultad de Filosofía y Humanidades, 2014.

*Historiadora Social. Magíster en Historia Universidad de Chile; estudiante del Magíster en Ciencias Sociales. Mención Sociología de la Modernización Universidad de Chile.

Una discusión desigual

El retorno a clases presenciales

por Dante Castillo* y Mario Torres**

En sociedades como la chilena, la característica principal es la desigualdad estructural. Ella es el residuo que nos deja el funcionamiento natural del modelo de crecimiento neoliberal, expresado en una educación de mercado. Por lo tanto, cualquier análisis de procesos o fenómenos sociales debieran partir de esta constatación, de lo contrario, se corre el riesgo de enfrascarnos en discusiones espurias y retóricas, las que generalmente finalizan en peleas personales entre autoridades y actores carismáticos. Por consiguiente, en el caso chileno, tal como se debe hacer con cualquier tema en disputa, el retorno a clases presenciales se inicia con la constatación que esta temática está cruzada por la desigualdad y la inequidad.

Una forma de analizar la apertura de los colegios a las clases presenciales considerando la condición innata de la desigualdad, consiste en examinar los diversos discursos que están en competencia y los factores que se asocian a la pertinencia del retorno al aula escolar. El primero de ellos, dice relación con la relevancia educativa y pedagógica de las clases presenciales versus las clases virtuales.

La calidad estaría dada por la presencialidad. Es así como, los especialistas educacionales sostienen que el retorno de los estudiantes a clases presenciales debe concretarse lo antes posible, ello debido a las limitaciones didácticas que acarrea el sistema de enseñanza a través de Internet y de soporte virtual. Sin embargo, este diagnóstico no es completamente exacto, pues al considerar la desigualdad estructural de nuestro sistema social, para no todos los actores escolares la educación virtual es un desastre. De hecho, desde hace décadas se están probando y perfeccionando modelos educativos basados en educación virtual y a distancia. En Chile existen programas y planes de estudios que se están impartiendo basados completamente en didácticas virtuales. Lo más reconocido son las ofertas de formación profesional y universitaria. A la fecha, las instituciones de educación superior cuentan con carreras de pregrado, diplomados, magister y doctorados basados exclusivamente en una oferta virtual y a distancia. Es una tendencia que antes de la crisis sanitaria, ya se estaba consolidando en las instituciones nacionales a la luz de la tendencia internacional.

A partir de estas evidencias, no es posible sostener que las clases presenciales son completamente preferibles a las virtuales, en términos de la calidad del servicio. Para ello es necesario tomar en cuenta las diferencias entre los diferentes niveles formativos y entre las desigualdades de recursos para financiar los soportes tecnológicos que se requieren. La continuidad pedagógica basada en los recursos virtuales fue un desastre durante el año 2020, en la medida que mostró la peor cara de la desigualdad socioeducativa. El trabajo escolar basado en recursos virtuales dispuestos en los hogares aumenta, las desigualdades entre estudiantes pobres y ricos. La crisis sanitaria deja de manifiesto la fractura intrínseca



Francisca Cerda, Interior vendado, 2017 (Gentileza Galería Artespacio)

de nuestra sociedad. Las diferencias entre los niños más vulnerables y los menos vulnerables de nuestro sistema escolar, sigue determinando el éxito o el fracaso de cualquier innovación pedagógica.

Desde el punto de vista del factor sanitario, el retorno a clases está mediado por la seguridad de las relaciones presenciales entre el estudiantado y el profesorado. La preocupación está asociada a los mecanismos que aseguran la interacción física y el avance en la vacunación e inmunización contra Covid. Respecto de lo anterior, un retorno a las clases presenciales implica, en primer lugar, garantizar medidas de prevención del contagio. Bajo este criterio se propone una gradualidad del regreso y una rotación entre el sistema presencial y virtual. Ello implica establecer un sistema de control, monitoreo y diálogo permanente, que incorpore las opiniones de las autoridades, el profesorado, los asistentes de la educación, apoderados y estudiantes.

Neutralidad técnica

En base a las evidencias internacionales, este discurso apela a una neutralidad técnica del factor sanitario. Es por ello que se propone que las autoridades debieran dejar de lado cualquier disputa ideológica que pueda dividir y cortar los canales de diálogo constante entre los diversos actores. De esta manera las autoridades políticas nacionales deberían asumir un liderazgo en constante comunicación entre los actores, uno que permita asegurar el control de los contagios. No obstante, durante todo el año 2020 y durante los primeros meses de este 2021, las autoridades del Ministerio de Educación han mantenido un discurso ideológico, marcado por tintes de autoritarismo y poca capacidad de escuchar a quienes discrepan de las fechas del retorno seguro que promueven estas autoridades. Prueba de ello es la reiterada estrategia política que utilizan las autoridades ministeriales cuando desprestigian a los dirigentes del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. Ha sido frecuente el esfuerzo permanente que busca señalar que los dirigentes no representan el sentir del profesorado nacional. Lo anterior se explica en gran parte, porque en opinión de los representantes del gremio, el retorno a clases debe evitar el con-

tagio del Covid-19 entre el profesorado, estudiantado y los y las apoderados. Es por esta razón que en reiteradas oportunidades estos dirigentes gremiales han propuesto que el retorno seguro está mediado por comunas o regiones que se encuentren en la fase cuatro del plan Paso a Paso liderado por el Ministerio de Salud.

Ahora bien, cuando incluimos la variable de la igualdad y la equidad en este factor sanitario del retorno a clases, es posible advertir que una vez más, los significados o las creencias respecto de la prevención de contagios, está atravesada por la posición que los actores ocupan en este jerarquizado y piramidal sistema social. En primer lugar, las instituciones educativas cuentan con recursos e implementación desigual de equipamientos e infraestructura que permita un distanciamiento social efectivo. Casi la totalidad de las escuelas y liceos que atienden a los y las estudiantes que provienen de los sectores más vulnerables del país, no contarán con escudos y escritorios con separadores transparentes, tal como se observa en las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Lo más probable es que el único mecanismo consistirá en unas marcas de tiza que marcarán el perímetro de cada pupitre. Junto a ello, es imposible pensar en que las salas de clases contarán con recursos para financiar permanentemente el alcohol-gel que requieren las salas de clases si, las escuelas prácticamente nunca han contado con jabón en los baños para el estudiantado. En las escuelas públicas y en aquellas que atienden a la mayoría del estudiantado nacional, los únicos artículos de higiene son los que proporcionan los apoderados y los que voluntariamente proporcionan los y las profesoras. Sólo un grupo de instituciones educativas que atienden a los sectores sociales más acomodados, lograrán equiparar las condiciones de seguridad sanitaria que se observan, por ejemplo, en los países europeos.

A lo anterior se agrega el hecho acreditado, que en la actualidad nuestra ciudadanía tiene una delicada condición sanitaria de base. Gran parte de la población, en la que se incluyen las o los profesoras, cuentan con una patología que se asocia a los factores de riesgo de la enfermedad por Covid-19. Chile es reconocido por la alta tasa de obesidad de su

población y por la prevalencia de enfermedades metabólicas y de autoinmunidad. Una vez más, esta característica que vincula a la posición que ocupa cada individuo en la pirámide social. Tanto a nivel nacional como internacional, los antecedentes señalan que los grupos socioeconómicos más altos muestran mejores indicadores de salud. Dicho de otro modo, la seguridad sanitaria también estará mediada por la desigualdad socioeducativa.

“Trinchera política”

Es por lo que las asociaciones de colegios particulares, como la FIDE o la CONACEP, también critican permanentemente al Colegio de Profesoras y Profesores, en medio de la discusión por el retorno a clases, señalando que su llamado a abrir escuelas en “fase 4”, es solo una “trinchera política”, para oponerse al retorno a clases presenciales bajo las condiciones que promueve el Ministerio de Educación. Sin embargo, su apelación también agrega el factor de la preocupación por la calidad del servicio educativo. Desde esta óptica, la brecha de desigualdad en los aprendizajes se acrecienta cuando hay alumnos que tienen educación presencial y otros se quedan en clases virtuales. Desde esta perspectiva, es urgente que los alumnos vuelvan a las clases presenciales, dado que ya es posible asegurar las condiciones de seguridad sanitaria. En una entrevista reciente, el presidente de la FIDE señaló que “si nos mantenemos indefinidamente en una gestión que no sea presencial, indiscutiblemente que los niveles de aprendizaje necesarios van a perjudicar, especialmente a los niños que están en situaciones más vulnerables”. Bajo esta óptica, es absolutamente necesario pensar que si las condiciones han mejorado es urgente volver a la presencialidad. En principio, esta afirmación puede ser correcta, sin embargo, la desigualdad influye determinadamente en las condiciones de seguridad sanitaria que permitan un retorno a clases.

Por último y sin lugar a duda, la desigualdad donde mejor se expresa la desigualdad es en el factor económico. Es por ello que no es de extrañar que, para una parte del sentido común, formado con criterios neoliberales, la “resistencia” de algunos sectores, para cumplir con la agenda del Ministerio de Educación, se explica por la “flojera” de los profesores y especialmente de la de sus dirigentes. Al respecto cabe recordar la tensión entre el Colegio de profesores y el ministro de Economía. Hace un tiempo atrás, las palabras del ministro de Economía Lucas Palacios, generaron rechazo cuando manifestó que llamaba la atención que los y las profesoras busquen por todas las formas evitar trabajar. Es indudable que detrás del diagnóstico del ministro de Economía, está la preocupación por la reactivación económica que se asocia a la apertura de las instituciones educativas. No hay que olvidar toda la infinidad de actividades y sectores económicos que siguen paralizados mientras no se active la presencialidad en la educación.

Pero sea cual fuere el factor que se atienda para argumentar a favor o en contra del retorno a clases presenciales, indudablemente estas reflexiones deben incorporar la característica de la desigualdad congénita de nuestra sociedad de mercado. ■

*Investigador PIIE.

**Vicerrector de la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Vinculación con el Medio. UTEM.

Un proceso de aculturación vigente

El mapuche en la ciudad

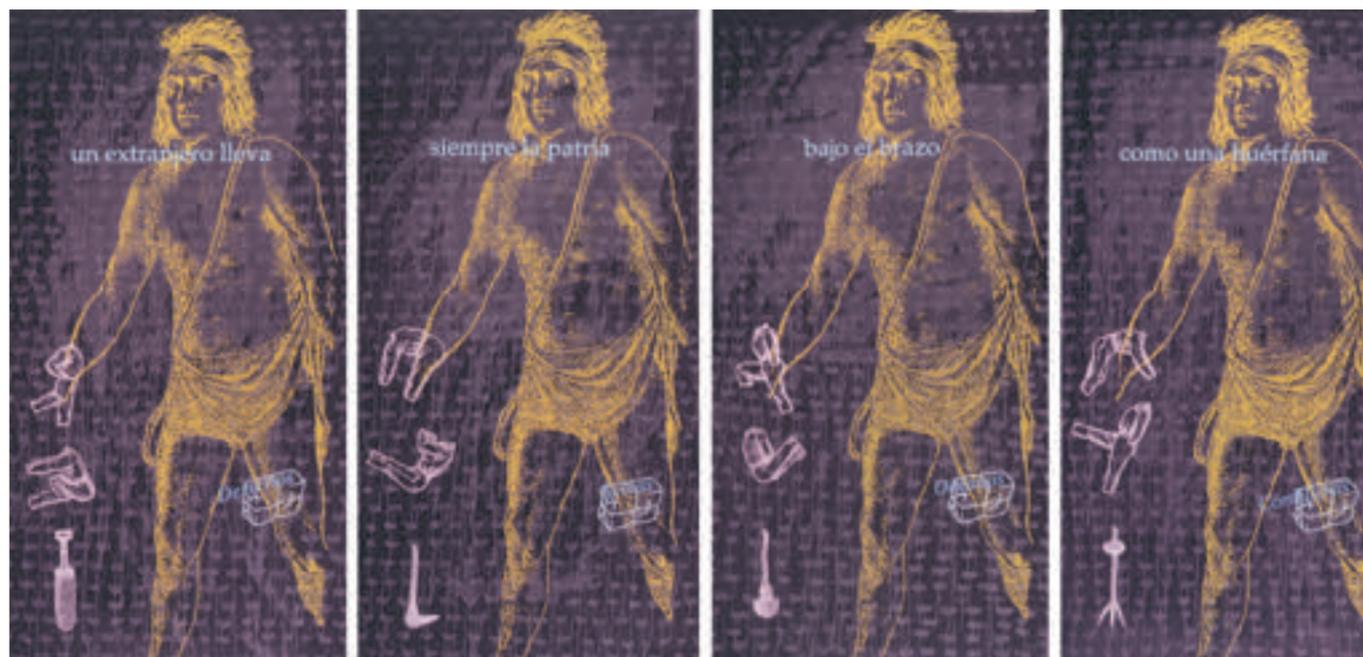
por Arturo Castro Martínez*

Bien es sabida la existencia de una fuerte segregación económica y social en Chile, la cual se ha ido intensificando durante las últimas décadas. Esto ha afectado notoriamente al mundo indígena, como parte de una crisis cuyo origen describiremos como algo estructural, coincidiendo temporalmente con el instante cuando se construyeron las bases del Estado de Chile. Son tiempos calamitosos para nuestros pueblos originarios, iniciados durante el siglo XIX con diversos procesos de pacificación y ocupación, los que serán especialmente cruentos en la Araucanía, con episodios de violencia que no han menguado desde aquellos tiempos pretéritos, manteniéndose activos en la actualidad. Los centros urbanos debieron recibir oleadas de personas de las etnias originarias, entre ellas del pueblo mapuche, víctimas de la violencia, la pobreza y marginalidad, en un éxodo que tendrá efectos negativos para su cultura ancestral, la que se diluirá entre el cemento y las estructuras de dominación presentes en la capital, naciendo distintos métodos de resistencia al interior de las ciudades, los que se han acentuado durante las últimas décadas como una respuesta a los actuales procesos de aculturación.

1. El éxodo: del wallmapu a la ciudad
La crisis que vive en la actualidad la Araucanía posee larga data, siendo parte de las estructuras que dieron origen al Estado de Chile. Son problemáticas originadas durante el siglo XIX, las que fueron traspasadas a la centuria posterior, tiempos donde fueron profundizadas, haciéndose estructurales y vigentes en el presente.

En Chile tras la instalación del neoliberalismo a finales de los 70' se vivieron múltiples transformaciones. En la Araucanía, específicamente en el wallmapu se originarán una serie de conflictos, debido a la destrucción y usurpación de tierras en manos de la industria forestal, lo que desde un inicio ocurrirá mediante el uso de la violencia. Se retraerá la población local en la región, situación que afectará de sobremano a los habitantes de las etnias nativas, provocando una retracción de sus culturas ancestrales, quedando evidenciado por una constante migración de la población indígena de la zona hacia los centros urbanos, con el fin de obtener mejores condiciones de vida. En efecto, esto es una consecuencia despiadada tras las transformaciones económicas de la época, mostrando una alta actividad incluso de manera posterior al término del proceso dictatorial. Sus consecuencias fueron negativas para gran parte del territorio nacional, no discriminando los lugares donde habitan las comunidades indígenas, zonas donde la pobreza, marginalidad y segregación se hicieron más evidentes. La precarización de la vida fue algo inevitable, afectando a la mayoría población chilena.

La inequidad económica y social se transformaron en un tema presente en todo el territorio, lo que se vio ocultado, producto del crecimiento urbano durante las últimas décadas, situación que se ha vendido constantemente como una respuesta a un supuesto desarrollo alcanzado a nivel país, con grandes torres de oficinas construidas con acero y vidrio, con personas paseando en parques siempre verdes, contrastando con los manchones de pobreza en las periferias de las



Carlos Montes de Oca, Mapuche

grandes ciudades, donde el cemento reemplazó al polvo y el barro hace algunos años, sitios donde vive la gran mayoría de los habitantes del territorio, incluyendo las comunidades indígenas.

Uno de los principales efectos tras la instalación del neoliberalismo en el país es la inequidad económica y social, situación que ha terminado afectando a la mayoría de la población nacional, con dígitos muy similares a los vistos en países con índices de desarrollo inferiores. En los primeros años del siglo XXI la distribución de ingresos dejaba a Chile en números cercanos a los vistos en Surinam y por debajo de Nigeria y la República Democrática del Congo(1), reproduciendo de forma constante la pobreza estructural que ha terminado mermando generaciones completas, especialmente en las áreas ubicadas por fuera de las grandes ciudades. No es extraño que regiones como El Maule y la Araucanía sean desde siempre nombradas entre las más pobres del país. Durante gran parte del período posterior al retorno a la democracia han figurado con números negativos, generando una pobreza a perpetuidad y heredable generacionalmente. En la Casen del año 2017 La Araucanía presentaba un 17,2% de pobreza(2), situación grave y que desde los inicios de la década de los 90' se ha hecho visible mediante el discurso reivindicativo del pueblo mapuche, el que ha sucumbido frente a la cultura impuesta por el modelo capitalista, el que ha destruido la cosmovisión indígena, utilizando la violencia como un medio para lograrlo, amparándose en un Estado benevolente, permisivo con una industria que degrada la naturaleza, secando ríos y bosques nativos milenarios, tal como lo han hecho desde hace años las forestales. Para la población indígena local los efectos son devastadores, debido a que a la destrucción de su entorno se suma la precarización en sus condiciones de vida, no coincidiendo los números positivos que ha tenido la industria forestal en el lugar desde su instalación y que han ido en incremento durante los últimos 30 años.

En wallmapu la población vive en la marginalidad y un empobrecimiento que avanza exponencialmente en el tiempo. Según la encuesta Casen del año 2017 en la región se registraron siete comunas con una pobreza multidimensional por sobre el 50% (3), ubicadas todas en zonas rurales, dejando claro los efectos negativos del modelo económico en la población local, donde además se encuentran comunidades indígenas, las que han comenzado a reducirse debido a que sus habitantes se han visto obligados a migrar hacia los centros urbanos. Es así como tras la instalación del modelo económico en la zona se vieron destruidas las culturas ancestrales del lugar. Algunos representantes del pueblo mapuche no sólo aluden en las prácticas económicas neoliberales el origen de sus problemáticas, también los motivos que dieron comienzo a su reivindicación y organización, dentro y fuera del wallmapu:

“Su proceso de acumulación de riquezas, los causantes de la pobreza y dominación “que llevaría, a la larga, a la desaparición definitiva –ideológica y físicamente– del pueblo mapuche”. Eso mismo hacía que la lucha del pueblo mapuche fuera un “tema histórico que se ha ido acrecentando en el último tiempo” (4).

La realidad de la cultura mapuche en la actualidad se centra en el conflicto provocado por influencias de agentes externos, siendo en su totalidad distintos tipos de violencia que inclusive se han ido normalizando con el tiempo. Ya son generaciones completas las que han crecido en zonas militarizadas, obligando a muchos grupos familiares a abandonar sus tierras ancestrales, debiendo perder sus territorios y cosmovisión.

2. Violencia y castigo

El territorio mapuche ha sido testigo de las transformaciones económicas que han ocurrido en Chile, en un proceso que además los ha incluido como víctimas. La industria forestal ha forzado su inserción mediante el uso de la violencia, incluyendo muertos y detenciones arbitrarias en la zona. No es de extrañar-

se que hoy en día la Araucanía junto con ser una de las regiones más pobres del país, además sea una de las zonas donde se concentra el mayor número de centros penitenciarios a nivel país (5). Esto nos sirve como referencia para entender el vínculo entre la pobreza y la criminalización en la zona, una consecuencia de “la otra violencia” que ha carcomido la región desde adentro, dejando a sus habitantes al costado de todo crecimiento económico por ser pobres e indígenas, ahora desplazados, allegados en un país que les da la espalda mientras absorbe sus recursos y asesina a su cultura a sangre fría, sin actos que llamen a una reconciliación real con sus raíces ancestrales. La respuesta estatal es la precarización de la vida y el encarcelamiento, el último como herramienta de dominación hacia su cultura, tal como lo han hecho desde hace más de doscientos años. Foucault fue claro al señalar el papel de la cárcel, lo que puede ser utilizado para entender el trabajo desarrollado por el Estado en la Araucanía actualmente y desde hace varias décadas, cuyo fin ha sido provocar el miedo en la zona mediante el uso de la ley, lo que nos recuerda la frase que adorna el escudo nacional: “por la razón o la fuerza”.

“En suma, el encarcelamiento penal, desde el principio del siglo XIX, ha cubierto a la vez la privación de la libertad y la transformación técnica de los individuos”(6).

Bajo la lógica foucaultiana la cárcel actúa como un mecanismo normalizador, haciendo dependientes a los individuos de un sistema de castigo contra quien de alguna manera contradiga las normas impuestas por el Estado o la cultura dominante. Estos últimos organismos actúan a manera de persecutores y formuladores de la ley, organizando las vidas de los habitantes de un territorio delimitado, creando normas y criminalizando a quien se salga de sus límites impuestos de forma arbitraria.

La cárcel como institución en la Araucanía responde a la lógica de la criminalización de la zona, siendo una variante de la violencia estatal arraigada en algunas localidades ubicadas al sur del país. Esto ha quedado en

evidencia con la existencia de eventos que han quedado registrados como montajes por parte de las policías tras el retorno a la democracia, con el fin de desarticular los mecanismos de resistencia indígena criminalizando y persiguiendo a sus representantes, llegando a encarcelar injustificadamente a dirigentes indígenas. Un caso icónico es lo ocurrido con la Operación Tauro, la que se originó por una serie de supuestas denuncias hacia el comunero mapuche Rodrigo Melinao, quien estuvo recluso ocho meses en la cárcel de Angol. El periodista y escritor Pedro Cayuqueo describe este proceso en un artículo, el que me permite citar:

“Hablemos de la Operación Tauro. Así bautizó Carabineros una operación de inteligencia para desbaratar una supuesta “escuela de guerrillas” en las comunidades mapuche de Ercilla.

En enero de este año hubo violentos allanamientos y detenidos en cuatro regiones. Se logró la incautación de armas largas y cortas, incluidos modernos fusiles de guerra expuestos en una concurrencia rueda de prensa. Solo había un pequeño detalle: se trataba de armas de plástico, de juguete” (7).

La criminalización del pueblo mapuche ha estado presente desde hace mucho en el sur del país, siendo una muestra de la constante violencia hacia las comunidades indígenas. Son quince los asesinados desde el retorno a la democracia, tanto en gobiernos de izquierda y de derecha. Casi en su totalidad personas vinculadas a agrupaciones pro reivindicación indígena. Así ocurrió con Camilo Catrillanca (2018), Johnny Cariqueo (2008) y Alex Lemún (2002) –por nombrar algunos–. El último mencionado tenía 17 años, habitaba en la comuna de Ercilla y fue alcanzado por disparos realizados por carabineros en medio de una ocupación en el fundo Santa Elisa, propiedad de Forestal Mininco. Este caso escaló, al punto de ser tratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quedando el Estado como responsable del asesinato del joven comunero mapuche:

“Con fecha 21 de marzo de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó el Informe de Fondo N° 31/17 en el caso N° 12.880 “Edmundo Alex Lemún Saavedra y otros”, estableciendo la responsabilidad de Chile por la violación a los derechos a la vida, integridad personal, igualdad y no discriminación, derechos del niño, de-

rechos a las garantías judiciales y protección judicial de Alex Lemún, su familia y la comunidad Requén Lemún. Estas violaciones tuvieron lugar a propósito de la muerte del adolescente y mapuche Alex Lemún por un agente de la Comisaría de Carabineros de Angol, durante un operativo policial realizado el 7 de noviembre de 2002” (8).

Lemún simboliza hoy por hoy la historia reciente del pueblo mapuche, el que ha visto retraída su cultura producto del avance de la modernidad, incitando constantes muestras de resistencia tanto dentro como fuera de wallmapu, recibiendo fuego y sangre como respuesta. Su muerte es una muestra de aquello, también de la existencia de una violencia sistemática en la Araucanía, lo que no es nuevo y ha adquirido una escalofriante normalidad en la zona, la que ha sido ampliamente militarizada durante los últimos años. Actos de este tipo también han impulsado a los habitantes de la región a migrar a otras zonas geográficas, principalmente a las grandes ciudades. Es precisamente en los centros urbanos donde la comunidad mapuche ha encontrado uno de sus mayores enemigos: el olvido, cuestión que no es algo único en esta etnia, sino más bien una situación repetitiva para todos los pueblos originarios, los que se han visto perjudicados por el avance de la modernidad y su inclusión mediante el uso de la violencia.

3. La otra violencia: la aculturación.

El olvido es otro tipo de violencia a manera de condena perpetua. De diferentes formas se ha enquistado en las sociedades nativas, las que una vez llegadas a los territorios urbanos se han visto obligadas a una retracción cultural, situación caracterizada por la agresividad existente en el medio donde esto ocurre. Es justamente esto lo que ha ocurrido con el pueblo mapuche, el que ha encontrado en las ciudades diferentes formas de perder sus raíces, siendo la marginalidad, empobrecimiento y discriminación mecanismos poco sutiles para que esto suceda.

La ciudad actúa como un agente reproductor de lo dominante. Mediante su geografía recluye a las etnias nativas, haciéndolas habitantes de territorios marginales, condenando a la población indígena a situaciones de pobreza. De esta manera se sigue reproduciendo su segregación social y cultural, ahora lejos de wallmapu, perdiendo su esencia y conectividad con el medio, llegando a una

desmemoria peligrosa si consideramos la pérdida de su lenguaje y mecanismos de relación social, elementos fundamentales en su cosmovisión, la que choca violentamente con la modernidad impuesta fuera de su lugar de origen, dentro de los territorios donde hoy en día deben cobijarse. Las sociedades indígenas establecidas en las ciudades sobreviven a una constante fragmentación de su memoria cultural, siendo parte de su adaptación al medio y búsqueda por querer sobrevivir. Es de esta manera como se involucran en un proceso de aculturación, llegando a comprometer su historia, teniendo efectos negativos, debido a que se hace insostenible la perpetuación de su cultura ancestral fuera de sus territorios.

La aculturación es un fenómeno que ha pasado desapercibido en la historia indígena reciente de Chile, no existiendo grandes trabajos que logren identificar sus reales efectos para las poblaciones indígenas nativas del país. Ciertamente es un fenómeno bastante amplio, pero vigente en la actualidad. Su definición habla de cambios culturales de la población inmigrante en las sociedades que actúan como receptoras. En la actualidad estos tipos de análisis han tendido a mantener un enfoque dirigido a describir las transformaciones etnoculturales de estos grupos relacionados por cuestiones territoriales, dando origen una convivencia cultural, la que se ha basado en la modificación de sus costumbres (9). La warriolof es una muestra de aquello, ya desde su definición como lugar o comunidad mapuche en la ciudad nos habla de esa resistencia y existencia de una memoria que intenta mantenerse vigente. Acá confluyen las organizaciones indígenas, creando un espacio en medio del cemento, con el ánimo de recuperar su lenguaje perdido y formas de organización familiar y social, trabajo difícil, puesto que las generaciones más jóvenes han perdido el interés en sus raíces indígenas, cortando definitivamente el contacto con sus orígenes, apropiándose de la cultura dominante. Esto es un problema si consideramos la cantidad de población mapuche que habita en las ciudades en la actualidad. Según el censo del año 2018 en la Región Metropolitana el número de habitantes de esta etnia dobla el visto en la Araucanía (10), lo que nos sirve como referencia para comprender el efecto de su éxodo a territorios urbanos, donde se ha desdibujado gran parte de su cultura ancestral,

fenómeno que se ve acentuado generacionalmente, amenazando con hacer desaparecer los pocos bastiones de resistencia mapuche en la ciudad.

La aculturación es un efecto claro del apartheid vivido por el pueblo mapuche desde hace mucho tiempo, en respuesta a un fenómeno con al menos dos siglos de existencia. Hoy en día sus efectos son más evidentes, siendo la pobreza, segregación y marginalidad agentes que actúan a favor de su reproducción. Desafortunadamente no han existido políticas reales para enfrentar estos problemas. Esta es la realidad de todos los pueblos nativos habitantes del territorio chileno, víctimas de diferentes métodos de violencia, siendo condenados al olvido y la muerte, como si estos fueran a acabar con sus memorias fuera de sus lugares de origen. ■

1. RODRÍGUEZ, Javier, Desarrollo y desigualdad en Chile (1850-2009). Historia de su economía política, Santiago de Chile: Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), 2017, p. 227.
2. Clase y pobreza: Combinación mortal en el sur de Chile. Disponible en: <http://humanidades.ufro.cl/index.php/noticias/1108-opini%C3%B3n-clase-y-pobreza-combinaci%C3%B3n-mortal-en-el-sur-de-chile>
3. Casen 2017, datos obtenidos en: <http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/basedatos.php>
4. PAIRICÁN, Fernando, Malon. La rebelión del movimiento mapuche 1990 – 2013, Santiago de Chile: Ediciones Pehuén, 2014, p. 275.
5. Datos obtenidos en: <https://www.gendarmeria.gob.cl/establecimientos.html>
6. FOUCAULT, Michel, Vigilar y castigar, Buenos Aires – Argentina: Ediciones Siglo XXI, 2002, p. 213.
7. CAYUQUEO, Pedro, Porfiada y rebelde es la memoria. Crónicas Mapuche, Santiago de Chile: Ediciones Catalonia, 2019, p.93.
8. Documento donde se reconoce la participación del Estado de Chile en la muerte de Alex Lemún el 7 de noviembre del 2002. Disponible en: <https://www.interior.gob.cl/media/2018/10/PUBLICACION-ACUERDO.pdf>
9. BERRY, John W, Acculturation: Living successfully in two cultures, en International Journal of Intercultural Relations, Psychology Department, Queen’s University, Kingston. Ontario – Canadá, VOL 29, P.700.
10. Región Metropolitana concentra mayor población mapuche del país. Disponible en: <https://radio.uchile.cl/2018/05/08/region-metropolitana-concentra-mayor-poblacion-mapuche-a-nivel-nacional/>

*Profesor y Licenciado en Historia y Ciencias Sociales. Especialista en Historia Contemporánea y Mundo Actual de la Universidad de Barcelona.

Libros de lucha mapuche Impresos y/o digitales



En venta en librerías y en Le Monde Diplomatique, San Antonio 434 Santiago. Teléfono: 22 608 35 24

Por internet en: www.editorialauncreemos.cl

Cómo el gobierno y los gobernados han hecho frente al Covid-19

Chile y su primer año de pandemia en el siglo XXI

por Yuc Ramón Kong González*

Ni la estratégica ubicación geográfica de nuestro país, ni la inmensa riqueza de nuestros recursos naturales ni menos el gran nivel profesional y técnico de nuestra red pública y privada de salud fueron suficientes para convertirse en el escenario, aparentemente, perfecto para aislarnos de una pandemia. Sin embargo y pese a recibir una alerta temprana de nuestros colegas europeos, no lo logramos. Y fracasamos.

Más de 23.000 muertes por Covid-19, para una población cercana a 19 millones de habitantes y ocupando el lugar 89 de Ranking de manejo de pandemia (Lewy Institute 2021).

Mantener gran parte del tiempo las fronteras aéreas y regionales abiertas causó que el virus rápidamente llegara a cada rincón del país. Pasaron meses antes de que se decidiera enfocar los esfuerzos locales en base a la realidad pandémica de cada zona. No hubo intención política, acusaron que no había dinero, y se prefirió especular con la duración de la primera oleada en vez de limitarla con medidas eficaces de sostén económico y cierre general. No fuimos capaces de instalar un torniquete a tiempo. Muchos lo perdieron todo.

Para sobrevivir económicamente más del 40% de los chilenos debió usar el total de sus ahorros destinados a sus jubilaciones durante la primera oleada, mientras tanto, los más ricos se hicieron más ricos, incluyendo al presidente Sebastián Piñera, que hoy en ejercicio circula entre las 4 personas más ricas de Chile (Forbes).

Pues entonces, qué queda para el pueblo de Chile, si ha confiado el timón del país, nuevamente, en quien ha mantenido intereses propios, desde su primera administración, sobre los de su población y decidiendo hoy que la reactivación de la economía saliera del propio bolsillo de los trabajadores.

El presidente decide

¿Y por qué me detengo tanto en lo monetario? Porque durante once meses las directrices de las medidas sanitarias han sido teñidas por la especulación económica. En palabras del propio exsubsecretario de Redes Asistenciales de Salud, Arturo Zúñiga, es el propio presidente quien



Mon Laferte, Charquicán (técnica mixta sobre tela), 2021 (Exposición en Galería Bahía Utopica hasta el 12 de marzo)

determina la aplicación de cada medida sanitaria emanada del equipo de expertos sanitarios. Es decir, es el propio mandatario quien decide qué intereses primarán sobre el sanitario.

Es así como pasamos semanas, muchas, entre cuarentenas dinámicas inefectivas (sub-localidades de una ciudad abrían y cerraban según indicadores sanitarios poco reproducibles) que jamás lograron detener significativamente la circulación ciudadana, porque el trabajo primaba, porque muchísima gente vive del trabajo informal, de lo que pueda ganar día a día; porque en Chile la encrucijada entre “comer hoy o morir por Covid mañana” fue más fuerte.

Renacieron las ollas comunes. Nuevamente la solidaridad nació de la propia gente, del propio pueblo. No se pudo esperar los más de tres meses que demoró la primera ayuda económica gubernamental. Políticos abundaban en programas de TV hablando de lo que el pueblo necesitaba y jamás percibieron el sentido de urgencia que significa pasar hambre mientras te defiendes de una pandemia. Se llenaron la boca hablando del Estado y de que la gente no debe es-

perar vivir de él, pero olvidaron que el Estado somos todas y todos. En evidencia quedó que para ellos no somos más que votos e impuestos, ya que cuando somos gasto o inversión es mejor omitirnos o responsabilizarnos por nuestra desgracia. Incluso el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, en televisión abierta nos trató de “estúpidos” tras fallar, luego de cuatro meses de preparación, su plan de reapertura tras la cuarentena en Santiago y vivir aglomeraciones en centros de abastecimiento comercial. “Estúpidos”, recalcó en otro programa de TV y tuvo la suerte de encararlo en vivo y detenerlo: “¿Así que estúpidos por querer subsistir? ¿Estúpidos por seguir las indicaciones de líderes sin capacidades suficientes para dirigirnos con seguridad durante esta pandemia?”. Como siempre, las autoridades tomaron los aciertos como propios y nos culparon por los errores.

Populismo y demagogia

Somos testigos de la decadencia de un régimen cada vez menos democrático, menos justo, donde su aprobación ciudadana ha llegado a menos del 5% (CADEM 2020), detonando el estallido social del 19

de octubre del año 2019, lleno de muertes, mutilaciones y sangre.

Una profunda grieta se ha abierto al ver que el populismo y la demagogia de nuestros líderes ha llegado a costar vidas humanas. No nos dirigen los mejores y eso ha quedado claro. Hemos salido espontáneamente profesionales y expertos de diferentes áreas a alertar y enseñar a nuestra gente cómo enfrentar la emergencia, a cómo evitar contagiarse y morir, a cómo cuidarnos entre tanto desamparo.

Y sobrevivimos.

Hoy enfrentamos una nueva oleada y, en medio de ésta, ha comenzado la vacunación masiva. Hay esperanza. Una pequeña luz comienza a brillar y a mostrar la salida a esta pandemia, dejándonos un Chile dolido, con más muertos, con menos riqueza, con más cesantes, más pobres y más familias económicamente quebradas. Sin embargo, es evidente la mayor enseñanza: unidos siempre superaremos la adversidad, las pandemias, a los dictadores y autoritarios.

El presente se escribe con “newen”, hoy resuena en las calles “marichiweu”. ■

*Médico Emergenciólogo y Directivo de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencias (SOCHIMU)

Entre Silicon Valley y Wall Street

GameStop, un populismo de plataforma

por Evgeny Morozov*

El pasado mes de enero, miles de especuladores online se coordinaron para hacer subir la cotización de empresas que los grandes fondos de inversión apostaban a la baja. ¿Revolución o carnaval?

A pesar del caos que sembró en los mercados internacionales, la saga GameStop no se reduce a una historia de inversores individuales que humillaron a un puñado de arrogantes fondos de inversión. Se trató de una prolongación imprevisible del ataque al Capitolio, en Washington, el último 6 de enero. Ambos acontecimientos tuvieron como protagonistas a una horda de adictos a las redes sociales que asediaron a las instituciones más sagradas de un *establishment* profundamente despreciado.

Sin embargo, mientras una condena unánime cae sobre los agitadores de Washington, a los cruzados anti Wall Street les está yendo bastante mejor. Al defender las acciones de empresas agonizantes contra la codicia de los fondos de inversión, estos revolucionarios de sótano con bandana en la cabeza obtuvieron incluso la simpatía de ambos bandos políticos.

Para la contracultura digital, la principal enseñanza que dejaron estas dos revueltas parece clara: los verdaderos portavoces de la rebelión contra el orden establecido deben dominar más el arte de intercambiar y productos derivados que el de trepar paredes agitando banderas confederadas. Por mucho que la revolución sea transmitida en directo por Twitter y televisión, es preferible resguardar las hojas de cálculo de Excel.

Trading para el pueblo

La dignidad acordada a la cruzada GameStop refleja en negativo la mala reputación de los fondos de inversión. Hay otro elemento, menos evidente, que explica la recepción que tiene en la opinión pública: el discurso sobre la “democratización” que acompañó el auge de los servicios de intermediación financiera online a bajo costo. Una de estas aplicaciones, llamada Robinhood, fue la que proporcionó la infraestructura digital a la rebelión GameStop. Según el lema que sus fundadores repiten *ad nauseam*, su misión consiste en “democratizar las finanzas”. Esta consigna evoca la noble misión asumida por los fondos indexados, como Vanguard, a principios de los años setenta: crear instrumentos financieros simples, seguros y poco onerosos para que el ciudadano común pueda invertir en la Bolsa. Robinhood busca no obstante diferenciarse de las banales empresas de intermediación de Wall Street. Se concibe como una fuerza revolucionaria y disruptiva salida directamente de la Silicon Valley.

La “democratización” que reivindica Robinhood aparece así bajo una nueva luz. Se inscribe más en la línea de Uber, Airbnb y WeWork que en la de Vanguard o



Lucas Estévez, Sad love emojis (Esferas de concreto), 2020 (Galería NAC - Insta: @lucasestevez)

BlackRock. Todos estos gigantes digitales prometieron “democratizar” algo rápidamente –el transporte, el alojamiento y las oficinas, respectivamente–.

Muy pronto, esta incipiente industria, con su bella promesa de “democracia como servicio online”, ya no tuvo límites y lanzó una cruzada mundial para “democratizar”, sucesivamente, el paseo de perros, el cuidado de niños, la preparación de jugos y el planchado. ¿Quién hubiera pensado que esos aspectos triviales de la vida cotidiana eran tan intrínsecamente represivos y totalitarios que necesitaban una radical “democratización”?

Esa campaña mundial se apoyó en una recaudación de fondos a través de empresas de capital de riesgo y de inversores institucionales que, bloqueados por las bajas tasas de interés heredadas de la crisis financiera mundial, ya no sabían dónde invertir su dinero. Pero la historia no termina ahí. Este impulso de “democratización” a todos los niveles contaba además con el apoyo de un modelo de demo-

cracia liberal tan ejemplar como el del gobierno saudí, asociado al conglomerado japonés SoftBank, para inyectar millones a empresas como Uber y WeWork.

¿Justicia social?

Estos flujos financieros, asociados a nuevos modelos comerciales que volvieron oficialmente “gratuitos” algunos servicios que antes eran pagos (correo electrónico, tarjetas, vinculación de la oferta y la demanda), crearon una ilusión de progreso y movilidad social. El inevitable proceso de “democratización” reivindicado por todas las plataformas era a menudo el resultado de simples cálculos aritméticos. Para WeWork, los cálculos demostraron ser erróneos. Habrá que ver si Robinhood, que acaba de recaudar con urgencia otros 1.000 millones de dólares para mantenerse a flote, tendrá mejor suerte. En la mayoría de los casos, las bellas promesas no han durado mucho.

Así, la industria digital se ha vuelto el principal proveedor de “populismo” en to-

do el mundo. Semejante afirmación puede parecer exagerada. Si se utiliza el término “populismo” para referirse a Steve Bannon, Viktor Orbán y Recep Tayyip Erdoğan, ¿se lo puede usar también para Jeff Bezos o Mark Zuckerberg?

Sí, se puede y se debe hacerlo. Al tener la mirada puesta en el “populismo” primitivo, tóxico y nacionalista de Donald Trump, no supimos observar el rol de la Silicon Valley en el surgimiento de un “populismo de plataforma” sofisticado, cosmopolita y afable.

Crece mientras repite de manera casi conspiracionista que el mundo no es lo que creíamos. Las empresas en el mercado, compañías de taxis, hotelería, fondos de inversión, habrían cambiado las reglas del juego para favorecer sus propios intereses. Solo “disruptiéndolos” se podrán esperar los beneficios prometidos por las tecnologías digitales. A tal efecto, las plataformas prometen liberar las fuerzas del capitalismo a fin de civilizar esos vestigios salvajes de la era predigital.

Atrapado entre la Silicon Valley y Wall Street, el populismo de plataforma juega un rol bastante paradójico: propone contener el capitalismo dando libre curso a formas aún más salvajes de capitalismo, por el bien de la humanidad.

Al igual que la mayoría de los “populismos”, éste no comprende la política económica que lo hizo posible. Mala suerte si los despreciados fondos de inversión pierden el dinero que sirve para financiar las universidades y las jubilaciones de los trabajadores: ¡bastaba con pasarle los fondos de pensión a Robinhood!

Importa poco si la rigidez de los actores predigitales se debe al cumplimiento de las legislaciones impuestas por los Estados democráticos (aunque capitalistas). Porque, en el mundo del revés del populismo de plataforma, destecer las leyes democráticas sometidas a la presión económica permanente de la competencia, que se ve acelerada por la digitalización y los recursos infinitos de los inversores, representaría una prueba irrefutable de “democratización”.

No se tiene mayormente en cuenta que el populismo de plataforma adopta un discurso sobradamente engañoso, que favorece finalmente a SoftBank y a Arabia Saudita. Desprovisto de una ideología coherente propia, a este populismo le interesan los procesos, pero no sus consecuencias. Quiere demostrar que, pese a las maquinaciones burocráticas y sus benditas legislaciones, nuestro poder de iniciativa individual permanece intacto, al punto de volver inútil cualquier movilización en torno a un programa político a largo plazo.

Sin duda, la mayoría de los feroces soldados de GameStop saben que sus ganancias personales son frágiles y temporarias. ¿Pero quién podría negarles el placer de reafirmar su propia libertad vengándose de la autoridad, cuando es sabido que, en este asunto, los beneficios a largo plazo volverán a... otros fondos de inversión? ■

*Fundador y editor del portal The Syllabus. Autor de *La locura del solucionismo tecnológico*, Capital intelectual, Buenos Aires, 2016.

Traducción: Victoria Cozzo

Europa paralizada frente a la industria farmacéutica

Las patentes obstaculizan las vacunas para todos

por Frédéric Pierru, Frédérick Stambach y Julien Vernaudon*

Lejos de las buenas intenciones esbozadas a inicios de la pandemia acerca de garantizar un acceso igualitario a las vacunas, la lucha mundial por las dosis confirma el triunfo de la lógica del más fuerte. La deficiente negociación de la Unión Europea frente a las multinacionales farmacéuticas confirmó su debilidad geopolítica e industrial y reavivó el debate sobre la posibilidad de suspender las patentes.

Recordemos el aluvión de buenas intenciones expresadas durante el aislamiento preventivo de la primavera boreal de 2020. En la sociedad generosamente refundada que estaba por venir las vacunas debían ser “bienes públicos mundiales”. Asimismo, en noviembre, Emmanuel Macron advertía seriamente: “Cuando salga al mercado la primera vacuna [contra la Covid-19], ¿estaremos preparados para garantizar el acceso a ella a escala planetaria y evitar a toda costa el escenario de un mundo de ‘dos velocidades’, donde solo los más ricos podrían protegerse del virus y reanudar una vida normal?” (1). Pero las promesas siguen siendo solo buenas intenciones. El 18 de enero de 2021, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, constataba un hecho abrumador: “Más de 39 millones de dosis de la vacuna han sido administradas en al menos 49 países de ingresos altos. Solo 25 dosis se han administrado en un solo país de bajos ingresos. No 25 millones, no 25 mil, solo 25”. Se refería a la probabilidad de un “fracaso moral catastrófico”.

No obstante, por iniciativa de la OMS, se habían establecido dos instrumentos para poner en práctica ese impulso de solidaridad internacional. En primer lugar, el mecanismo COVAX, que tiene por objeto la “licitación conjunta para la adquisición de vacunas contra la Covid-19, a fin de garantizar a 190 países y territorios el acceso justo y equitativo a las vacunas”. Se firmó un contrato por 40 millones de dosis de vacunas (de ARN mensajero) con Pfizer (en sociedad con la empresa alemana BioNTech), luego otro con AstraZeneca (en sociedad con la Universidad de Oxford) por 120 millones de dosis suplementarias. El objetivo fijado era muy ambicioso: proporcionar dos mil millones de dosis para finales de 2021. El segundo mecanismo es el Fondo de Acceso a la Tecnología Covid-19, o C-TAP (acrónimo de Covid-19 Technology Access Pool), que debería haber garantizado el intercambio de la propiedad intelectual, los conocimientos y la experiencia necesarios para producir vacunas a gran escala, incluso en los países en desarrollo. Pero resulta que el C-TAP es, en este momento, una cáscara vacía, mientras que el mecanismo COVAX tiene enormes dificultades para arrancar, hasta el punto de que la OMS menciona ahora el plazo 2022 o incluso 2024.

La realpolitik del capitalismo neoliberal
Prisioneros de sus declaraciones públicas, los



Andrea Silva Guzmán, Casa-Núcleo, 2016 (Gentileza Galería P. Ready)

Estados y la Unión Europea practican el doble discurso. En la práctica, prevaleció la *realpolitik*, en beneficio de las multinacionales farmacéuticas. A pesar de la gran falta de transparencia que rodea los “acuerdos de compra anticipada”, se filtraron elementos reveladores. Y, una vez más, vemos que se aplica la ley de hierro del capitalismo neoliberal: la socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios. Los laboratorios fueron subvencionados con miles de millones de euros por los Estados y la Comisión Europea -que aportó más de 2.000 millones durante el desarrollo de las vacunas- para la investigación y el desarrollo y, posteriormente, la producción masiva de dosis, limitando *de facto* los riesgos de las empresas. Sin embargo, estas últimas conservan el control de las patentes, negocian con dureza los precios con los Estados y restringen las posibles donaciones y reventas a los países en desarrollo. Según la secretaria de Estado de Presupuesto del Gobierno de Bélgica, Eva de Bleeker, las tarifas negociadas por Bruselas van de 1,78 euros para AstraZeneca a 10 euros para CureVac y 14,68 euros para Moderna (2).

Por último, las cláusulas de entrega parecen ser de lo más flexibles, lo que dejó a la Comisión Europea en la más completa confu-

sión cuando AstraZeneca le informó, en enero, que no podría entregar el número de dosis previstas (80 millones) en los plazos fijados (primer trimestre de 2021). Esto dio lugar al comienzo de una crisis política con el Reino Unido, que quería conservar las dosis producidas antes de llegar a un acuerdo sobre la mitad del contrato.

Por otro lado, la responsabilidad jurídica de las empresas se restringe al máximo en caso de que se produzcan efectos secundarios graves, que serían asumidos una vez más por los Estados signatarios. Sería injusto acusar solo a las multinacionales que consiguen imponer contratos tan desequilibrados. Según *The New York Times*, el muy oficial Banco Europeo de Inversiones otorgó un préstamo de 100 millones de dólares a BioNTech, préstamo condicionado al cobro de 25 millones de dólares sobre los beneficios (3). Como si fuera lógico obtener ganancias con las vacunas...

A estos contratos inverosímiles hay que sumarle un enfrentamiento geopolítico entre los países por el desarrollo, la fabricación y el acceso a las valiosas vacunas: China y Estados Unidos, por supuesto, pero también Rusia -que acaba de obtener una victoria estratégica, el reconocimiento de su vacuna “Sputnik V” que va

por buen camino-, Alemania, Israel y el Reino Unido. Si bien nada está cerca de resultar perfecto, Londres supo organizar una campaña de vacunación dinámica, echando por tierra el argumento de una Unión Europea protectora, esgrimido durante el laborioso y conflictivo Brexit. En mayo de 2020, el gobierno de Boris Johnson creó un “Vaccine Taskforce” [grupo de trabajo sobre vacunas] para desarrollar la investigación, la producción y la estrategia de las vacunas, por ejemplo, asociándose con la empresa francesa Valneva para producir una nueva vacuna en Escocia.

En síntesis, esto se encuentra en las antípodas de la lentitud y de la pasividad de Francia. Al 4 de febrero, el Reino Unido había administrado al menos una dosis de vacuna al 16,2% de su población, frente al 4% en España, el 3,9% en Italia, el 3,6% en Alemania y el... 2,7% en Francia. Este país no sólo ha quedado rezagado en el concierto de potencias, sino que los centros de vacunación se organizaron de manera precipitada, en enero de 2021, bajo la presión de los medios de comunicación, y están a cargo de un personal de salud desbordado y agotado. Peor aún, contra toda lógica, el gobierno sigue reduciendo camas. Como el laboratorio Sanofi fracasó en la carrera por la “vacuna nacional”, su participación y la de empresas francesas como Delpharm o Recipharm en determinadas tareas de subcontratación (ensamblado, embalaje, etc.) comenzó, una vez más, con retraso, en febrero.

En este contexto de tensión, se entiende por qué las poblaciones de los países en desarrollo han dejado de ser prioridad. Frente a las compañías farmacéuticas, preocupadas por sus patentes, los mecanismos C-TAP y COVAX no funcionan: según Oxfam, el 13% de la población mundial, que vive en los países ricos, reservó el 51% de las dosis. Incluso dentro de la Unión Europea, las primeras entregas revelaron desigualdades flagrantes: Italia recibió 9.750 dosis, Francia, 19.500 y Alemania, 151.125 (4). Incluso comparadas con la población respectiva de esos países, esas diferencias siguen siendo inexplicables y parecen sugerir que algunos son más iguales que otros. Además, Alemania está negociando de forma directa para obtener dosis adicionales, a pesar de su adhesión al mecanismo de compra conjunta de vacunas por parte de la Comisión (5).

¿Y la licencia obligatoria?

Garantizar la “igualdad del valor de las vidas” (6) entre el norte y el sur, entre los países del norte y en el interior de cada país, implicaría revisar de raíz las normas del mercado farmacéutico. Por otra parte, la crisis actual proporciona un típico ejemplo de las aberraciones del modelo económico dominante aplicado a este sector. En efecto, gracias al giro de las biotecnologías y de la genómica, los laboratorios externalizan cada vez más el proceso de I+D -y, por lo tanto, sus riesgos- a nuevas empresas que a menudo se benefician de fondos públicos y tienen el respaldo de las universidades (7). Es el caso de BioNTech y Moderna. Ahora bien, a pesar de la creciente interrelación entre investigación básica, fondos públicos y sector privado, los derechos de propiedad intelectual no dejan de reforzarse. Además, los fondos públicos, a través de los sistemas de salud, logran la solvencia del mercado farmacéutico, que funciona según un mecanismo de subasta: las multinacionales ponen a los países en competencia para obtener los precios deseados, sin perjuicio de conceder en secreto descuentos en función del volumen de ventas.

Derechos y patentes

Ante la depredación de los recursos públicos y la escasez de vacunas, muchos profesionales de la salud (8), militantes, organizaciones no gubernamentales, así como algunos países, instan a los Estados a activar la “licencia obligatoria”. Este concepto, que surgió en Estados Unidos a finales del siglo XVIII, se incorporó a las normas internacionales en 1925 mediante una enmienda al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (9). También llamada “licencia de oficio”, la licencia obligatoria fue consagrada en 2001 por la llamada “Declaración de Doha”, tras la movilización de países duramente afectados por la epidemia del VIH, en particular Sudáfrica. El artículo 31 del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC), que normalmente dura 30 años, permite “establecer excepciones” “en caso de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso público no comercial”. Y esto “sin autorización del titular de los derechos” (10).

Francia podría aspirar a eso, más aún cuando la Ordenanza del 8 de febrero de 1959, pionera, autoriza al Estado a suspender las patentes en caso de insuficiencia de cantidad o de calidad, pero también de precios desproporcionados de medicamentos indispensables para la salud pública. Se trata de encontrar un equilibrio entre los derechos exclusivos conferidos por las patentes y el interés superior de la salud pública. Sin duda, ese es el caso hoy. ¿Por qué no recurrir a eso, como piden Sudáfrica, Bolivia, Kenia, Esuatini (antigua Suazilandia), Mongolia, Mozambique, Pakistán y Venezuela?

De entrada, surgen dificultades de carácter jurídico. Hay que definir la “urgencia” y hasta ahora no existe ningún consenso en el Consejo de los ADPIC de la OMC (11). Además, varias empresas pueden verse afectadas, ya que se trata de un “montón de patentes” registradas sobre conocimientos técnicos, acceso a datos clínicos, ingredientes necesarios para la producción de vacunas, etc. La batalla puede llevar tiempo.

También existe un obstáculo logístico: in-

dustrialmente, hay que ser capaz de producir millones de dosis. Ahora bien, para retomar el caso francés, la crisis arrojó una luz cruda sobre la desindustrialización, que hipoteca la soberanía sanitaria que desea el Presidente de la República. El fiasco de los barbijos -se necesitaron dos meses para relanzar la producción en la primavera boreal de 2020- debería haber llevado a prepararse para la siguiente etapa. La magnitud y la complejidad del desafío que implica fabricar vacunas con ARN mensajero, por ahora las más eficaces, habrían merecido una mayor anticipación.

Sin escrúpulos

Por último, y sobre todo, el obstáculo geopolítico se erige como un muro. La activación de la licencia obligatoria equivale a involucrarse en una pulseada con otras potencias soberanas, en particular Estados Unidos, donde se encuentran las dos empresas que ofrecen las vacunas más eficaces actualmente. Francia, Europa, y con ellas otras naciones, ¿tendrán el valor de enfrentarlas? París nunca lo ha hecho. Cuando, en 2014, la empresa Gilead fijó en 41 mil euros el precio del tratamiento de Sovaldi, un medicamento muy eficaz contra la hepatitis C, el Gobierno prefirió racionar a los enfermos y aceptar este precio exorbitante antes que activar la licencia de oficio y correr el riesgo de represalias por parte de Estados Unidos (12).

Por el contrario, Estados Unidos nunca tuvo esos escrúpulos. Cuando, después del 11-S, los bioterroristas amenazaron con agentes patógenos como el ántrax, Estados Unidos no dudó en chantajear con una licencia obligatoria para producir el medicamento contra la enfermedad del carbón, ciprofloxacino, patentado por Bayer. El laboratorio accedió finalmente a bajar su precio. Estados Unidos mismo elaboró una lista negra llamada “especial 301” de países que no respetan los ADPIC, entre los cuales se encuentra India (que produce genéricos de medicamentos aún bajo licencia), China o, durante un tiempo, Canadá. ¡Haz lo que yo digo, no lo que yo hago!

Aunque la escala europea parece la más pertinente, esta crisis demuestra, una vez

más, que la Unión no existe en el plano geopolítico e industrial. El ejemplo británico tendería incluso a demostrar que ser miembro representa una desventaja. Un país como Francia podría considerar la posibilidad de aplicar la licencia obligatoria. ¿Cuál es la condición? Que recupere su independencia rompiendo con el dogma del libre comercio, forjando una herramienta industrial y sanitaria eficaz a través de un “sector público” del medicamento, e invirtiendo masivamente en investigación y desarrollo, así como en el sistema de salud (en materiales y recursos humanos) para hacer frente a futuras pandemias.

Eso es para un futuro. Por el momento, convendría respaldarse en las numerosas iniciativas ciudadanas en favor de una vacuna como bien público mundial y, sobre todo, ponerse de acuerdo con otras potencias, en particular China, Rusia e India, con el fin de contrarrestar la dominación de las empresas farmacéuticas estadounidenses, cuyos intereses son defendidos por el Estado federal. La evolución reciente de la diplomacia francesa parece ir en esa dirección y podría permitir obtener “licencias voluntarias”, es decir, la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual con el acuerdo de los inventores, para las vacunas rusas y chinas.

Asimismo, no sería absurdo condicionar la financiación pública y la estrategia de reducción del riesgo (“de-risking”) de las inversiones a una venta a bajo precio, incluso a precios de costo (previa justificación de los costos). Debería facilitarse toda la información (patentes, procedimientos) a las empresas de los Estados pobres o emergentes, capaces de crear cadenas de producción y venderlas a bajo costo a los países en desarrollo o a los “compradores globales” que las donarían a los países muy, muy pobres.

Podríamos entonces poner fin al triste espectáculo al que asistimos, resultado de lo que algunos han llamado la “economía del libre comercio organizado”, que solo tiene de “libre” los poderes exorbitantes que los Estados le han concedido a la industria farmacéutica (13). ■

1. “Declaración de Emmanuel Macron sobre la lucha contra la epidemia de COVID-19 y la preparación para futuras pandemias”, 21 de noviembre de 2020, www.vie-publique.fr.
2. Tweet de Eva de Bleeker, publicado el 17 de diciembre de 2020 y eliminado al día siguiente.
3. Matt Apuzzo y Selam Gebreidkan, “Governments sign secret vaccine deals. Here’s what they hide”, *The New York Times*, 28 de enero de 2021.
4. Virginie Malingre, “Vaccination contre le Covid-19: les ratés et lenteurs de l’UE éclipsent ses succès”, *Le Monde*, 6 de febrero de 2021.
5. Jilian Deutsch et al., “Thanks to deep pockets, Germany snaps up extra coronavirus jabs”, *Político*, Washington, DC, 7 de enero 2021.
6. Didier Fassin, *De l’inégalité des vies*, Fayard - Collège de France, París, 2020.
7. Margaret Kyle y Anne Perrot, “Innovation pharmaceutique: comment combler le retard français?”, *Les Notes du Conseil d’analyse économique*, n° 62, París, enero de 2021.
8. “Las vacunas contra la Covid-19 deben ser un bien público mundial”, petición online mediante la plataforma www.change.org.
9. Gaëlle Krikorian, “Licence obligatoire”, en Marie Cornu, Fabienne Orsi y Judith Rochfeld (bajo la dir. de), *Dictionnaire des biens communs*, Presses universitaires de France, París, 2021 (2da edición).
10. “Texto del Acuerdo sobre los ADPIC”, OMC, www.wto.org.
11. Kaitlin Mara, “Decision on intellectual property waiver over Covid Technology on hold until 2021; what are the next steps?”, *Medicines Law and Policy*, Washington, DC, 18 de diciembre de 2020.
12. Olivier Mague, *La Santé hors de prix: l’affaire du Sovaldi*, Raisons d’agir, París, 2020.
13. Fabienne Orsi, “Brevets d’invention”, en Marie Cornu, Fabienne Orsi y Judith Rochfeld (bajo la dir. de), *Dictionnaire des biens communs*, op. cit.

*Respectivamente, sociólogo del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), coordinador (junto a André Grimaldi) de *Santé: urgence*, Odile Jacob, París, 2020; médico clínico rural en Ambazac (Francia); practicante hospitalario en los Hospices civils de Lyon.

Traducción: Magalí del Hoyo

Los Libros de la Radio que piensa



EDGARDO ENRIQUEZ FRÓEDDEN
TESTIMONIO DE UN DESTIERRO
Jorge Gilbert Ceballos

Edgardo Enriquez Fróedden Testimonio de un destierro. Jorge Gilbert Ceballos

Ediciones Radio Universidad de Chile presenta el libro "Edgardo Enriquez Fróedden, testimonio de un destierro" de Jorge Gilbert Ceballos.

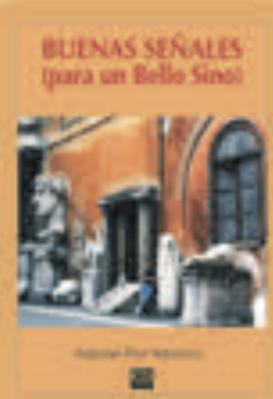
Las transcripciones pertenecen a largas conversaciones entre el autor y Edgardo Enriquez, sus silencios, los olvidos, sus invitó a vivir de manera sencilla pasando historias fundamentales escuchados en el Chile propio a la radio.



CANTO UNIDO
EN EXCELENTE MÉRITO
Canto Unido de los jóvenes

David Spener

Unirlos en profundidad de la vida de cuatro importantes artistas, sus historias, sus vidas y los testimonios de quienes los conocieron. Violeta Parra, empujada en el clima social de su época. Una aliento de la chelona, la hermana de Woody Guthrie, músico estadounidense que sus poemas hablaban con evidencia. Dos tanta socorro con Víctor Jara y Pío Cero, personajes que llegarán a conocer durante el Gobierno de la Unidad Popular. Al igual que Guthrie y Violeta, el lector puede apreciar con claridad la similitud entre los trabajos de Jara y Cero sobre la sociedad que se está viviendo.



BUENAS SEÑALES
(para un Bello Sino)
Sergio Jara (Argo Jara)

"Una vez viví, en difícil momento de la historia de este continente de reflexiones, que me llevan por una ruta que trata distintos debates de la vida. La del autor, claro está, pero también la del lector. Reflexiones sobre política, amor, libros, música, amistad, vida, más recuerdos pláidos de momentos que, en silencio, trascienden con mucha lo momento anecdótico...". Te más de algún país, de pronto, momentáneamente se transportan a momentos de la propia existencia, haciéndolos vivir hasta ese momento sólo ahora, y que parece momentáneamente olvidados...".



LA POLICÍA ES DEMOCRACIA
Sebastián Roché

Sebastián Roché ha recogido el fruto de varios años de trabajo de campo y múltiples consultas comparadas para intentar comprender de mejor manera la relación entre la policía y el público, los gobiernos de los países que no han debido adoptar sus policías al gen democratizado, esfuerzos con mayor dificultad la relación con la ciudadanía. El interés de este análisis para América Latina es evidente, los sistemas policiales de Francia y Chile comparten una tradición jurídica y constitucional de marca transparente. La policía es, ante todo, una institución al servicio de la comunidad.



102.5 FM
Adquéralos en:
Miguel Claro 509
Providencia

El legado de la era Trump

Paranoias estadounidenses

por Thomas Frank*

El nuevo presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, afirmó de entrada su voluntad de reconciliar un país dividido, al tiempo que escenifica la ruptura con la herencia de su predecesor. Alcanzar ambos objetivos a la vez será delicado, más aun cuando republicanos y demócratas se odian y que la amargura paranoica de unos refuerza las tentaciones disciplinarias de los otros. El regreso a la normalidad parece ya una ilusión.

Así, concluyó la era de Donald Trump, en una apoteosis de narcisismo, incompetencia y violencia. El presidente multimillonario se guardó lo peor para el final. Tras haber perdido la elección el 3 de noviembre de 2020, se negó a reconocer su derrota y atiborró los tribunales con decenas de recursos – todos rechazados, incluso por los jueces que él mismo había nombrado –, consideró que había ganado y que le habían robado su victoria con un método nunca especificado. Esa teoría absurda se transformó en palabra santa para los legisladores republicanos, en especial para los más jóvenes y ambiciosos que se apresuraron en difundirla. El punto culminante llegó el 6 de enero, cuando Trump convocó a sus partidarios a dirigirse al Capitolio, en Washington, donde los parlamentarios estaban a punto de certificar el resultado del escrutinio.

El planeta entero sabe cómo terminó: la muchedumbre atacó la sede del poder legislativo en un estallido de violencia bufonesca que exhibió a agitadores con cuernos de bisontes y atuendos carnavalescos invadiendo el corazón más sagrado de la democracia estadounidense. Algunos se tomaron selfies en los corredores de mármol, otros agitaron banderas confederadas, no faltaron quienes clamaron por asesinatos. Sin dudas, esperaban que al aterrorizar a los legisladores ayudaría a Trump a mantenerse en el poder; más allá de ese objetivo inmediato, sus intenciones eran borrosas.

Siempre choca ver a gente fantasiosa cometer monstruosidades escuchada en la fe en sus creencias. En este caso, los asaltantes del Capitolio cruzaron una línea sagrada para la mayoría de los estadounidenses. Y, así, consiguieron algo que nadie había logrado durante los cuatro años de mandato de Trump: generar vergüenza en las propias filas del Partido Republicano.

De un día para el otro, las figuras conservadoras más mediáticas pasaron del apoyo franco y cordial a la muchedumbre embravecida por el Presidente al intento desesperado por despegarse del ataque al Capitolio, llegando incluso a inculpar sin ningún viso de verosimilitud a los “antifa” (antifascistas). Twitter le cortó el chorro a su usuario más famoso. La Cámara de Representantes lo imputó (“*impeachment*”) por segunda vez, algo inédito en la historia de las presidencias de Estados Unidos. Sin embargo, el contragolpe más rudo sobrevino cuando los grandes bancos del país anunciaron que dejarían de financiar al Partido Republicano, cuyo objetivo principal fue

siempre proteger a esos mismos bancos mediante leyes favorables.

Desde entonces tal vez algo nuevo ha comenzado en Estados Unidos. Desde hace una década, varios especialistas destacados predicen un derrumbe inminente del conservadurismo, de la era Reagan y del “Grand Old Party”, inexorablemente barridos por la evolución demográfica, el triunfo del progresismo multicultural y el advenimiento de una nueva generación de estadounidenses. El naufragio del trumpismo en un mar de locuras y violencia ¿será la realización de aquellas profecías?

Silicon Valley vota demócrata

Para responder esta pregunta debemos considerar a la era Trump en su totalidad, y es necesario considerar a esa categoría de electores que, durante los últimos veinte o treinta años, abandonaron progresivamente el campo republicano para cerrar filas con el electorado demócrata. A esa gente la conozco bien: son personas con buen gusto y buena educación, para las cuales la vida es una sucesión de encantos y placeres. Pienso en los habitantes de los suburbios blancos más ricos. En los cien condados que tienen las mejores escuelas del país, Joseph Biden obtuvo el 84% de los votos. En los cien condados con el ingreso medio más elevado llegó al 57% (1). Hace treinta años, los republicanos ganaban con comodidad en esas dos categorías.

Comparar el peso económico de cada territorio con el voto de sus electores permite captar la medida del fenómeno. A pesar de haber perdido la elección, Hillary Clinton se vanaglorió un día de haber ganado en las zonas más “dinámicas” del país, las que reúnen “los dos tercios del Producto Interno Bruto interno estadounidense” (2). Pues bien, Biden superó esos resultados: los condados en los que triunfó el candidato demócrata representan el 71% de la actividad económica de Estados Unidos, contra solamente el 29% en el caso de los condados pro-Trump (3).

Crecí en uno de los lugares prósperos de los que hablan estos estudios: Johnson County, en los suburbios de Kansas City, uno de esos barrios periféricos opulentos de la “*white flight*” (“fuga de Blancos”), donde los hogares blancos que huyeron de los centros de las ciudades viven entre ellos. A pesar de que mi familia no era especialmente rica, nuestro ambiente social, constituido de abogados, médicos y arquitectos cuyos hijos asistían a las mejores escuelas públicas, era de lejos el más rico de Kansas. Los habitantes trabajaban en complejos de oficinas relucientes, hacían las compras en centros comerciales inmensos y suntuosos, jugaban al golf en *greens* paradisíacos, cenaban en restaurantes de clase mundial y vivían en imitaciones de *petits hotels* cuyos terrenos se extendían en kilómetros de praderas. De joven yo salía en automóvil con amigos, poníamos punk rock a todo volumen y bajábamos por el boulevard de seis carriles en Johnson County para burlarnos a los gritos de las pretensiones burguesas.

Nos burlábamos de esa gente porque eran la clase dirigente. Johnson County no solamente era blanco y rico, sino también, de lejos, uno de los lugares más visceralmente republicanos de Estados Unidos. En esa época, los conservadores controlaban por así decir todos los puestos importantes y ganaban todas las elecciones. Nos parecía que siempre había sido así. El condado no había votado a

favor de un candidato demócrata a la presidencia desde 1916, cuando Woodrow Wilson habitaba la Casa Blanca. Sus electores habían despreciado a Franklin D. Roosevelt y John F. Kennedy, pero adoraban a Barry Goldwater, el feroz anticomunista que había llevado a los republicanos a una tremenda derrota en 1964.

Sin embargo, en noviembre de 2020, Johnson County fue uno de los cinco condados de Kansas que votó mayoritariamente al candidato demócrata Biden. Cuando lo recorri en automóvil, antes del escrutinio, me sorprendí al observar innumerables carteles con la sigla “BLM” –por “Black Lives Matter”, “Las vidas de los Negros cuentan”– plantados directamente en los prolivos jardines de los vecinos. En un terreno ubicado frente al antiguo domicilio del hermano del presidente Dwight D. Eisenhower se levantaba un monumento de arte hortícola, que representaba una estatua de la Libertad cubierta con un hilo siniestro del que colgaba una pancarta: “¡Por favor sálveme! ¡Salve a la democracia!”.

Sin embargo, la composición social de este electorado no cambió en lo más mínimo. Sigue siendo masivamente blanco, totalmente corporativo y extremadamente rico. Los hijos siguen asistiendo a muy buenas escuelas, los precios de las propiedades vuelan como nunca y las mansiones exuberantes que parecen repostería relucientes siguen estando allí. Johnson County sigue mirando con desprecio y condescendencia a las masas republicanas menos favorecidas que habitan en la región, a tal punto que ahora lo hace desde la izquierda, al menos en el sentido que este término tiene en Estados Unidos. Uno puede seguir mofándose de las residencias excesivas de la clase dominante si lo desea, pero ahora no resultaría extraño encontrar allí muy a menudo un cartel que diga: “Los derechos de la mujer son derechos humanos”, “Escuchen lo que dice la ciencia” o “El amor, es el amor” (un slogan destinado a educar a los homofóbicos).

Localmente, uno de los duelos políticos más ajustados del último mes de noviembre oponía a un demócrata de Johnson County contra un republicano del oeste de Kansas, en el marco de la disputa por una de las bancadas estatales en el Senado. El candidato pro Biden gastó en su campaña una suma cuatro veces superior a la de su rival pro Trump: 28 millones de dólares contra 7 millones. Una distancia de esta magnitud hubiera sido inconcebible hasta hace muy poco. El apoyo generoso e incondicional del mundo del dinero al Partido Republicano fue desde siempre un principio rector de la vida política de este país. Todos los esfuerzos para comprender nuestro sistema necesariamente comenzaban por el siguiente recordatorio: es por esa razón, se decía, que los republicanos toman las medidas que toman; por eso proclaman una fe ciega en la ley del mercado; por eso sus dirigentes se jubilan tempranamente y se transforman en lobistas; y, por supuesto, por eso los republicanos pulverizan a los demócratas en términos de financiamiento electoral.

Pues bien, no fue el caso esta vez. Trump desde luego siguió al pie de la letra las reglas del Partido Republicano, al acordar beneficios exuberantes a los ricos y al mundo de los negocios durante sus cuatro años en la Casa Blanca, como por ejemplo cuando bajó una vez más los impuestos u organizó la impunidad de quienes contaminan. Pero no fue suficiente. Biden gastó 1.600 millones de dóla-

res en su campaña electoral, contra 1.100 millones en el caso de Trump. El multimillonario engreído recibió una paliza en su propio terreno. Wall Street y Silicon Valley, y antes que nadie las GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), que figuran entre los principales donantes para la campaña de Biden, se inclinaron mayoritariamente por el Partido Demócrata. Trump sin dudas se impuso entre la “vieja” economía industrial, como la industria agroalimentaria, el carbón o el petróleo; pero todos los sectores que definen la cultura estadounidense pasaron a la “resistencia” contra él: la industria del entretenimiento lo detestaba, la tech lo detestaba, el mundo universitario lo detestaba. El cuerpo diplomático también lo despreciaba, al igual que el aparato de seguridad interior –al ser los republicanos responsables de la guerra en Irak– y el mundo de la prensa (salvo la de extrema derecha).

Testimonios de la vergüenza

Incluso la Central Intelligence Agency (CIA) lo tenía en la mira. A tal punto que, durante los últimos cuatro años, la imagen de la agencia de espionaje estadounidense se invirtió súbitamente. Desde la izquierda, hoy en día, casi sienten pena por ella, a raíz de las calumnias y la animosidad con la que fue tratada por Trump, quien la acusó de haber exagerado la injerencia de Rusia en la elección de 2016. *The Washington Post* ilustró este viraje en un artículo sobre la “historia oral” del movimiento de oposición a Trump (4). Esta extensa compilación de testimonios está dividida en capítulos, cada uno le da la palabra a personajes importantes que cuentan hasta qué punto los impactó la conducta del presidente y de qué manera se pasaron a la “resistencia”. El periódico no ahorra detalles sobre la reacción horrorizada de esta gente al día siguiente de la elección de 2016, ni sobre quienes decidieron participar de la Marcha de las Mujeres de enero de 2017, ni sobre el traumatismo que les hizo sufrir Trump con su discurso en el “Memorial Wall” de la CIA –el monumento en homenaje a los agentes caídos en cumplimiento del deber–, el 21 de enero de 2017.

En ese “sitio venerado”, como lo define el *Washington Post*, el presidente pronunció, como de costumbre, una pieza estúpida y vanidosa. Un “discurso más que vergonzoso” según las palabras de Tammy Duckworth, senadora demócrata de Illinois. Pete Buttigieg, antiguo rival de Biden en las primarias, que acaba de ser nombrado ministro de Transportes, lo vivió como un “momento verdaderamente oscuro”. Ofenderse porque un político le falte el respeto a la CIA constituye sin dudas una notable innovación en el campo progresista. La dimensión histórica de esta ruptura fue sin embargo eclipsada por las palabras del exdirector de la CIA, Michael Hayden, cuando fue invitado a comentar el discurso del Memorial Wall: “La inteligencia es la búsqueda de la verdad. El objetivo de un agente de inteligencia siempre consiste en acercarse lo máximo posible a la verdad. Es algo que creo tenemos en común con la prensa”.

Es cierto que durante la era Trump se hizo difícil distinguir a la prensa liberal de lo que en Washington suele denominarse la “comunidad de la inteligencia”. Hayden se transformó incluso en 2017 en comentarista de Cable News Network (CNN), al igual que James Clapper, director de Inteligencia

Nacional durante la presidencia de Barack Obama. John Brennan, otro ex director de la CIA, pasó a integrar la National Broadcasting Company (NBC). Varios ex jefes de espionaje se reconvirtieron laboralmente de forma similar, especulando en las pantallas de televisión sobre cuestiones de “desinformación” trumpista y sobre el poder oculto que habría ejercido Vladimir Putin sobre el ex presidente estadounidense.

Espectacular fracaso del periodismo

Todo esto nos conduce indefectiblemente al “Rusiagate”, esa pesadilla de la era Trump que ocupó tanto lugar durante tantos años, un laberinto sin fin del que nadie quiere recordar los vericuetos más extravagantes. En los orígenes de este escándalo nos encontramos con la “conspiración”, es decir la idea de que Trump, de una u otra forma, había conspirado con el gobierno ruso para alterar la elección de 2016. Lo cual implicaba afirmar que no se trataba solamente de un incapaz o un estafador, sino que además operaba como agente de una potencia extranjera hostil.

Cientos de acusaciones inflaron esa causa. Dejamos a los historiadores del futuro la responsabilidad de precisar qué experto alimentó cada detalle, de qué manera las reglas del periodismo fueron suspendidas y cómo la información televisiva explotó el miedo a Rusia con el objetivo de aumentar el *rating*. Atengámonos a lo esencial: esta historia fue la gran telenovela de los años Trump, el tema dominante de las “portadas”, y siempre fue tratado en un único sentido, con toneladas de revelaciones devastadoras. Extrañamente, las supuestas revelaciones nunca llevaron a ningún lado. Nadie fue perseguido por el fiscal Robert Mueller por complicidad con el gobierno ruso en el marco de una conspiración. Y en su informe de marzo de 2019 concluyó: “En definitiva, esta investigación no ha demostrado que miembros de la campaña de Trump hayan conspirado o se hayan coordinado con el gobierno ruso en el marco de actividades de injerencia electoral”.

Dicho de otra forma, el escándalo político más mediatizado de la era Trump gestó un escándalo periodístico. En su afán de esmerilar a un presidente que despreciaban, los periodistas renunciaron a toda apariencia de equilibrio o de ecuanimidad. Lejos de disimular sus anteojeras, las reivindicaron como un avance necesario ante las mentiras incesantes de Trump. Tal como lo escribió Matt Taibí, el “Rusiagate” es “el arma de destrucción masiva de la nueva generación”, pero a una escala todavía mayor: “Los errores y las exageraciones alcanzaron un nivel tal que directamente barrieron la realidad de los hechos. Nos transformamos en militantes, como si la idea de una prensa independiente cuyo rol consistiría en separar los hechos de la ficción no tuviera más sentido” (5).

Pero este escándalo tuvo escasas consecuencias. Los columnistas que revelaron informaciones falsas sobre el “Rusiagate” casi nunca fueron sancionados. Este espectacular fracaso del periodismo no les impidió a los protagonistas autoperibirse como héroes comprometidos en una lucha sin cuartel contra las fuerzas de la desinformación proveniente del extranjero y contra su cómplice en la Casa Blanca. Como lo recordaba el eslógan melodramático adoptado en 2017 por *The Washington Post*, “la democracia muere en la oscuridad”.

La prensa demócrata se hizo un festín al trazar un paralelo histórico entre los años Trump y la Guerra Fría, ese otro período en el que la tenebrosa Rusia amenazaba la democracia y en el que la información “seria” libraba un combate fundamental contra la propaganda extranjera. “De Black Lives Matter al lobby de las armas, cada vez que aparece una división en la sociedad, Rusia recurre a la desinformación para profundizarla, sembrando así el caos en el conjunto del espectro políti-

co”, diagnosticaba *The New York Times* en 2018, en un video titulado “Operación Infektion”, en referencia a una célebre operación de desinformación soviética (6).

Pero ¿cómo ganar esta nueva Guerra Fría, todavía más crucial que la precedente, ya que tiene a la verdad por objeto? El campo demócrata retomó un arma que había sido utilizada en aquella época: la censura. En una entrevista reciente, el ex director de la legendaria Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), Ira Glasser, un hombre de izquierda de la vieja escuela, comentó una conferencia que había dictado delante de un público multirracial en una prestigiosa escuela de derecho: “Al finalizar el debate, algunas personas en la sala se pusieron de pie, una tras otra, entre ellos profesores jóvenes, para declarar que su objetivo de justicia social para los Negros, las mujeres y las minorías de todo tipo era incompatible con la libertad de expresión, y que esta era su adversario” (7).

No se puede comprender la política estadounidense sin tener en cuenta lo que señala Glasser: muchos progresistas aceptaron hacer frente común con la industria de las tech para así conjurar la “desinformación” y los malos pensamientos a los que podría estar expuesto el hombre común. Las voces nocivas deben ser excluidas de las plataformas. Los puntos de vista mentirosos –como los tuits posteados por Trump tras la elección de noviembre– deben ser ocultados o desactivados por las autoridades competentes con ayuda de mensajes de alerta. Los contenidos que contengan “reclamos infundados, fabricados o inexactos” deben ser suprimidos.

Pero, antes de embarcarnos en el combate para salvar a la democracia de las tinieblas putinescas, deberíamos recordar la manera en que se desarrolló la Guerra Fría. El “miedo a los rojos” de fines de los años 1940 fue avivado para acusar a la administración de Truman de connivencia con los comunistas –y orientar aun más a la derecha su política exterior–. Los cazadores de rojos tomaron como blanco a los “agentes de la subversión”, y consiguieron que estos fueran silenciados o excluidos de sus cargos, les arruinaron la vida. Fue un período de histeria moral, donde la sospecha tenía valor de prueba.

Guerras culturales

La cultura política actual nos lleva directamente a una situación comparable. Incluso más ahora que el ataque al Capitolio intensificó el clima de miedo y paranoia. Pero ¿quiénes son los subversivos que la nación debe perseguir? ¿Dónde están los J. Edgar Hoover que van echar bencina al fuego y neutralizar al enemigo? El video de *The New York Times* mencionado un poco más arriba nos enseña que las campañas de desinformación rusas explotan las “divisiones en nuestra sociedad”, pero esta afirmación podría aplicarse igualmente a los puntos de vista de los cronistas de *The New York Times*. Twitter funciona de la misma manera. CNN también, al igual que Facebook y la mayoría de los medios. Como lo demuestra Matt Taibí en su libro, ese es el “business model” de los medios masivos hoy: las guerras culturales arrasan de la mañana a la noche, ya que la indignación y la división producen *rating* y les permiten a los medios de comunicación vender golosinas y pañales para adultos. Al arrancar el auto escucharás por la radio una voz que critica a un actor por haber actuado mal en alguna película. Al encender el televisor verás a un editorialista que fustiga a militantes antifascistas porque tiraron objetos a la policía o porque derrumbaron una estatua.

Desde luego, no siempre se trata de desinformación. *The New York Times* cree fervientemente que las guerras culturales que elige alimentar son cruzadas por el bien y la razón. Y sin dudas los conservadores están convencidos de tener que silenciar a sus opositores, tal como lo hicieron en otros momentos de nuestra historia. Esta vez, sin em-

bargo, no es la derecha la que controla las armas. La legitimidad cultural reposa completamente en las manos de la coalición de los indignados, cuya respuesta es simple: los expertos saben. Ellos son los que deben apretar el botón “silencio”.

La legitimidad de una guerra cultural no se sostiene por la veracidad de sus argumentos, lo cual, es cierto, no siempre es fácil de determinar: depende de la posición de sus protagonistas en el seno de su comunidad profesional. A la inversa, lo que define una “información trucada” es el hecho de que sea emitida por una persona ordinaria sin derecho a la palabra, un iluminado que ataca a los expertos de Twitter y difunde teorías conspirativas en Reddit.

El problema de la desinformación ilustra entonces uno más general vinculado a la autoridad de las élites, especialmente delicado desde la llegada de Trump. Como escribió Jonathan Rauch, de la Brookings Institution, en un artículo publicado por *The Atlantic* durante el exigente verano boreal de 2016, “nuestro problema político más urgente hoy en día está ligado a que el país abandonó al establishment, y no a la inversa” (8).

Preocuparse por la crisis de autoridad: a eso se dedican algunos progresistas estadounidenses en los tiempos que corren. Las preocupaciones más antiguas, económicas, por ejemplo, son recibidas con sarcasmo mientras la restauración de la jerarquía de los expertos parece imponerse como una urgencia moral. “Respete a la ciencia”, se lee en los carteles y calcomanías visibles en los barrios demócratas. Respeten a los expertos. Respeten las jerarquías. Quédense en su lugar.

La política exterior, afirman ellos, debe ser manejada por la “comunidad” diplomática. La política de la Reserva Federal debe estar protegida de la nefasta influencia de los granjeros. No se admitirá, por lo menos en público, ninguna voz discordante frente al consenso interno de cada profesión. La duda debe ser desplazada, o incluso borrada. Los miembros de las profesiones médicas deberían exhibir un punto de vista unánime –una lógica de expresión del pensamiento que se extiende a todos los campos del conocimiento–.

Sermones contraproducentes

No se trata de abogar por una libertad de expresión absolutista, ni de justificar las teorías complotistas y xenófobas, o los ataques contra la enseñanza universitaria. Se trata del futuro del Partido Demócrata y del futuro de la izquierda estadounidense. Una sociedad democrática no puede sentirse a gusto cuando se le repite una y otra vez, en palabras más sutiles o más groseras, que uno de sus problemas fundamentales reside en su insubordinación ante la autoridad de las élites tradicionales. Peor aun, cuando esas élites se juntan con una unanimidad sin precedentes para proclamar que su lugar destacado es garantía de corrección y justifican así sus privilegios; cuando afirman que estamos embarcados en una nueva Guerra Fría contra la mentira; cuando los medios renuncian a toda neutralidad, se presentan como superhéroes y se declaran místicamente aliados a la verdad y a la legitimidad; cuando se hace todo eso y luego quedan ligados a una de las informaciones más fabulosamente falsas de la década, entonces una sociedad como la nuestra no puede ignorar tamaña hipocresía, ni dejar de reaccionar.

Al fin de cuentas, esos sermones terminan siendo contraproducentes. Los cuatro años dedicados a retar a los partidarios de Trump no habrán servido más que para convencerlos de redoblar su devoción por el ícono corrompido. Intentar avergonzar a la gente que no alcanza tus estándares de calidad personal nunca es la estrategia más adecuada para modificar su comportamiento.

Sin embargo, la izquierda estadounidense tiene experiencia histórica para saber que la política del reproche conduce a resultados

mediocres. Durante la campaña a la elección presidencial de 1936, las clases dominantes (patrones de prensa, economistas, abogados de empresas...) se unieron en una reacción de pánico moral para tratar de evitar un segundo mandato de Roosevelt. Casi el 85% de los diarios del país se oponían al presidente saliente y lo atacaban en los términos más duros, lo llamaban aprendiz de dictador, comunista o fascista; lo acusaban de reunir a los locos más desahorados, de ignorar a los expertos con autoridad y de ser una marioneta de los soviéticos.

Esta campaña terminó con el éxito que sabemos. Roosevelt respondió a los “realistas de la economía” y ganó la elección con holgura. A diferencia de Trump, Roosevelt era un “populista” auténtico, y auténticamente popular. Como lo advirtieron varios analistas de la época, el frente único que el Estados Unidos de arriba construyó contra él aumentó su popularidad.

Si su profesión todavía existe dentro de treinta años, los historiadores observarán el período de cuatro meses que acabamos de vivir con una mezcla de desagrado y confusión. Desagrado delante del espectáculo del ignorante grosero y vanidoso que reinaba en la Casa Blanca, devorando hamburguesas y escupiendo teorías conspiracionistas delirantes por Twitter mientras que la epidemia de Covid-19 generaba decenas de miles de muertos en el país. Pero, al observar la actitud de los progresistas, agitarán la cabeza, incrédulos. ¿Como puede ser que estos hayan creído que sería bueno para su causa unirse a los grandes poderes económicos y culturales de nuestra época –los señores de Silicon Valley– para censurar a sus opositores? Glasser relata el gusto con el que los universitarios de izquierda adoptaron los “códigos de expresión” (*speech codes*) muy estrictos promovidos por sus facultades para impedir los casos de acoso, porque “pensaban poder controlar contra quienes serían utilizados”. Pero hay algo, afirma Glasser, que estos progresistas bien intencionados no comprendieron, y es que “las restricciones del lenguaje son como el gas lacrimógeno. Es un arma aparentemente muy eficaz cuando la tienes en tus manos y el blanco está cerca, pero cuando cambia de dirección –principalmente en el plano político–, termina con gas en la nariz”.

Como sugiere esta comparación, una historia como esta no puede tener un final feliz. El ataque al Capitolio nos ha horrorizado. Pero los demócratas se contradicen si creen que la censura resolverá el problema. Hay una gran cantidad de adjetivos para describir la acción de un partido que, a lo largo de los últimos treinta años, no ha ocultado su desprecio por la clase obrera ni sus reverencias a las autoridades de la alta sociedad. “Progresista” no forma parte de ese grupo de adjetivos. ■

1. Aaron Zitner y Dante Chinni, “How the 2020 election deepened America’s white-collar/blue-collar split”, *The Wall Street Journal*, Nueva York, 24-11-20.

2. Eli Watkins, “Hillary Clinton: US does ‘not deserve’ Trump”, CNN, 12-3-18.

3. Mark Muro *et al.*, “Biden-voting counties equal 70% of America’s economy”, The Brookings Institution, Washington, DC, 10-11-20.

4. Philip Rucker *et al.*, “Voices from the fight: An oral history of the four-year movement to defeat Donald Trump”, *The Washington Post*, 8-11-20.

5. Matt Taibí, *Hate Inc.: Why Today’s Media Makes Us Despise One Another*, OR Books, Nueva York, 2019.

6. Adam B. Ellick y Adam Westbrook, “Operation Infektion. Russian disinformation: from Cold War to Kanye”, *The New York Times*, 12-11-18, www.nytimes.com

7. Nick Gillespie, “Would the ACLU still defend Nazis’ right to march in Skokie?”, *Reason*, Los Ángeles, enero de 2021.

8. Jonathan Rauch, “How American politics went insane”, *The Atlantic*, Washington, DC, julio-agosto de 2016.

*Periodista, autor de *The People, No: A Brief History of Anti-Populism*, St Martin’s Press, 2020.

Una consigna más popular que nunca

Vértigos independentistas en Escocia

por Rory Scothorne*

El Reino Unido se asemeja a veces a un juego de palitos chinos en el que el retiro del palillo “Unión Europea” amenazaría al conjunto con un colapso generalizado. El Brexit, efectivizado a principios de 2021, reaviva las esperanzas de autonomía en Edimburgo. Pero Escocia sigue atrapada entre un futuro británico que ya no desea y una independencia que aún no puede reclamar.

Si el Covid-19 no perturba el calendario electoral, al acercarse el 6 de mayo de 2021 Escocia se encontrará en el foco de atención del interminable drama constitucional que el Reino Unido ofrece al mundo desde hace algunos años. El escenario ya está escrito: a pesar de la pandemia, las sextas elecciones generales de Escocia se centrarán, más que nunca, en torno a la cuestión de la independencia.

El Partido Nacional Escocés (SNP, en inglés) tiene garantizada una cuarta victoria consecutiva y la independencia ocupó el primer lugar en una serie inédita de diecisiete encuestas consecutivas. Si como en 2011 el SNP obtiene la mayoría, exigirá un referéndum sobre el tema; si no, confiará en los Verdes escoceses para conseguirlo.

No obstante, sólo Londres puede autorizar un voto vinculante. Por lo que la determinación del SNP podría estrellarse contra los muros del Palacio de Westminster, garante de la soberanía británica. El primer ministro Boris Johnson –cuyo triunfo en las elecciones generales de 2019 avivó las llamas del sentimiento independentista al otro lado del Muro de Adriano– declaró que tras el referéndum celebrado en 2014, el país no organizaría otro escrutinio sobre el tema hasta dentro de cuarenta años.

La primera ministra

Por lo tanto, de un lado se encuentran el SNP y un puñado de partidos más pequeños –los Verdes, el Partido Socialista Escocés (SSP, en inglés– y organizaciones como la Campaña para la Independencia Radical, de ultrazquierda, o la coalición Yes Alba. En el mundo de la cultura, los artistas y escritores aportan una dosis de glamour e incluso de protesta chic a los grises manifiestos de las formaciones políticas independentistas. El tema también predomina en las redes sociales y en los medios de comunicación alternativos. Tras el referéndum de 2014, la empresa estadounidense News-Quest aprovechó un mercado en expansión para lanzar un diario, *The National*.



Lobsang Durney, Okupa, 2019 (Gentileza Galería Bahía Utópic)

Enfrente están el gobierno británico y los principales partidos del país, sin otra respuesta a la erosión de su legitimidad en Escocia que el perpetuo recordatorio de la soberanía constitucional del Parlamento. Conservadores, laboristas y demócratas liberales compiten por los cada vez más escasos votantes “unionistas”, prometiendo oponerse a una segunda consulta, cualquiera fuera el resultado de la votación del 6 de mayo. Es lamentable ver a la corriente favorable a mantener a Escocia dentro del Reino intentar alinear a las organizaciones populares que la animan; y peor aun, intentar convocar a otras celebridades que no sean la autora J. K. Rowling. El tradicional escepticismo de la prensa escrita sobre la independencia ha sido compensado

ahora con su desprecio por el Brexit y el gobierno de Johnson. Incluso la British Broadcasting Corporation (BBC), cuya cobertura de las elecciones de 2014 había revelado su sesgo anti-independencia, está siendo criticada por los unionistas que la encuentran demasiado complaciente con el SNP.

Entre las quejas figura la forma en que el canal trata a la primera ministra escocesa Nicola Sturgeon (SNP), cuyo manejo de la crisis del Covid-19 fue apoyado por sus administrados. La popularidad de Sturgeon constituye un factor importante en el éxito electoral del SNP, y la comparación de su estilo sobrio y técnico con el nacionalismo desordenado de Johnson alimentó el apoyo a la independencia durante la pandemia.

Permanecería en la UE

Así pues, la dinámica parece ser favorable al divorcio, lo que podría validar la estrategia gradualista que desde los años 1990 adoptan los sucesivos dirigentes del SNP. Esta apuntó a maniobrar en el seno de las instituciones del Estado británico, liderando el primer Parlamento escocés en 1998, tras la descentralización (*devolution of power*) votada el año anterior, y luego utilizando el aparato administrativo para demostrar que el país podía gobernarse a sí mismo. En efecto, las Casandras prometían en esa época que la salida de Escocia conduciría al caos y a la pérdida de tótems preciados para una parte de la población. El SNP siempre respondió que una Escocia independiente solicitaría su ingreso a la Unión Europea (incluso si era probable que Madrid se opusiera para no alentar a los independentistas catalanes), conservaría la libra esterlina, seguiría sujeta a la corona (1) y miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El razonamiento gradualista siempre ha sostenido que una acumulación progresiva de legitimidad electoral obligaría a Londres a acceder a las demandas del SNP. Una lógica que se apoyaba en la decisión del primer ministro conservador David Cameron (2010-2016) de celebrar un referéndum vinculante en 2014. En un contexto en el que la independencia parece mucho más popular, Londres podría, sin embargo, vacilar antes de reiterar la apuesta. La probabilidad de su rechazo corrobora la idea de que Escocia está marginada y humillada dentro de la Unión; pero también estimula a los críticos del gradualismo.

El “Plan B”

Algunos líderes (y a veces miembros ordinarios) del SNP ya no dudan en denunciar la disciplina implacable por la que es conocido. En enero de 2021, Kenny MacAskill, uno de los cuarenta y siete miembros del partido en el Parlamento de Westminster, criticó la negativa de Sturgeon a discutir un “Plan B”: llevar a Londres ante los tribunales, organizar un referéndum sin su aprobación o incluso declarar la independencia de manera unilateral. Pero discutir una estrategia más radical antes de ganar las elecciones de mayo comprometería la reputación del SNP, ganada con tanto esfuerzo: un partido estable y enemigo de asumir riesgos. Sturgeon es muy consciente de ello. Gran parte de su aprobación se debe a la sensación compartida de que el nacionalismo anglo-británico es una amenaza mayor para la estabilidad que su homólogo escocés.

Además, como lo ilustra el conflicto abierto entre Sturgeon y su predecesor, Alexander Salmond, el movimiento independentista atraviesa una importante crisis. No a pesar de sus éxitos, sino a causa de ellos. Estratégicamente, el gradualismo funciona de maravillas en la formación de una base social favorable a sus proyectos. Pero su apuesta por la legitimidad electoral formal es también su talón de Aquiles: sin autorización de Londres, es imposible transformar el apoyo del que goza en un cambio político. Asimismo, el respeto escrupuloso de las normas, leyes y procedimientos que este camino implica prohíbe muchos otros.

Hacer que Escocia sea “ingobernable”, como proponen ahora algunos activistas para forzar la mano del Reino Unido, parece como mínimo arriesgado: desde la descentralización, la nación ha estado controlada casi

exclusivamente por el SNP. Pero cuando no existe otra opción que esperar una hipotética luz verde de Londres, en el interior del partido algunos comienzan a sentir hormigueos.

Para el SNP, el escenario ideal sería una victoria aplastante en mayo. Londres tendría entonces que autorizarlo a celebrar un referéndum vinculante, cuyo resultado nadie puede, por el momento, predecir. Algunos pesos pesados conservadores temen que un rechazo de Westminster infle aun más las velas de la independencia. Pero los ánimos caldeados que atestiguan los intercambios internos dentro del SNP refuerzan la intransigencia de los unionistas en el sur: frente a un muro externo infranqueable, el SNP podría quebrarse, lo que facilitaría un retorno al *statu quo*.

El Partido Laborista (Labour), que durante años ha dominado la política escocesa, observa la situación con preocupación. Mientras los conservadores pueden obtener mayorías electorales gracias a los distritos electorales conseguidos en Inglaterra, el Labour no lo lograría ni en sueños. Siempre contó con los cincuenta y nueve escaños escoceses en Westminster (desde 1983, los conservadores nunca han podido arrebatarse más de trece). E incluso sin mordisquear el bastión del SNP (47 escaños), los laboristas podrían esperar que este apoye una gran parte de su programa si llegaran al poder sin mayoría. En tal contexto, sin embargo, el precio a pagar sería la organización de un referéndum... que provocaría la caída del gobierno. En otras palabras, las condiciones del Labour para acceder al poder también preparan su fracaso. La última esperanza de los laboristas es que la oposición conservadora a un nuevo referéndum debilite al SNP más que a la propia Unión.

Nacionalismo militante

Dada la trayectoria de la crisis política del Reino, parecen escasas las posibilidades de que sus disfunciones estructurales se resuelvan en el corto plazo. Porque aun cuando los laboristas pudieran llegar al poder sin temer la salida de Escocia, no podrían transformar una economía que genera pro-

fundas desigualdades. El nuevo horizonte laborista esbozado por Keir Starmer (2) se caracteriza por ahora por el abandono del ambicioso programa económico del ex líder del partido Jeremy Corbyn, su insistencia en la “responsabilidad fiscal” y su deseo de ahogar las “disputas territoriales” en una “comisión constitucional”. Con la esperanza de reconquistar el electorado del norte de Inglaterra, Starmer apoyó el acuerdo de Brexit de Johnson. Pero al hacerlo, exacerbó el déficit democrático que los escoceses denuncian: los escoceses, que son en gran parte pro-europeos, se ven privados de representación en los dos principales partidos del Reino. Las diversas culturas políticas del país son cada vez menos compatibles, mientras que Inglaterra está descubriendo su propio nacionalismo militante, cuyo impacto se extiende más allá de sus fronteras.

Para Escocia, permanecer en la Unión significaría prolongar el estado de estancamiento político, cultural y económico que se ha ido apoderando gradualmente del país desde el establecimiento del Parlamento escocés hace más de veinte años. Útil para construir una coalición estable para la independencia, la moderación política priva a Escocia de herramientas eficaces para responder al retroceso industrial, lo que ha hecho que dependa de los sectores turístico y financiero, la extracción de combustibles fósiles y el empleo público. El Partido Laborista Escocés ha tratado de presentar una estrategia más ambiciosa en ese ámbito, pero padece su obstinado unionismo, que lo aleja de la gran mayoría de votantes.

Además, paralizada en el plano político, la sociedad escocesa atraviesa una crisis que pocos reconocen: la prensa escrita nacional colapsa bajo la presión de las redes sociales o como resultado de las adquisiciones por parte de las multinacionales; muchas de sus universidades se encuentran entre las más precarias y privatizadas del Reino Unido. Y un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales (ONG) –muchas de ellas dependientes de subvenciones– tratan con desesperación de compensar la disminución de

servicios públicos en ruinas. Pero estas preocupaciones pasan a segundo plano frente al gran espectáculo de las disputas protagonizadas por los líderes políticos.

¿La independencia insuflaría algo de vida en este paisaje? El movimiento obrero escocés y su ala parlamentaria –o lo que queda de ella– se liberarían de su lastre unionista. Podrían entonces reafirmar la relevancia de su lucha política y cultural por las clases populares. Pero la derecha se beneficiaría del mismo fenómeno. Y la perspectiva de una minoría unionista derrotada –pero no obstante significativa– que descubriera tener afinidades con el ala derecha del nacionalismo escocés es motivo suficiente de preocupación para los progresistas.

En el plano económico, la hoja de ruta del SNP para la independencia es inequívocamente neoliberal. Comprometería al país en el camino de mantener la libra esterlina y proporcionaría por lo menos una década de severa reducción del déficit presupuestario; en resumen, sería un seguro desastre para la población. La inversión extranjera se reorientaría hacia una clase de “capitalistas nacionales” cuya inclinación natural llevaría a una mayor mercantilización de la mano de obra, los recursos naturales y los servicios públicos. Además, unirse a la Unión Europea –una promesa del SNP– limitaría automáticamente la soberanía de Escocia; pero por su parte los críticos de esta idea de “independencia dentro de la Unión Europea” subestiman el costo de un divorcio simultáneo con Londres y Bruselas.

Efectos de la secesión

Por otra parte, una secesión de Escocia tendría consecuencias más allá de sus fronteras. En el Reino Unido, los laboristas y la izquierda en general se verían enfrentados por primera vez a su propia identidad nacional. Privado de un tercio de su territorio, el Reino tendría la medida de su poder real, incluido en el plano geopolítico. Que tenga que abandonar sus fantasías de “grandeza” no sería necesariamente algo malo. Pero confrontarse a sus propias desigualdades territoriales y culturales podría llevar a uno

de los Estados más centralizados del mundo occidental a dividirse un poco más. El ejemplo escocés no pasaría desapercibido en Gales e Irlanda del Norte.

A fin de cuentas, es probable que la independencia sea más un proyecto liberal-democrático que radical. Ofrecería la oportunidad de salir de un régimen anglo-británico cada vez menos democrático y liberal, cuya permanente crisis identitaria enmascara los problemas específicos –a menudo bastante aburridos– del gobierno escocés. Como mínimo, aclararía el espacio político en el que tendría que operar la izquierda local. Sin necesariamente facilitar la maniobra.

Pero este no es un argumento muy excitante. En el campo independentista, para muchos –especialmente aquellos que han encontrado en esta lucha un escenario donde mostrar su talento actoral, tan intrínsecamente radical como estéril– la idea de sustituir una elite conservadora por otra más liberal no es suficiente. Su rigidez podría terminar por fortalecer a la Unión.

“Algunos nacionalistas pierden mucho tiempo lamentando que la historia escocesa no se haya plasmado en un molde más melodramático”, escribió el intelectual nacionalista Stephen Maxwell en 1981 (3). La esperanza de que el futuro sea más excitante que el pasado despierta el entusiasmo de muchos. Pero el oscuro bosque de la identidad nacional es un lugar peligroso para todos aquellos que busquen emociones. ■

1. Véase Lucie Elven, “Inamovible monarquía británica”, *Le Monde diplomatique*, edición chilena, diciembre de 2020.

2. Véase Owen Hatherley, “Purga laborista en el Reino Unido”, *Le Monde diplomatique*, edición chilena, enero-febrero de 2021.

3. Stephen Maxwell, “The case for left-wing nationalism”, *SNP 79 Group Paper*, N° 6, Aberdeen People's Press, 1981.

*Escritor, Edimburgo. Autor, con Cailean Gallagher y Amy Westwell, de *Roch Winds: A Treacherous Guide to the State of Scotland* (Luath Press, Edimburgo, 2016).

Traducción: Teresa Garufi

Suscríbase

a la versión digital de Le Monde Diplomatique

La edición digital es más económica y permite ver los periódicos antiguos y acceder a los archivos

La suscripción digital al periódico más un libro digital vale \$4.300 mensual (Pago Automático con Tarjeta)

Suscripción digital al periódico más un libro digital \$49.000 al año

Suscripción digital al periódico \$2.200 mensual (PAT)

Suscripción digital al periódico \$19.500 al año

Vea todas las posibilidades de suscripción en

<https://editorialauncreemos.cl>

Consultas al teléfono 22 608 35 24

Tras el golpe de Estado, una movilización firme pero frágil

La juventud birmana desafía la Junta

por Christine Chaumeau*

El golpe de Estado en Birmania es el último en una larga y pesada historia de inestabilidad política en el país. Con una población que hace escuchar su rechazo principalmente a través de las redes sociales, surge la pregunta por qué tipo de unidad civil formará en el futuro cercano, o si es que habrá alguna.

“Tras los temblores de miedo que nos aquejan por las noches, nuestras esperanzas renacen cada mañana”. Ese 14 de febrero de 2021, Lamin Oo, productor birmano, superpuso en su cuenta de Twitter la fotografía de una manifestación contra la dictadura y un video de hombres armados con palos que aprovechaban la oscuridad para sembrar el caos en un barrio de Rangún, la capital económica del país. El objetivo de esos delincuentes: asustar y hacer retroceder a quienes participaban en la movilización contra el golpe de Estado del 1 de febrero. Unos días antes, la junta había liberado a más de veinte mil prisioneros de derecho común –una maniobra que les recordó a algunos birmanos el levantamiento de 1988–. También en aquella época criminales liberados en las calles habían sembrado el pánico, lo cual había servido para justificar la intervención brutal de las fuerzas armadas que provocó un baño de sangre.

En miles de cuentas de Twitter aparecieron las mismas frases: “La junta ataca”, “Salven a Birmania”. Un pedido de ayuda ante los militares que, a las tres de la mañana, ese 1 de febrero, habían dinamitado las esperanzas suscitadas por la transición democrática durante los últimos diez años. La detención de dirigentes electos del país, entre los cuales estaba Aung San Suu Kyi, jefa de Estado de hecho, y miembros de su partido, la Liga Nacional por la Democracia (LND), puso un punto al reparto del poder entre civiles y militares (1), en contra de los deseos de los birmanos, que habían reelegido triunfalmente a la LND en las elecciones del último mes de noviembre. De los 1.117 escaños sometidos a votación (2), dicho partido obtuvo 920, es decir 61 más que cinco años atrás y el 82% del total. El Partido de la unión por la solidaridad y el desarrollo, fundado por el exgeneral Thein Sein, obtuvo 71 escaños, es decir 117 menos, y apenas el 6,4% de los representantes electos. Para el ejército, este fracaso solo pudo ser posible gracias al fraude, lo cual justificaría su toma del poder.

Anatomía de un golpe

Camisa verde, galones, charreteras, mirada fija, el comandante del ejército Min Aung Hlaing, nombrado a la cabeza del Concejo de Administración del Estado, la nueva instancia que dirige al país, apareció en el canal de televisión del ejército, con la bandera de Birmania como único decorado. Una imagen anacrónica. Ocho días después del golpe de Estado, dirigió por primera vez la palabra directamente a la población e intentó



Ignacio Bahna, Combustión expansiva (Madera quemada), 2013 (www.ignaciobahna.cl)

convencerlos. Aseguró que tomó el poder de acuerdo a la Constitución y que habría nuevas elecciones al término de un año de estado de urgencia. Prometió que esta junta sería “diferente” de los anteriores regímenes militares, que aspiraba a una “democracia disciplinada”. Uno de sus predecesores, el general Than Shwe (quien estuvo a la cabeza del país entre abril de 1992 y marzo de 2011), hablaba, en su momento, de una democracia “floreciente y disciplinada” ...

En la calle y en las redes, la movilización aumenta. “Un pueblo de 54 millones de personas contra 500.000 hombres”, así lo resume Aung Kyaw Moe, director del Centro por la integridad social, en referencia a los efectivos de la Tatmadaw, el ejército birmano. “Unidos contra la dictadura”, reza la consigna de los manifestantes, funcionarios, banqueros, miembros del personal de salud, profesores, abogados, estudiantes que, cada día un poco más numerosos, se unieron a un movimiento de desobediencia civil de una amplitud inédita. El 14 de febrero, la red de ferrocarriles se detuvo, el aeropuerto funcionó con perturbaciones a raíz de la falta de empleados capaces de asegurar todas las actividades. Centros de salud y hospitales cerraron sus puertas, se quedaron sin empleados que decidieron salir a protestar contra la toma ilegal del poder. En plena pandemia de Covid-19, pero no había otra posibilidad. La urgencia estaba ahora en otra parte. Los birmanos no querían verse despojados del comienzo de libertad que habían degustado.

Quiénes tienen entre 10 y 30 años crecieron en un país abierto, conectado al resto del mundo a través de Internet. “Nuestros ojos y nuestras mentes se despertaron, sobre todo gracias a las redes sociales”, subraya la joven militante Thinzar Shunleí Yi, quien, después del golpe de Estado, vive escondida. Ellos silbieron con atención las elecciones de EEUU,

las manifestaciones en Hong-Kong, y apreciaron la diferencia entre lo que ellos vivían y las historias de represión que les habían contado sus padres.

Recuerdos que evocaban el miedo a lo arbitrario, detenciones nocturnas, vigilancia generalizada, brutalidad del ejército. También les hablan del golpe de 1962, cuando la Tatmadaw derrocó al gobierno electo en nombre de la unidad nacional. Y de 1990, cuando no reconoció el resultado del escrutinio en el que se impuso el principal partido de oposición, la LND. “Es difícil expresar lo que sentí al despertarme el 1 de febrero. Una tristeza insondable y mucha bronca. Como si fuera una vuelta al pasado”, explica una ensayista (3), ex presa política por su participación en el levantamiento contra los militares del verano de 1988. “Estoy furioso”, afirma en el mismo sentido un joven obrero que manifiesta en las calles de Rangún. “Todo lo que está pasando evoca lo que mi madre me contó cuando yo era pequeña”, deplora una joven mujer.

Al tomar el poder, el ambicioso Min Aung Hlaing ha ignorado el lento proceso desatado a comienzos de los años 2000 por sus predecesores para permitir un regreso progresivo de la democracia y sacar al país de su aislamiento internacional. La constitución de 2008, escrita por el propio ejército, le garantiza el control de tres ministerios clave: defensa, interior y fronteras. Y una minoría con poder de bloqueo en el Parlamento, donde el 25% de las bancadas le pertenecen. Pero, y esto es lo que asusta al general, estas garantías constitucionales son inoperantes ante las convulsiones sociales y económicas de una sociedad abierta al mundo. Porque el país que él quiere gobernar solo, “sin la pantalla que le ofrecía Aung San Suu Kyi”, según explica Thet Win, de la organización no gubernamental Synergie que aboga por el diálogo interreligioso, no tiene nada que ver con el de 2010.

Tras décadas de aislamiento, el deshielo político fue acompañado del levantamiento de las sanciones económicas. En diez años, el índice de pobreza se dividió por dos, aun si 24,8% de la población todavía vive bajo la línea de pobreza (4). Antes de la pandemia de Covid-19, el crecimiento alcanzaba el 7% anual. “Birmania era un Eldorado para los inversores”, recuerda un banquero que participó en la creación de dos instituciones financieras. Pero, explica, con las medidas liberales del gobierno de Suu Kyi, los conglomerados del ejército “sufrieron con rigor la apertura a la competencia. Ya no tenían más clientes cautivos como antes”. Hombres de negocios y analistas acuerdan con la siguiente afirmación: “Esos últimos diez años, los generales siguieron viviendo en una burbuja, encerrados a todo contacto con el extranjero, en particular con los Occidentales. Siguen convencidos de que encarnan una excepción birmana”.

Desde la cámara del celular

Aislados de la sociedad, y especialmente de los jóvenes. “Nuestra generación no se dejará estafar”, repiten quienes crecieron con las redes sociales. En Facebook y Twitter, desde el día siguiente al golpe, difundieron consignas, afiches, dibujos, fotografías; una manera de federar su movimiento y de exorcizar en miedo. Para evocar al mundo en que los quiere hundir la junta hacen referencias a *The Purge* o *Black Mirror*, series enmarcadas en universos distópicos. Como en el caso de los contestatarios tailandeses (5), el gesto de los tres dedos en alto, en referencia a la obra de ciencia ficción *The Hunger Games*, se transformó en el signo de unidad contra la junta. “Nosotros no salimos a las calles a favor del LND o de Aung San Suu Kyi. Este movimiento es transversal, va más allá de su símbolo. Se trata de una movilización de toda la sociedad para ponerle un punto final a la injerencia del ejército”.

to en la política. Queremos una Constitución plenamente democrática”, declaró Thizar Shunlei Yi. Una artista a su lado asentía, entusiasmada por lo que veía en los desfiles en Rangún: familias, gente muy joven, ricos y menos ricos. Incluso personas de un edificio que aloja a parientes de militares se sumaron al acontecimiento. El 8 de febrero se instauró la ley marcial y la prohibición de toda reunión de más de cinco personas, pero las manifestaciones continuaron. Los comités de ciudadanos se organizan para proteger a los vecinos contra las detenciones nocturnas.

Durante los quince días que siguieron al golpe de Estado, las redes sociales le permitieron articular la lucha en la calle y en las redes al movimiento de desobediencia civil –incluso si a partir del 3 de febrero, el ejército les pidió a los proveedores de acceso suspender Facebook, una red que se transformó en la “sangre de los birmanos”, en la que circulan informaciones indispensables para la vida–. Más de la mitad de la población posee una cuenta; hace diez años, solo 2% de la población tenía acceso a un teléfono celular (6). Para evitar la censura, hay que instalarse un VPN (red virtual privada), como hacen los chinos y los vietnamitas. Los más jóvenes les enseñan a los mayores como equiparse. “La potencia de estas herramientas nos ayuda a organizarnos, pero son muy frágiles. El ejército puede cortar Internet en cualquier momento”, subraya Thizar Shunlei Yi.

Una larga noche

Este combate contra el ejército, el enemigo común, ¿está construyendo una consciencia colectiva a largo plazo? La desunión gangrena al país desde su creación en 1947. Las tensiones entre la etnia mayoritaria bamar y las otras, que representan un tercio de la población, ritman la historia de esta inalcanzable

“Unión de Myanmar” –el nombre oficial del país–. Una división azuzada por los militares, que se presentan como los garantes de una ilusión de unidad. Desde hace setenta años, los combates son recurrentes entre la Tatmadaw y los ejércitos locales de las minorías étnicas de los Estados kachin, shan, rakhine, etc., fundamentalmente en torno a la gestión de los recursos naturales (7).

Con el lanzamiento en 2015 de la conferencia de Panglong II, que reunió al ejército, al gobierno y a los representantes de esas etnias, Suu Kyi había prometido una representación más equilibrada de los distintos componentes del país. Las conversaciones se estancaron. Ejército y LND, dominados ambos por los bamars, comparten una visión similar de las minorías: “Elementos desestabilizadores que debilitan al poder central”, resume la analista Carine Jaquet. Suu Kyi llegó incluso a defender al ejército de su país ante la Corte de justicia de La Haya tras las acusaciones de limpieza étnica contra los rohingyas, de confesión musulmana, mientras que los bamars son budistas. En 2016 y 2017, más de 700.000 de entre ellos escaparon a Bangladesh a raíz de una campaña violenta orquestada por la Tatmadaw en represalia al ataque a los puestos fronterizos por parte del Ejército de custodia de los rohingyas. Ganada por el discurso de odio difundido por Internet por nacionalistas budistas y por el ejército, la mayoría de la población se puso del lado del general Min Aung Hlaing y de la jefa de Estado. Esta última consiguió así una enorme popularidad que explica, en parte, el apoyo a su partido en las elecciones.

Hoy, en el marco de la movilización contra la junta, proliferan las excusas. Se escuchan los lamentos por no haber sido más sensibles a la suerte de los rohingyas, considerados aún hace muy poco como enemigos. Lo más ur-

gente, asegura el director del Centro para la integridad social, es deshacerse del ejército antes de pensar en construir cualquier tipo de cohesión: “Por ahora, tenemos la tarea de movilizarlos contra los militares. Es una cuestión de principios, pues el gobierno legítimo de la LND fue derrocado”.

Presión regulada

¿Qué harán los países extranjeros? Estados Unidos congeló el financiamiento del gobierno birmano. Otras sanciones que apuntan contra los intereses económicos del ejército están siendo oficialmente analizadas. “Los inversores extranjeros que aconsejo están a punto de revisar todas sus decisiones”, indica un analista en estrategia, sin poder dar mayores precisiones. China, primer partenaire comercial del país, se conformó con hablar de un “cambio de gobierno” y continuó con sus pequeños y grandes negocios. Japón, que ocupa el segundo lugar, condenó el golpe de Estado, pero el ministro de defensa, Nakayama Yasuhide, advirtió: “Si lo detenemos [el intercambio con birmania], las relaciones del ejército birmano con el ejército chino se fortalecerán y eso separará aún más al ejército birmano de las naciones libres como Estados Unidos, Japón y el Reino Unido” (8). Varias empresas niponas, como Suzuki o la cervecera Kirin, suspendieron sus actividades. Pero no está a la orden del día cuestionar el proyecto Kaladan de construcción de infraestructuras para el transporte multimodal, impulsado por Tokyo y Nueva Delhi, según afirmó el ministro de relaciones exteriores indio, Sushant Kumar Jaishankar (9). Europa, por su parte, se ha limitado a “estudiar posibles sanciones”, según expresó Jean-Yves Le Drian, ministro de Europa y de relaciones exteriores de Francia (10).

Mientras tanto, en Ragún y en la capital, Naipyidó, los tanques tomaron posiciones en varios barrios. Unas horas después, en la noche del 14 al 15 de febrero, Internet finalmente fue cortado. Los últimos mensajes recibidos anunciaban la detención de cinco periodistas en el Estado kachin, en Myitkyina. ¿Cuándo volverá a amanecer en Birmania? ■

1. Véase “Birmania, una democracia condenada”, *Le Monde diplomatique*, edición chilena, enero-febrero de 2017.
2. El 8 de noviembre de 2020, los birmanos votaron por una Asamblea de la Unión que comprende a las dos cámaras (la Cámara de representantes y la Cámara de las nacionalidades), así como por las asambleas de los Estados y de las regiones.
3. La mayoría de las personas interrogadas prefirieron conservar el anonimato por temor a la represión.
4. “Poverty data: Myanmar”, Banco asiático de desarrollo, 2017, www.adb.org
5. Véase Eugénie Mérieau, “En Thaïlande, le jeunes face à la monarchie et à l’armée”, *Le Monde diplomatique*, París, enero de 2021.
6. “Myanmar Telecommunications Sector”, Yangon Stock Exchange, 30 de julio de 2018, <https://ysx-mm.com>
7. Véase principalmente Renaud Egretreau, “Désunion nationale en Birmanie”, así como André y Louis Boucaud, “Plus de cent trente minorités”, *Le Monde diplomatique*, París, respectivamente diciembre de 2012 y noviembre de 2009.
8. “Japan defense official warns Myanmar coup could increase China’s influence in region”, Reuters, 2 de febrero de 2021.
9. Rahul Karmakar, “India-Myanmar Kaladan project in final stages: Jaishankar”, *The Hindu*, Nueva Delhi, 15 de febrero de 2021.
10. “Birmanie: l’UE devra ‘envisager’ des sanctions si l’état d’urgence n’est pas levé, selon Jean-Yves Le Drian”, *Le Figaro* (junto a la AFP), París, 3 de febrero de 2021.

*Periodista

Traducción: Heber Ostroviesky

La esclavitud en el centro de las cadenas de aprovisionamiento mundiales

Sangre y lágrimas sobre los guantes malasios

por Peter Bengtsen*, enviado especial

Kuala Lumpur, fines de 2019. Esa noche, Selif S. (1) cena en un pequeño restaurante de un suburbio industrial de la capital malasia. Nos confirma que el trabajo esclavo es moneda corriente en Malasia: “Toda la gente que conozco se arruinó durante años por pagarle a agentes de contratación que debían conseguirle trabajo”. Y para estar seguros de que paguen, les confiscan el pasaporte.

Selif S. es empleado desde hace más de diez años de uno de los más grandes fabricantes de guantes de caucho, que abastece particularmente a los sectores de la salud en Europa y Estados Unidos. Pero este fenómeno atañe a todas las ramas de la economía malasia volcadas hacia los mercados externos, como la electrónica, la vestimenta y todos los productos derivados del caucho. En 2018, las exportaciones de componentes microelectrónicos alcanzaron los 44.800 millones de dólares, las de vestimenta y accesorios, unos 4.200 millones de dólares. En 2019, Malasia, primera productora de guantes de caucho del planeta, garantizó el 63% de la demanda mundial, que se elevaba

a 300.000 millones de pares (2). Los trabajadores inmigrantes representan entre el 20% y el 30% de la mano de obra del país, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Entre los nepaleses, los bangladesíes, los birmanos y muchos otros, los salarios malasios despiertan el sueño de poder mejorar la suerte de sus familias que quedaron en el país, aunque eso signifique largos y dolorosos años de exilio. En 2018, las remesas hacia sus países de origen rondaron los 9.000 millones de euros (3).

Pero la distancia no es el único precio que hay que pagar. Antes de su partida, la mayoría se endeudó fuertemente, a tasas exorbitantes, con reclutadores enviados por empresas malasias. Todos los testimonios recogidos se parecen. Como Selif S., esos trabajadores viven en albergues, y se apuran en pagar su comida para regresar antes de la hora del toque de queda. Si llegan tarde o pasan la noche en otra parte sin autorización corren el riesgo de una multa que puede representar hasta la mitad de un salario mensual básico. “Las multas y las suspensiones de trabajo son frecuentes”, asegura Selif S., que evoca

el caso reciente de un joven suspendido tras haberse quedado dormido en su puesto. Para los recién llegados, trabajar doce horas por día, a veces sin ningún feriado durante todo un mes, constituye un cambio de vida brutal.

Salir de la trampa

Antes de partir, los obreros bangladesíes que conocimos habían abonado cada uno entre 3.700 y 4.300 euros a reclutadores. Para los nepaleses, los montos oscilaban entre 1.100 y 1.250 euros. Como el salario mínimo malasio se eleva a 240 euros mensuales, y la paga con horas suplementarias tienen un tope de 400 euros, rápidamente se comprende que necesitarán años para recuperar su libertad.

Muchos tratan de salir de esa trampa de la deuda multiplicando las horas suplementarias, legales o no. Otros preferirían volver a sus casas, pero los obstáculos son más fuertes que su coraje. Asad I. nos confía: “Estoy extenuado. Si pudiera volvería a casa, aunque eso me costaría muy caro y significaría una deuda más grande. Pero es imposible: me confiscaron el pasaporte. Y tengo miedo de que me muelan a golpes si me atrapan”.

Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las formas contemporáneas de esclavitud entre 2014 y 2020, Urmila Bhoola nos confirma: “Los reclutadores sonsacan sumas fabulosas a los migrantes tentándolos con puestos en el exterior que, a menudo, no son más que espejitos de colores. Así, [los trabajadores] se encuentran en una situación de dependencia total frente a sus empleadores, que están perfectamente al tanto del sistema”.

Las empresas occidentales se aprovechan de esa mano de obra de bajo costo, cada vez más numerosa en virtud de las deslocalizaciones. Si bien muchas grandes marcas internacionales imponen a sus proveedores estatutos éticos que prohíben explícitamente el trabajo esclavo, este sigue prosperando en el seno de las cadenas de aprovisionamiento mundiales.

Es lo que ocurre con varios productores de guantes cuyos clientes estadounidenses figuran en la clasificación anual de las quinientas primeras empresas de la revista Fortune. Entre ellas, se encuentra McKesson (ubicada en el puesto 16 entre las más im- →

→ portantes empresas del mundo en volumen de negocios), Owens and Minor (puesto 25), pero también Henry Schein (puesto 66) o Medline. Interrogados, McKesson, Henry Schein y Medline nos aseguraron que exigían de sus proveedores que “se adapten a las reglamentaciones en vigor”, sin pronunciarse sobre las condiciones de trabajo reales en sus subcontratistas malasio.

Los accionistas no son mucho más locuaces, y particularmente los grandes consultores de gestión de activos que poseen partes de capital en esos grupos, como BlackRock, State Street Global Advisors (SSGA) y Vanguard Group. Este último dice estar “muy atento al respeto de los derechos humanos por parte de las compañías de [su] portafolio”, y declara administrar las cadenas de aprovisionamiento en estrecha colaboración con ellas. BlackRock, que afirma privilegiar las inversiones sustentables, no respondió a nuestras solicitudes. Así como tampoco SSGA.

Protección a las marcas

Esta falta de transparencia y de compromiso concreto no tiene nada de sorprendente: el control de los proveedores extranjeros es mayoritariamente confiado a empresas de auditoría privadas que tienen mucho cuidado de evitar toda publicidad sobre sus conclusiones. Según fuentes internas que solicitaron el anonimato, las condiciones de trabajo entre los fabricantes de guantes malasio son efectivamente objeto de verificaciones por parte de empresas multimillonarias como las estadounidenses Intertek o Underwriters Laboratories (UL) y la suiza SGS. No obstante, ninguna de ellas aceptó comentar los resultados de nuestra investigación, que aportaba la prueba del trabajo esclavo. Según los profesionales directamente implicados en el manejo de esas auditorías sociales, el endeudamiento abismal de los obreros como precio de su reclutamiento no es un secreto para nadie, pero no ven en ello un signo convincente de esclavitud.

Además, esas inspecciones son financiadas por las multinacionales. En 2019, la organización no gubernamental (ONG) Clean Clothes Campaign (“Campana Ropa Limpia”) detectó doscientos casos de auditorías con infracciones. “Los hechos lo prueban: el sistema de las auditorías sociales no es eficaz para proteger a los trabajadores. No hace más que proteger la reputación y la rentabilidad de las marcas, al tiempo que impide que se desarrollen modelos económicos más satisfactorios”, deplora Ben Vanpeperstraete, coautor de ese estudio (4).

Modestas organizaciones ciudadanas y una cobertura mediática bien orquestada a veces logran obligar a los inversores y a las multinacionales a actuar, teniendo éxito allí donde el concepto de responsabilidad social de las empresas (RSE), a menudo puesto de manifiesto, fracasa. En 2019, después de meses de investigación y de presiones, la ONG estadounidense Transparentem obtuvo 1.600 millones de euros de reparaciones para 2.500 inmigrantes empleados en el sector de la vestimenta malasia que habían pagado para ser contratados (5); su homóloga holandesa, Electronics Watch, 9 millones de euros para 10.000 trabajadores inmigrantes de la industria electrónica tailandesa (6); Worker Rights Consortium, cuya sede está en Washington, 4 millones de euros para 2.000 obreros textiles indonesios (7).

Millonarios pagos

Desde el 1º de octubre de 2019 sopla un viento de cambio, por lo menos sobre Malasia. Las autoridades aduaneras estadounidenses tomaron la decisión –rara– de prohibir la importación de los guantes desechables fabricados por la empresa malasia WRP Asia Pacific en virtud de sospechas de trabajo esclavo. Esta medida sacudió a todo el sector. El



Daniela Montecinos, Entre Dos, 2018

ministro de Recursos Humanos prometió integrar al código laboral nuevas disposiciones más protectoras (8), al tiempo que advertía a las empresas que corrían el riesgo de sufrir la ira comercial de Washington si no eliminaban el trabajo esclavo. Su predicción se realizó en julio de 2020, cuando Estados Unidos prohibió toda importación procedente de las fábricas malasio del mayor fabricante de guantes del mundo, Top Glove.

Las repercusiones de esta segunda reprimenda fueron inmediatas y de una amplitud sin precedentes. Tres semanas más tarde, Top Glove anunciaba que pagaría 10 millones de euros a sus asalariados extranjeros en restitución de gastos de contratación indebidamente pagados. Un gigante del sector, Hartalega, hizo lo propio al prometer 8 millones de euros de indemnizaciones, mientras que Supermax afirmaba haber comenzado a calcular el monto de las compensaciones debidas. En octubre de 2020, Top Glove casi triplicó su indemnización (28 millones de euros) y Kossan Rubber Industries prometió abonar 10 millones de euros a los trabajadores inmigrantes. Preocupados por la posibilidad de que se les cerraran las puertas del mercado estadounidense, varios de sus competidores siguieron el movimiento.

WRP Asia Pacific también había emprendido la tarea de indemnizar a 1.600 de sus asalariados por un monto de 4,4 millones de euros, lo cual, a partir de marzo de 2020, le significó el levantamiento de las sanciones estadounidenses. Por el momento se trata sobre todo de anuncios; los procedimientos no terminarán antes de meses, incluso años, y deberán ser supervisados muy de cerca. Incluso podrían conducir a muchos asalariados a aceptar condiciones de trabajo espantosas, por miedo a perder toda posibilidad de reembolso si se fueran. Las marcas extranjeras que, durante años, aprovecharon esa explotación salarial, por su parte, no desembolsan un centavo.

La Unión Europea no penaliza a los grandes grupos. No obstante, dispone de instrumentos comerciales para privar a países enteros de un acceso preferencial a su mercado interno, a partir del momento en que violan los derechos humanos. De ahora en más, “la

Unión Europea debe darse la posibilidad de bloquear las importaciones de productos o de servicios que impliquen prácticas de esclavitud y la explotación de las poblaciones vulnerables, particularmente los migrantes –nos declara la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Heidi Hautala–. Aunque la Comisión parece reticente a imitar el ejemplo estadounidense, la Unión Europea prepara actualmente una ley que obligaría a las empresas a estar seguras del respeto a los derechos humanos por parte de sus subcontratistas”. En abril de 2020, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, anunció que ese texto entraría en vigor en 2021 y se inspiraría en la ley francesa sobre el “deber de vigilancia” de las empresas contratistas, votada en 2017, pero no siempre aplicada tanto como se debería, en virtud de la falta de medios de control.

En el nivel de los países miembros, las legislaciones coercitivas que apuntan a sanear las prácticas en el seno de las cadenas de aprovisionamiento transfronterizas progresan sin prisa, pero sin pausa. Algunas leyes que instauran una forma de “deber de vigilancia” están en curso de elaboración en Alemania o en los Países Bajos. En otros trece Estados europeos se examinan o son activamente defendidas proposiciones en ese sentido. Se deberán adoptar fuertes mecanismos de aplicación y de control para que los importadores europeos que se abastecen con productores malasio que recurren al trabajo esclavo puedan ser sancionados. También podrían adoptarse dispositivos de reparación destinados a las víctimas.

El palo y la zanahoria

Esto por lo que respecta al palo. Con demasiada frecuencia se olvida que los gobiernos también pueden manejar una zanahoria de una temible eficacia: la de los pedidos públicos. En promedio, en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), estos representan el 12% del producto interior bruto (PIB). Su poder de compra les confiere un poderoso medio de presión para incitar a las empresas a garantizar condiciones de trabajo decentes a lo largo de toda la cadena de aprovisio-

namiento. Sin embargo, al examinar la lista de los proveedores de guantes a los servicios médicos estadounidenses, británicos, suecos o daneses, se comprueba que esa arma no es utilizada.

En Suecia, las colectividades territoriales pusieron a punto estatutos éticos y cláusulas contractuales comunes que apuntan a promover las compras éticas. En 2019 realizaron –e hicieron pública– una auditoría a tres grandes fabricantes malasio de guantes desechables, identificando de paso múltiples riesgos de trabajo esclavo. Y a partir del siguiente año estaban de vuelta en Malasia para efectuar una nueva serie de controles. Como declara Emma Lewau, una representante del condado de Östergötland, “la lucha contra la servidumbre por deudas y la explotación de los trabajadores migrantes es una tarea de largo aliento” (9). ■

1. Por razones de seguridad, los apellidos y nombres de los inmigrantes fueron modificados.

2. “Global rubber glove demand to hit 300 billion in 2019, 63 pct supplied by Malaysia”, Bernama, 12-4-19, www.bernama.com

3. Isaku Endo, José de Luna-Martínez y Dieter de Smet, “Three things to know about migrant workers and remittances in Malaysia”, World Bank Blogs, 1-6-17, https://blogs.worldbank.org

4. “Fig leaf for fashion. How social auditing protects brands and fails workers”, informe 2019, Clean Clothes Campaign, Ámsterdam.

5. Steven Greenhouse, “NGO’s softly-softly tactics tackle labor abuses at Malaysia factories”, *The Guardian*, Londres, 22-6-19.

6. Nanchanok Wongsamuth, “Thai electronics firm compensates exploited workers in rare award”, Reuters, 11-12-19.

7. “Largest sum ever: WRC recovers 4.5 million dollars in unpaid severance”, Worker Rights Consortium, Washington, DC, 4-12-19.

8. Jason Thomas, “Stop forced labor or Malaysia may face sanctions, warns Kula”, *Free Malaysia Today*, Petaling Jaya (Malasia), 7-1-20.

9. “Sustainable supply chain - Guidelines contractual terms”, informe 2019, Hållbar Upphandling, Stockholm, http://www.hållbarupphandling.se

*Periodista.

Traducción: Víctor Goldstein

En Rusia, un opositor potencialmente molesto

Alexei Navalny, ¿profeta en su tierra?

por Hélène Richard*

Víctima de un intento de envenenamiento, el opositor ruso Alexei Navalny se encuentra actualmente tras las rejas. Mientras piden por su liberación, las cancillerías occidentales preparan la adopción de nuevas sanciones. Si bien el Kremlin no está dispuesto a ceder a las presiones internacionales, que califica de injerencias, vigila las consecuencias del caso dentro del país.

“El combate heroico de Navalny no es diferente al de Gandhi, King, Mandela y Havel”. En sintonía con la prensa occidental, el ex embajador de Estados Unidos en Rusia, Michael McFaul, no teme la exageración cuando menciona al militante anticorrupción que desafía al presidente ruso Vladimir Putin (1). Hospitalizado en Alemania tras haber sobrevivido a un intento de envenenamiento en un avión en Siberia en agosto, Alexei Navalny rechazó el exilio definitivo. Al regresar al territorio ruso, en enero, fue condenado, como era de esperar, a una pena de dos años y ocho meses de prisión. Lo que merece respeto. Sin embargo, su caso tuvo una repercusión de la que no suelen beneficiarse los opositores políticos.

Al conocerse su detención, las cancillerías occidentales exigieron la “liberación inmediata” del opositor ruso y amenazaron con tomar represalias. En el Congreso estadounidense, una amplia coalición de demócratas y republicanos aprovechó la ocasión para solicitar el endurecimiento de las restricciones ya adoptadas en 2019 contra las empresas involucradas en la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que transportará gas ruso a Alemania. Semejante decisión dejaría satisfecho al Parlamento Europeo, que aprobó por amplia mayoría en enero una resolución que llama a “la Unión” a “detener inmediatamente la construcción” del gasoducto –contra la opinión de Berlín, pero de acuerdo con el deseo de Polonia y los Estados bálticos–.

Por su parte, Navalny multiplicó los contactos en el extranjero. El opositor desea que la Unión Europea intensifique y reoriente el conjunto de sanciones individuales adoptadas el 15 de octubre pasado contra seis altos responsables supuestamente involucrados en su envenenamiento, entre ellos, el vicedirector del gabinete presidencial, Serguéi Kiriyenko. Su objetivo: obtener medidas de represalias contra el Kremlin y apuntar contra los bienes de los oligarcas cercanos al poder en Europa y Estados Unidos. Su equipo envió al presidente estadounidense una lista de treinta y cinco personas que “hicieron de la manipulación de las elecciones una política nacional, roban dinero público, envenenan”. Además de personalidades de primera línea –como el vocero del gobierno, el alcalde de Moscú y tres ministros, entre ellos el primer ministro–, en su lista figuran hombres de negocios cercanos a Putin o hijos de altos responsables sospechados de servir de testaferros en operaciones de desvío de fondos públicos.

Washington podría escuchar su reclamo. Desde 2012, la Global Magnitsky Act permite a Estados Unidos sancionar actos de corrupción

en todas partes del mundo. La Comisión Europea militó este otoño en favor de una “Navalny Act” según el modelo estadounidense. Frente a las reticencias de algunos Estados miembros, Bruselas llegó a un acuerdo: el nuevo régimen de sanciones adoptado el 7 de diciembre, y aún no implementado, mantiene la regla de la unanimidad y se limita estrictamente al ámbito de las violaciones a los derechos humanos. “Esperamos que este nuevo régimen pueda en el futuro extenderse a los actos de corrupción”, declaró el Ministro de Relaciones Exteriores lituano, Linas Linkevičius.

La construcción de una figura

La estatura política de Navalny en su país, ¿justifica acaso este entusiasmo internacional? En todo caso, se trata de la opinión de Washington, que menosprecia al régimen de Putin, acusado de desestabilizar las democracias. En 2018, en la revista *Foreign Affairs*, Joseph Biden presentaba a Rusia como un país en manos de una “camarilla de antiguos responsables de los servicios de inteligencia y oligarcas”. “Sin el estrangulamiento de la sociedad civil –quería crearlos aplausos de adoración y los altos niveles de popularidad de los que gozan [los dirigentes rusos] podrían rápidamente ceder el lugar a una tormenta de abucheos y silbidos [...]. El régimen tiene una imagen de invencibilidad que oculta la fragilidad del apoyo con el que puede contar, particularmente, entre los jóvenes urbanos instruidos” (2).

A pesar de su microscópica audiencia en Rusia, el ex campeón de ajedrez Garry Kasparov gozó durante mucho tiempo de la fama de “opositor número uno” a Putin. Navalny es un aspirante al título más creíble. ¿Alguien se acuerda aún de que este exbloguero desfiló por Moscú encabezando a decenas de jóvenes que exclamaban “Rusia para los rusos” y “Dejemos de alimentar al Cáucaso”? Corría el año 2007, y este abogado de formación dirigía un partido grupuscular, Narod (El Pueblo). Tres años más tarde, y tras un paso por la Universidad Yale de New Haven, lanzaba el sitio de investigaciones anticorrupción Rospil. Haciendo de la denuncia de los bienes mal habidos el centro de su acción, abandonó los márgenes del nacionalismo virulento y se ganó la simpatía de la prensa occidental, sin haber renegado nunca de sus actos xenófobos (3). Comenzaban entonces a llamarlo “el Julian Assange ruso” (4). Autorizado a presentarse en las elecciones municipales en Moscú en 2013, obtuvo el 27% de los votos, un resultado destacable en el contexto ruso. Y si bien le negaron la inscripción de su candidatura para las elecciones presidenciales de 2018, su campaña movilizó a doscientos mil voluntarios y alrededor de cien comités de apoyo en todo el país (5).

Expulsado de la arena política por la puerta, Navalny buscó regresar por la ventana. En 2018, lanzó un llamado al “voto inteligente”: les pidió a sus partidarios que votaran a los candidatos de la oposición parlamentaria mejor posicionados para derrotar a Rusia Unida. El objetivo: erosionar el dominio del partido en el poder utilizando las agrupaciones autorizadas como caballo de Troya. El Partido Comunista de la Federación Rusa (KPRF) y los nacionalistas del Partido Liberal-Demócrata de Rusia (LDPR) fueron los principales beneficiarios de esa estrategia. En 2019 y 2020, varios candidatos de la oposición se abrieron camino gracias al refuerzo de los votos “inteligentes” en Moscú, San Petersburgo y algunas ciudades provinciales como Tambov (16 representantes electos de 18), Tomsk (17 de 27) o Novosibirsk (14 de 50).

Esta campaña permitió a Navalny compensar su relativa marginación política.

De hecho, el llamado a manifestarse lanzado por el opositor tras su detención, así como el estreno de su documental de investigación *El Palacio de Putin* –que habrían visto más de uno de cada cuatro adultos rusos– (6) tuvieron cierta repercusión. El 23 de enero, habrían salido a la calle alrededor de cien mil personas. La dimensión de la movilización fue similar a algunos días del movimiento de 2011-2012 contra el fraude electoral. Y ello, a pesar de una creciente represión –arrestos preventivos, prohibición de manifestarse, detenciones masivas–, sin olvidar el frío polar.

Sin embargo, Navalny no representa una amenaza seria para el régimen. Desde que se encuentra tras las rejas, ya no es extraño que se lo compare con Nelson Mandela, uno de los presos políticos más célebres de la historia –por ejemplo, en la *British Broadcasting Corporation* (BBC) y en *The Guardian*, el 17 de enero–. Pero la posición de Navalny difiere de la del ex dirigente del Congreso Nacional Africano, que podía apoyarse en una organización con un centenar de miles de adherentes y una inmensa popularidad en su país. Las manifestaciones de enero pasado, en cambio, fueron recibidas sin gran entusiasmo por los rusos: 22% de opiniones favorables, muy lejos del 80% del que podían jactarse por ejemplo los “chalecos amarillos” franceses al iniciarse el movimiento (7). Y su número se redujo a partir del segundo fin de semana de protestas, mientras la persecución judicial se intensificaba contra los militantes más destacados. Desde fines del verano, según el Centro Levada, reconocido por la independencia de sus encuestas, la popularidad del opositor está estancada en un 20%, lejos del 64% de opinión favorable respecto del presidente ruso (8).

Dificultades al interior

Y la salvación no vendrá de la diplomacia. Moscú parece estar acostumbrado a las sanciones e interpreta toda presión extranjera para obtener la liberación del opositor como una forma de injerencia. Putin lo hizo saber durante un viaje a Moscú del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, expulsando a tres diplomáticos de Polonia, Suecia y Alemania. Yendo aún más lejos, el Ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, amenazó con romper las relaciones diplomáticas con la Unión Europea “si las sanciones generan riesgos para nuestra economía afectando algunos sectores, incluso en esferas sensibles”.

Aun cuando Moscú se muestre segura, al menos dos elementos podrían preocupar al Kremlin. Primero, el perfil sociológico de los manifestantes. Mientras que, desde 2014, los ingresos de la población se reducen prácticamente año tras año y la inflación en alimentos se disparó en 2020 (un aumento del 70% para el azúcar, y del 24% para el aceite de girasol) (9), la presencia en las calles del “proletariado posindustrial urbano” (10) y de profesionales desclasados complica la respuesta del Kremlin. Muchas personas participaban de una movilización por primera vez. Detenido a fines de enero en una manifestación, Alexei Gaskarov, un militante sindical cercano a Navalny, nos contó que había compartido su celda con un trabajador de la construcción, un reparador de acondicionadores de aire y un empleado de comercio. “Uno tenía un crédito que ya no podía pagar; el otro estaba muy enojado porque no había podido pagar el tratamiento para el cáncer de su madre... Las motivaciones

sociales son una dimensión evidente de la protesta”. Ya en 2018, una impopular reforma de las jubilaciones había aumentado la desconfianza de la población hacia el poder (11).

Otro motivo de preocupación para el Kremlin: los efectos colaterales del caso Navalny en la oposición parlamentaria considerada leal (12). El dirigente del LDPR Vladimir Jirinovski se queja en los estudios de televisión de que Navalny fue “comprado” por los estadounidenses, mientras que Serguéi Furgal, ex gobernador de la región de Jabárovsk proveniente del mismo partido, fue elegido en 2018 gracias al “voto inteligente”. Mientras su popularidad crecía, fue encarcelado, lo que generó manifestaciones inéditas el verano pasado.

Las divisiones son aún más sensibles en el seno del KPRF, la principal fuerza de oposición del país (42 diputados de 450 en la Duma federal), que el Kremlin nunca logró controlar totalmente. Si bien su secretario general Guennadi Ziuganov trató a Navalny de agente del extranjero, varios diputados comunistas se sumaron a las manifestaciones. Uno de ellos, el popular Nikolai Bondarenko, de Samara, que tiene 1,28 millón de abonados a su canal de YouTube, fue incluso detenido durante unas horas. El asunto no debería quedar allí, ya que el diputado debe presentarse a las legislativas de septiembre próximo en la misma circunscripción que Vyacheslav Volodin, el presidente de la Duma federal. La prohibición, en febrero –oficialmente por razones sanitarias–, de las tradicionales concentraciones comunistas en conmemoración de la caída del zarismo contribuyó a radicalizar el ala izquierda del KPRF, preocupada por las crecientes restricciones impuestas a la vida política y al uso de las redes sociales. El diputado comunista Valery Rashkin llamó a no respetar en adelante la consigna del Kremlin.

El encarcelamiento de Navalny altera el juego político ruso. El gobierno responde mediante la criminalización de la oposición “fuera del sistema” y mañana, quizás, mediante la expulsión de los elementos más turbulentos de la oposición legal. Si Putin piensa mantenerse en el poder hasta 2036, tal como se lo permite la nueva Constitución ratificada el verano pasado por el voto popular, no hay certeza de que la represión sea suficiente. ■

1. Michael McFaul, “A Russian dissident is fighting for his life. Where is the US?”, *The Washington Post*, 21-8-20.
2. Joseph R. Biden, Jr. y Michael Carpenter, “How to stand up to the Kremlin”, *Foreign Affairs*, Vol. 97, N° 1, Nueva York, enero-febrero de 2018.
3. Marlene Laruelle, *Russian Nationalism: Imaginaries, Doctrines, and Political Battlefields*, Routledge, Nueva York, 2019.
4. Marie Jégo, “La Russie a son WikiLeaks à elle”, *Le Monde*, 10-12-10.
5. Sitio web de la campaña, <https://2018.navalny.com>
6. “The film ‘Palace for Putin’”, Centro Levada, 8-2-21, www.levada.ru
7. COMPLETAR, *Forbes*, 8-2-21.
8. “Putin’s approval rating”, Centro Levada, enero de 2021, www.levada.ru
9. Alain Barluet, “Russie: Vladimir Poutine face à l’envolée des prix alimentaires”, *Le Figaro*, París, 17-12-20.
10. Alexander Baunov, “The new face of Russian protest”, Carnegie Moscow Centre, 25-1-21, www.carnegie.ru
11. Véase Karine Clément, “Le visage antisocial de Vladimir Poutine”, *Le Monde diplomatique*, París, noviembre de 2018.
12. Arnaud Dubien, “Quelques réflexions sur la situation politique en Russie”, Observatorio franco-ruso, 26-1-21, <https://fr.obsfr.ru>

*De la redacción de *Le Monde diplomatique*, París.

Traducción: Gustavo Recalde

La reforma de la política agraria reduce las subvenciones públicas

Revueelta de los campesinos indios contra el agronegocio

por Joël Cabalion y Delphine Thivet*

En plena crisis sanitaria, el gobierno indio promulgó tres leyes que implican una desregulación brutal del sistema público alimentario y agrícola. Desde su adopción por el Parlamento a mediados de septiembre de 2020, estas normas provocaron un movimiento de protesta sin precedentes en todo el país. Marcan el fin de un pacto moral entre el poder y el campesinado.

Desde fines de noviembre de 2020, cientos de miles de campesinos se han instalado en las puertas de Nueva Delhi, plenamente decididos a doblegar al gobierno. No es la primera vez que los agricultores ocupan el centro de la escena mediática y política de India: algunas veces debido a tragedias como los suicidios en masa, otras por su lucha contra los organismos genéticamente modificados (OGM) o contra las expropiaciones (1). Esta vez, sin embargo, su número, su determinación y sus modos de acción, así como la adhesión de una gran parte de la sociedad que se opone a la política del primer ministro Narendra Modi, contribuyen a darle a estas manifestaciones un carácter inédito.

La adopción de tres leyes –propuestas por el gobierno a comienzos de junio y votadas por el Parlamento a mediados de septiembre– encendió la mecha en un sector ya ampliamente disminuido. Su participación en la población activa pasó del 70% en 1951 al 48% en 2011. Mientras que para Ashok Gulati, reconocido especialista indio y partidario de estas reformas, se trata de sentar las “bases de la modernización de la agricultura” del país (2), para los principales afectados, estas leyes marcan el comienzo de un desmantelamiento de la política agraria y alimentaria adoptada en los años 1960-1970.



Gonzalo Ilabaca, La maldad de los transgénicos (óleo/tela - 70 cm x 60 cm), 2011

Fin de la regulación

Dicha política se basa en precios mínimos de sostén que, si bien solo se aplican directamente en un tercio del comercio agrícola, principalmente para los productores de arroz y cereales del noroeste del país, orientan los precios de las demás producciones. Las cosechas se venden en los mercados

mayoristas (*mandis*) que regula cada estado. Pero, en última instancia y para sostener los precios, también pueden ser compradas por la agencia nacional de alimentos, la Food Corporation of India, que luego entrega los excedentes a las agencias estatales de redistribución para los habitantes más pobres.

La primera ley, llamada “Ley de Comercio y Promoción de Productos Agrícolas (Promoción y Facilitación)” (3), autoriza a los agricultores a vender fuera de los *mandis*. Estos últimos, concebidos inicialmente para reducir el poder de los intermediarios, pronto fueron dominados por grandes familias. Así, se formaron monopolios locales de facto

–que suelen corresponderse con el dominio de las castas– para la compra, intercambio y transporte de los productos agrícolas.

Antes que reformar esos *mandis*, el gobierno central tiene la intención de promover “mercados alternativos” más competitivos. Teniendo en cuenta la experiencia del estado de Bihar, que los suprimió en 2006, los agricultores temen una extinción progresiva de los mercados mayoristas y de cualquier forma de regulación. Desde entonces, “los agricultores [de Bihar] quedaron a merced de los comerciantes, quienes, sin ningún escrúpulo, fijan precios aun más bajos [que en los *mandis*]” (4). Por este motivo, para Richa Kumar, investigadora en el Indian Institute of Technology de Nueva Delhi, la ley establece más bien la “libertad” de los actores de la agroindustria para “comprar donde sea” (es decir, fuera de los mercados regulados) (5).

La segunda ley, llamada “de Garantía de Precios y Servicios Agrícolas”, intenta fomentar los contratos entre los agricultores y los compradores según un marco de precios acordados antes de la cosecha. También en este caso, el gobierno prioriza la “libertad” del agricultor de elegir dónde quiere vender. Pero, ¿qué peso tiene este frente a los gigantes de la industria agroalimentaria y la gran distribución? Además, esto podría alentar el monocultivo especulativo e intensivo en lugar de la diversificación agroecológica de los cultivos.

Una apuesta arriesgada

El tercer texto, llamado “de Productos Básicos Esenciales (Enmienda)”, retira el aceite, la cebolla y la papa de la lista de productos sujetos a regulación pública. Esto significa el fin de las compras por parte de las agencias estatales, mientras que el campesinado habría deseado su expansión masiva. El objetivo declarado es atraer inversiones privadas para el desarrollo y modernización de las infraestructuras de almacenamiento, ya que las agencias estatales suelen ser acusadas de desperdicio debido a las malas condiciones de conservación. Sin embargo, al no existir ninguna intervención reguladora del Estado, esta apuesta parece arriesgada en un país en el que el nivel de malnutrición sigue siendo elevado: el 14% de la población está desnutrida (6). Los pobres corren el riesgo de la escasez y los otros consumidores, una suba de los precios de venta al público. “Esta ley no solo juega en contra de los agricultores, sino también del ‘hombre corriente’. Le da luz verde a la inflación”, señalaba el jefe de gobierno del estado de Delhi y dirigente del Partido del Hombre Corriente, Arvind Kejriwal, en un discurso el 14 de diciembre (7). Su partido, al igual que el Partido del Congreso y el Partido Comunista de la India (marxista), apoya las protestas campesinas.

Estas tres leyes también incluyen una serie de disposiciones que reducen las posibilidades de los ciudadanos para apelar ante la administración en caso de litigio con actores privados. Por último, no hacen frente a los costos sociales y medioambientales del modelo heredado de la “revolución verde” (8) y tampoco se preocupan por los trabajadores agrícolas sin tierra que, según las regiones, representan hasta un cuarto de la población activa rural.

Masivas movilizaciones

Allanando el camino para una reducción de las subvenciones públicas, forman un conjunto coherente que deja a la agricultura en manos de los poderosos grupos agroalimentarios y de distribución. De ahí la ira de los agricultores, quienes, desde junio de 2020, responden bajo las banderas de los sindicatos regionales. El 9 de agosto, día del 78º aniversario del movimiento “Quit India” (“Abandonen India”) contra la colonización

británica, las manifestaciones proliferaron en todo el país: hubo quema de copias de los proyectos de ley, cortes de ruta, marchas en motos y tractores, sentadas, presentaciones de memorándums... Así se puso en marcha una alianza nacional de más de 500 organizaciones locales que llaman a una “movilización campesina unida” (*Sanyukt Kisan Morcha*), independiente de los partidos políticos.

El movimiento partió fundamentalmente de los estados del Norte –Punjab, Haryana y Uttar Pradesh–, donde los campesinos, propietarios de sus tierras y a menudo considerados como los ganadores de la “revolución verde”, constituyen, desde la década de 1990, la fracción del sector agrícola que tiene mayores dificultades para asegurar su reproducción social. Mientras que en Punjab, donde la movilización es fuerte, las superficies que están en manos de los agricultores alcanzan las 3,6 hectáreas en promedio, a nivel nacional apenas superan 1 hectárea. Ante la negativa a negociar por parte del gobierno –dominado por el Bharatiya Janata Party (Partido Popular Indio, BJP, nacionalista hindú)–, los agricultores lanzaron una convocatoria a marchar a Nueva Delhi. Al llegar a las puertas de la capital, contaron con el apoyo de una red sólida de templos hindúes y *gurdwaras*, lugares de culto del sijismo, que facilitaron la organización. En cuestión de segundos, las rutas de acceso a la capital quedaron parcialmente bloqueadas por la instalación de campamentos. Se montaron carpas y se instalaron camas, bebederos, lavaderos, puestos sanitarios y cocinas colectivas. Además, se colocaron tribunas con pantallas gigantes que retransmitían en vivo las intervenciones en las redes sociales.

El repertorio de la acción colectiva no terminó allí. El 8 de diciembre, las organizaciones campesinas convocaron a un paro nacional que recibió un apoyo significativo de los sindicatos de trabajadores y estudiantes, de los movimientos de mujeres, e incluso de algunos comerciantes, quienes supuestamente son los principales beneficiarios de estas leyes agrícolas. En respuesta a la fuerte represión (que, según el sindicato All India Kisan Sabha, incluyó gases lacrimógenos, cañones de agua y cientos de detenciones), se llevó a cabo una huelga de hambre. El 20, la llegada de nuevas fuerzas desde Rajastán bloqueó la ruta entre Delhi y Jaipur. El 23 fue decretado el “Día de los Agricultores” y se enviaron refuerzos desde varios estados a las fronteras de la capital, donde convergieron unos cuantos miles de pequeños y medianos agricultores del oeste y centro del país, pertenecientes en su mayoría a sindicatos de inspiración comunista, que formaron una caravana de jeeps.

El 26, se lanzó una campaña de boicot contra los “productos y servicios de Ambani y Adani”. En un juego de sonidos propio del hindú y sus combinaciones lingüísticas, los agricultores despotrican contra dos nombres bien reales: los de los multimillonarios Gautam Adani y Mukesh Ambani, cuyos conglomerados son símbolos tanto de “La India que brilla” (*Shining India*, el eslogan del BJP durante las elecciones –perdidas– de 2004) como de una determinada idea de la depredación de la economía rural. Ambani, el hombre más rico del país según Forbes (9), es el dueño de Reliance Industries, cuyas actividades van desde la petroquímica hasta las telecomunicaciones, pasando por la gran distribución, el transporte y el almacenamiento de cereales.

Justo detrás de él en el *ranking* se encuentra Adani, quien también está a la cabeza de un enorme grupo que opera en las minas, el sector inmobiliario, la gestión de puertos y, cada vez más, en la agroindustria (produce la mayor marca de aceite del país).

Ambos figuran entre los amigos íntimos de Narendra Modi. El 27 de diciembre, el programa mensual de radio del primer ministro, *Mann Ki Baat* (“Palabras del corazón”) se vio perturbado por campesinos que golpeaban platos de metal para tapar simbólicamente su voz y manifestar su rechazo a su política. Asimismo, las organizaciones de agricultores hicieron un llamamiento para devolver las tarjetas SIM de los celulares de las marcas Reliance (Ambani) y Jio (Adani).

La seguridad alimentaria

La organización casi militar del movimiento muestra la estrecha conexión entre el *jawan* (el soldado) y el *kisan* (el campesino), que remite a un eslogan político tan antiguo como la independencia: “*Jai Jawan, Jai Kisan*” (“Gloria a los soldados, gloria a los campesinos”). En otras palabras, si el ejército defiende las fronteras, los agricultores garantizan la seguridad interna, es decir, la seguridad alimentaria. En nombre de este pacto moral, el campesinado ha contado con la protección del Estado; un pacto que hoy está roto.

Al principio, el BJP y los medios calificaron a los manifestantes procedentes del Norte de “antinacionales”, alentados por China o Pakistán, e incluso de “terroristas” y “separatistas”, en referencia al movimiento secesionista de los sijs de Punjab que ocupó el Templo Dorado en 1984, antes de ser reprimido de forma sangrienta por orden de la primera ministra Indira Gandhi (quien fue asesinada algunos meses después por sus guardaespaldas sijs). Acusados asimismo de ser manipulados por las fuerzas de extrema izquierda naxalitas, forman lo que algunos diputados del BJP y periodistas cercanos al gobierno llaman el “*tukde tukde gang*”, la “pandilla que quiere romper la unidad nacional”.

Pero es todo lo contrario: la alianza de agricultores adoptó una posición firme contra la detención arbitraria de militantes de derechos humanos y contra la controvertida ley de ciudadanía de 2019 que discrimina a los musulmanes (10). Además, están repartiéndose comida cocinada por los sijs no solo entre los manifestantes, sino también entre los policías y las fuerzas paramilitares que han sido enviadas para “proteger” las rutas. Pero estas imágenes casi ni circulan en los “*godí-medias*” (literalmente, los “medios que se arrodillan ante el poder”), como los llaman los campesinos.

“Somos agricultores, no terroristas”, proclaman los manifestantes, quienes crearon el *Trolley Times*, un diario que pretende ser una respuesta independiente y organizada a las ofensivas mediáticas. También hicieron grandes inversiones en

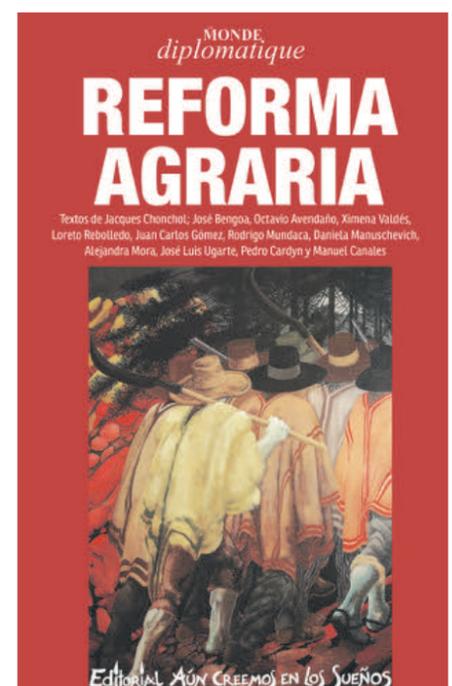
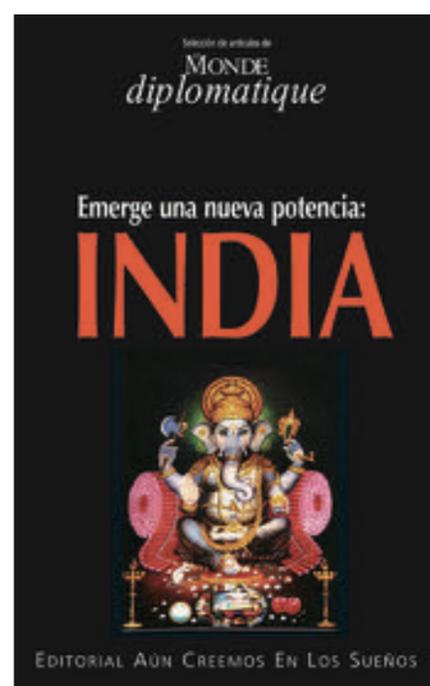
redes sociales, lo que les permitió seguir en vivo la serie de discusiones que tuvieron sus representantes con los ministros de Agricultura, Comercio e Industria, así como con el de Consumo, Alimentación y Distribución. Frente a un poder que se niega a derogar estas tres leyes, los agricultores siguen reclamando la extensión de los precios mínimos de apoyo a todo el sector agrícola y su reconocimiento como derecho establecido en la ley.

El 26 de enero, día del aniversario de la entrada en vigor de la Constitución de India después de la independencia, un gran desfile de tractores pudo converger en Delhi. Pero nada garantiza que esto vaya a ser suficiente para doblegar a Modi, quien, hasta el momento, se mostró inflexible. ■

1. Véanse Palagummi Sainath, “Vague de suicides et crise de l’agriculture”, en “Réveil de l’Inde”, *Manière de voir*, N° 94, agosto-septiembre de 2007; y Mira Kamdar, “Segunda ‘revolución verde’ en India”, *Le Monde diplomatique*, edición chilena, marzo de 2010.
2. Ashok Gulati, “On farm bills, government must get its act together, but Opposition is misguided”, *The Indian Express*, Nueva Delhi, 28-9-20.
3. Esta ley (“The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill 2020”), así como las otras dos, están disponibles en el sitio web del Parlamento: www.prsindia.org
4. Himanshu, “Lessons from Bihar’s abolition of its APMC system for farmers”, *Mint*, Nueva Delhi, 24-9-20.
5. Paridhi Sinha, “If the mandi is gone, there is no buyer of last resort – Richa Kumar, Associate Professor, IIT-Delhi”, *The Blue Letters*, 2-11-20, <https://theblueletters.com>
6. “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo”, edición 2020, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Roma, 13-7-20.
7. “Calling farmers terrorists attempt to defame them”: Arvind Kejriwal”, *New Delhi Television (NDTV)*, 14-12-20, www.ndtv.com. El Aam Aadmi Party, que llegó al poder en la región en 2015, había surgido con el movimiento anticorrupción de 2011.
8. “Degraded and Wastelands of India: Status and Spatial Distribution”, Consejo Indio de Investigación Agrícola, Nueva Delhi, junio de 2010.
9. “India’s 100 richest people”, *Forbes India*, Jersey City (Nueva Jersey), 7-10-20.
10. Aminah Mohammad-Arif, Jules Naudet y Nicolas Jaoul (dir.), “The Hindutva turn: authoritarianism and resistance in India”, *South Asia Multidisciplinary Academic Journal (SAMAJ)*, N° 24-25, París, 2020..

*Respectivamente, profesor de Sociología y Antropología en la Universidad de Tours y codirector de la obra colectiva *L’Inde des sciences sociales* (Aux Forges de Vulcain, París, 2017); y profesora de Sociología y directora adjunta del Centre Émile Durkheim, Burdeos.

Traducción: Andrea Romero



De los Imperios a los Estados-nación

El origen de los conflictos en Transcaucasia

por Étienne Peyrat*

Un odio feroz, relatos irreconciliables: la Guerra del Alto Karabaj enfrentó a dos naciones a las que todo parece oponer. Sin embargo, armenios y azerbaiyanos cohabitaron durante mucho tiempo en el seno de los imperios ruso, otomano o persa. En un espacio de pueblos entremezclados al sur del macizo del Gran Cáucaso, la fundación de Estados sobre una base territorial étnico-religiosa hizo estallar el polvorín.

Fue por medio de la botánica, ciencia de la clasificación por excelencia, que un estudiante de la Universidad de Tartu (Estonia, en ese entonces Imperio Ruso), Nikolaus (Nikolai) von Seidlitz, inició, en los años 1850, el descubrimiento de los confines caucásicos del imperio zarista. Instalado poco después en Bakú, hoy capital de Azerbaiyán, y luego en Tiflis -hoy capital de Georgia-, Seidlitz se convirtió pronto en el responsable del Comité de Estadística del Cáucaso, dependiente de las autoridades rusas en la región. A ese título publicó en 1881 el primer gran mapa etnográfico de la región. En los años siguientes, lo declinaría mediante una serie de publicaciones que aún aclaran el conflicto presente en el Alto Karabaj.

El mapa impresiona, en un primer momento, por sus dimensiones. Con una escala de 1:1.080.000 (1 centímetro en el mapa por cada 10,8 kilómetros en el territorio), muestra de este a oeste todo el espacio contenido entre el Mar Negro al Mar Caspio (1). Comparada con las percepciones actuales, esta representación recuerda que el Virreinato del Cáucaso, establecido por el zar Nicolás I en 1844-1846, cubría un espacio considerable, que corría, al norte, hasta las llanuras del Don y, al sur, hasta los límites de los imperios persa y otomano. El conjunto impacta por su abigarramiento. Este deriva de la voluntad de resaltar la diversidad "etnográfica" de una región particularmente heterogénea. Esta diversidad, que contrasta con la situación presente, era heredada de la historia, en el cruce de tres imperios, y de circulaciones antiguas que hacían cohabitar en espacios restringidos -a veces en un mismo valle o en un mismo pueblo- grupos étnicos, lingüísticos y religiosos distintos.

Herramientas combinadas

La obra de Seidlitz se inscribe en el surgimiento, a fines del siglo XIX, de las tentativas occidentales de llevar a cabo series estadísticas de las poblaciones, gracias a las herramientas combinadas de la antropología física, la lingüística y la geografía. Esas tentativas culminarán en Rusia con el primer gran censo zarista, que, llevado a cabo en 1897, reveló la dificultad de captar la realidad compleja de las zonas fronterizas del Imperio (2). El mapa se apoyaba, en lo inmediato, sobre una serie de volúmenes pu-

blicados por Seidlitz a partir de 1871 bajo el título *Selección de informaciones acerca del Cáucaso*. El cuadro estadístico que acompaña el mapa traduce las principales categorías censadas.

Aunque aparece el término "raza", la lengua constituye el principal criterio de clasificación. Al sur de la barrera geográfica que conforman las altas montañas del Gran Cáucaso, emergen tres grupos mayores: armenios, georgianos y "tártaros azerbaiyanos", la apelación más corriente en esa época para designar a los turcofonos musulmanes (generalmente chiitas) de Transcaucasia. Aunque los georgianos y los tártaros ocupan superficies relativamente homogéneas al este y al oeste, se observan poblaciones musulmanas dispersas hasta el borde del Mar Negro, mientras que los armenios se despliegan por toda la región; sin contar a aquellos -más numerosos en aquel entonces- del Imperio Otomano. El observador contemporáneo debe sin embargo cuidarse de interpretar semejante cohabitación desde el punto de vista de una lectura demasiado exclusiva de las identidades, a la cual lo acostumbra la historia reciente. Las formas nacionales se cristalizaron progresivamente. Competían con elementos religiosos, geográficos, lingüísticos o sociales que frecuentemente tenían una importancia igual de grande y que complicaban las primeras tentativas de clasificación.

Un conservatorio de minorías

El mapa de Seidlitz ofrece una introducción visual a la complejidad de los procesos socio-políticos que se anudan en el Cáucaso al final de la época zarista. Recuerda un tiempo en el cual, lejos de corresponder al modelo del Estado-nación, esos territorios estaban recubiertos con un mosaico de pueblos; y seguirían siendo hasta el siglo XX un formidable conservatorio de minorías. Pero, aunque el mapa de 1881 deja ver una representación estadística de las poblaciones del Cáucaso, la región en realidad se encontraba en plena transformación, con migraciones importantes, asociadas a las actividades agrícolas, mineras e industriales, así como también a la construcción de grandes infraestructuras y un auge petrolero que trastornaba a la ciudad de Bakú.

En 1905, la primera revolución rusa dejó en evidencia las fracturas socioeconómicas, religiosas y políticas que recorrían la región, al combinar un movimiento revolucionario antizarista y violencias de masas entre tártaros turcofonos y armenios. La superposición de estas dos tendencias desembocó en varios meses de caos en la zona y en episodios repetidos de disturbios urbanos, pogromos y enfrentamientos en las zonas rurales.

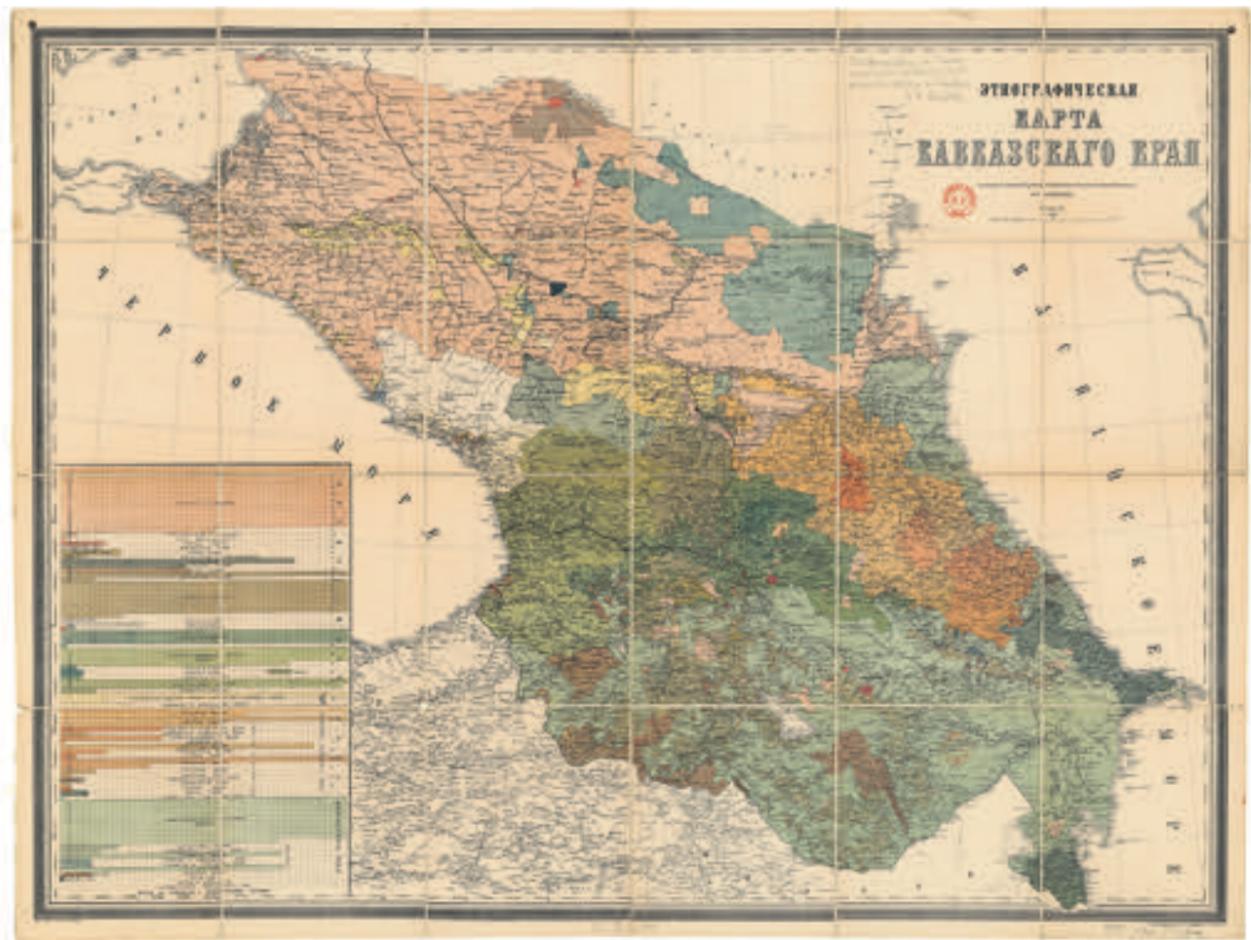
La caída del imperio zarista, en la estela de las revoluciones de 1917, y la declaración de independencia de tres repúblicas, en la primavera de 1918, a menudo son consideradas como puntos de partida de los conflictos te-

rritoriales actuales. Aunque es cierto que la aparición de Georgia, Armenia y Azerbaiyán, en 1918, transformó la naturaleza de las tensiones regionales, los argumentos desplegados durante el período de las independencias caucásicas (hasta 1920-1921) nacieron antes.

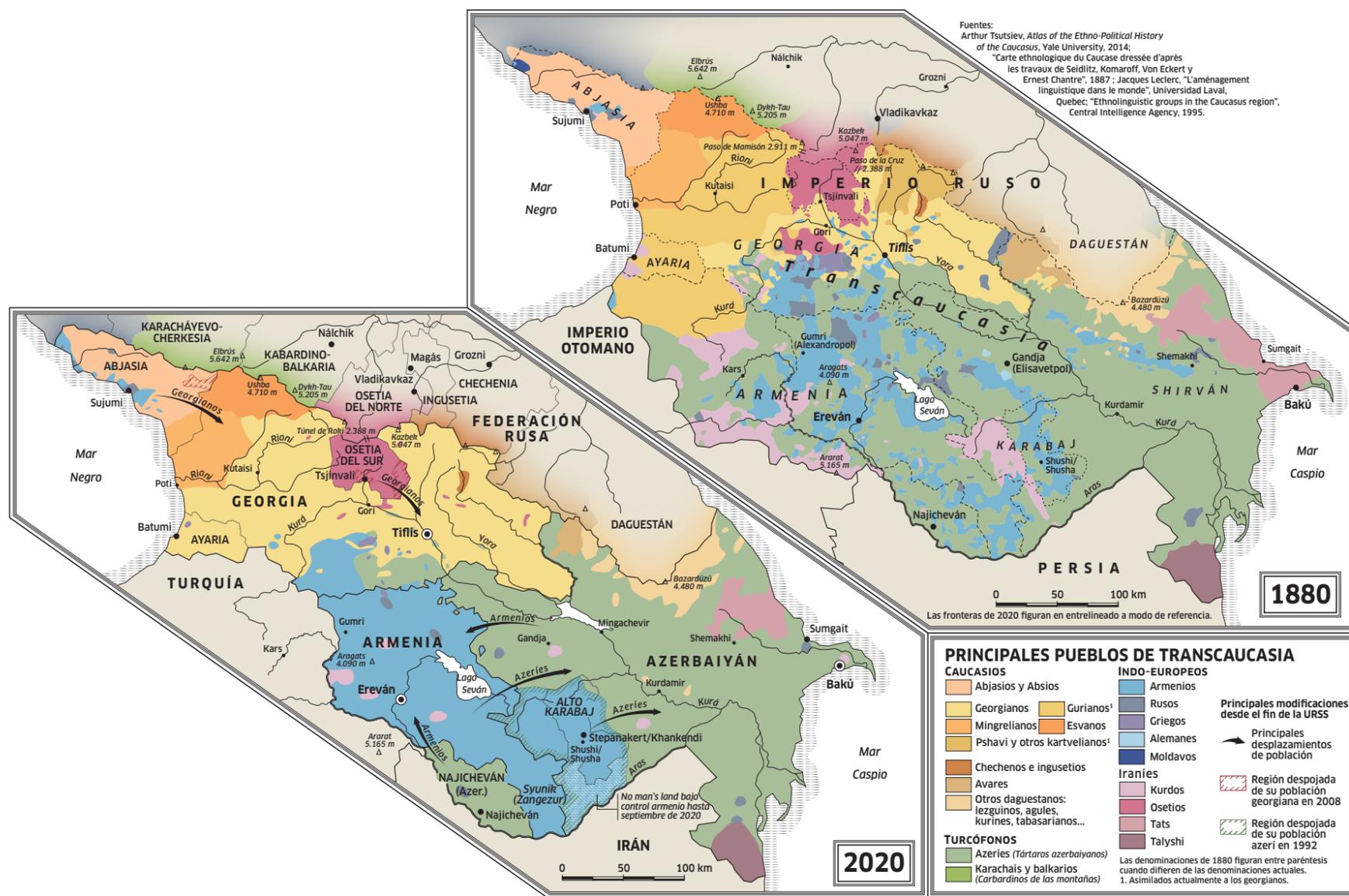
Las nuevas repúblicas se enfrentaban reutilizando los mapas y las estadísticas producidas en el curso de los años precedentes, en el marco de los debates reanimados en 1915-1916 sobre la reforma de la autonomía provincial (reforma de los *zemstvos*) en Transcaucasia. Esta había reactivado cuestiones relativas al recorte territorial de la región y a la integración del flujo de refugiados armenios como consecuencia del genocidio en el Imperio Otomano.

El papel de Stalin

El Alto Karabaj se convirtió rápidamente en uno de los puntos clave del enfrentamiento entre Azerbaiyán y Armenia. Mientras que, en enero de 1919, los azeríes -con el acuerdo de los británicos- nombraban a un gran propietario terrateniente, Khosrov Bek Sultanov, gobernador general de la región, los armenios del Karabaj rechazaban esta toma de poder. Una serie de violencias estalló en los meses que siguieron, con la Armenia independiente apoyando discretamente el irredentismo local. La debilidad de los dos Estados, enfrentados al derrumbe económico y político de la región, no le permitió a ninguno de los dos tomar la delantera. Mientras se esperaba



Biblioteca Nacional de Francia



el arbitraje de las potencias aliadas, la sovietaización del Cáucaso del Sur, que se produjo a partir de la primavera de 1920, marcó el principio de una nueva fase.

Muchos han evocado, durante los enfrentamientos del otoño boreal de 2020 en el Alto Karabaj, el rol que habría jugado Josef Stalin en el emplazamiento de la región autónoma de Nagorno-Karabaj dentro de la República Soviética de Azerbaiyán en los primeros años del poder soviético. Efectivamente, el georgiano Stalin nunca estuvo ausente de las cuestiones caucásicas, aun cuando su cargo de Comisario de las Nacionalidades de la Rusia bolchevique lo confrontaba a desafíos que excedían ampliamente las rivalidades de su región de origen.

Más que una aplicación consciente de la estrategia “divide y reinarás”, la creación del Nagorno-Karabaj traducía los movimientos tácticos de un poder soviético que combinaba principios ideológicos y realidades políticas de un territorio en ebullición. La sovietaización de Azerbaiyán (abril de 1920), luego de Armenia (diciembre de 1920), no terminó con las tensiones interétnicas en los confines de las dos repúblicas. Elites bolcheviques azerbaijanas y armenias se enfrentaron por el control de las regiones de Najicheván y Zangezur, cuyas poblaciones estaban entremezcladas, y del Karabaj, cuyas alturas estaban pobladas muy mayoritariamente por armenios.

Inicialmente, la oficina caucásica del Partido -que reunía a los principales líderes bolcheviques de la región- optó por la incorporación del Alto Karabaj a Armenia, para satisfacer los sentimientos nacionales armenios, mientras las revueltas se multiplicaban dentro del territorio de la república. Es el sentido de una decisión del 3 de junio de 1921, invalidada por otra un mes más tarde, adoptada el 5 de julio en presencia de Stalin. Aunque los archivos no ofrecen un elemento definitivo acerca de los motivos de este viraje, la principal explicación parece ser el aplastamiento de las revueltas en Armenia a manos del Ejército

Rojo, justo en el momento en que los dirigentes azerbaijanos ejercían toda su influencia para recuperar la región (3).

Lejos de detenerse en 1921, la historia del Alto Karabaj experimentó durante el período soviético una serie de evoluciones que por lo general permanecen invisibles, lo cual pudo alimentar el sentimiento de un resurgimiento incomprensible a fines de los años 1980. Así, la definición de las fronteras se extendió hasta mediados de los años 1920, planteando cuestiones espinosas de reparto de tierras, pero también de atribución de etnicidad. Los kurdos que vivían en la región de Kelbajar -entre la República de Armenia y el Alto Karabaj- captaron la atención de los etnólogos. Fueron objeto de esfuerzos crecientes de asimilación lingüística y cultural por parte de las autoridades de Bakú, que buscaban consolidar su influencia en la zona.

El declive de la diversidad

En el largo plazo, y lejos de los ideales universalistas, el régimen soviético tendió a reforzar las pretensiones de cada grupo nacional que dominaba en el territorio, se tratara de una república, de una república autónoma o de una simple región. Lo que pudo ser calificado desde los años 1920 como “departamento comunitario nacional” (4) fortaleció lógicas de homogeneización, como lo demuestra la caída todo a lo largo del siglo XX de la multiétnicidad en varios territorios de la zona.

Tiflis, que en 1926 aún contaba con un 35% de armenios y un 16% de rusos, vio cómo aumentaba constantemente la población georgiana, hasta alcanzar el 48% en 1959, el 57% en 1970 y el 66% en las vísperas de la caída de la Unión Soviética. En Najicheván, enclave separado de Azerbaiyán por la región armenia de Zangezur, la proporción de armenios comenzó una caída a fines del período de entreguerras, pasando de más del 10% en 1939 al 1,5% en 1979. Las revueltas campesinas del verano de 1930 y el “terror” estalinista de fines de los años 1930 marcaron la ocasión, en varios lugares,

para acelerar el declive de las minorías a través de la deportación de ciertos grupos, particularmente los griegos, los armenios, los turcos y los kurdos de Georgia; una maniobra que se ejecutó al final de la Segunda Guerra Mundial (5).

Sin embargo algunos momentos se destacan. Así, a fines de los años 1940, Grigori Artiomovitch Arutiunov (Grigor Arutiunian en armenio) y Mir Jafar Baghirov, primeros secretarios de los partidos comunistas armenio y azerbaiyano, respectivamente, encaron brevemente intercambios de poblaciones y de territorios ligados a sus respectivas veleidades de expansión a expensas de Turquía e Irán. El abandono de las reivindicaciones territoriales soviéticas contra esos dos países conllevó sin embargo la retirada de esos proyectos a fines de los años 1940.

Del mismo modo, en los años 1960-1970, surgió una serie de reivindicaciones en torno al Alto Karabaj, que suscitaban la inquietud de las autoridades de Bakú (6). La diáspora armenia en los países occidentales, crítica respecto del régimen soviético, también adoptó la postura de la incorporación del Alto Karabaj a Armenia, cuestión a menudo ligada a la conmemoración del genocidio de 1915, que dio lugar a una primera gran manifestación en abril de 1965. A la inversa, las autoridades azerbaijanas aprovecharon el desarrollo económico de su república para fortalecer la integración del Alto Karabaj mediante la instalación de poblaciones azeries y se esforzaron en limitar los intercambios de la región autónoma con Armenia.

Tensiones y conflictos

Al tomar un mapa del Cáucaso del Sur establecido un siglo después del de Seidlitz, se pueden ver las principales evoluciones de la región. A la salida de la Primera Guerra Mundial, como de la URSS setenta años después, las pretensiones de los nuevos Estados de fundar su poder al mismo tiempo sobre un principio territorial y sobre una soberanía étnico-religiosa explican por un lado la

multiplicidad de las tensiones con las minorías (ayares, lezguinos, talyshi) y los conflictos abiertos: Osetia del Sur, Abjasia y el Alto Karabaj, sin contar los del Cáucaso del Norte, en la Federación de Rusia.

A las violencias de masas que marcaron el principio del siglo XX les siguieron formas más silenciosas de homogeneización étnica y cultural. Es por lo tanto en esta historia más prolongada de una reducción de la diversidad donde hay que volver a ubicar los conflictos que aparecen en la época de la Perestroika (1985-1991), cuando la potencia en declive de los órganos soviéticos centrales les deja libre curso a los enfrentamientos nacionales y establece las bases de los Estados independientes forjados a “prueba de fuego” (7) ■

1. “Carte ethnographique du Caucase par le rédacteur principal du comité de statistique du Caucase”, 1881, Gallica, Biblioteca Nacional de Francia, <https://gallica.bnf.fr>

2. Juliette Cadiot, *Le Laboratoire impérial. Russie-URSS, 1860-1940*, CNRS Éditions, Paris, 2007.

3. Arsène Saparov, *From Conflict to Autonomy in the Caucasus: The Soviet Union and the Making of Abkhazia, South Ossetia and Nagorno Karabakh*, Routledge, Abingdon (Reino Unido)-Nueva York, 2014.

4. Yuri Slezkine, “The USSR as a communal apartment, or how a socialist state promoted ethnic particularism”, *Slavic Review*, Vol. 53, No 2, Urbana (Illinois), verano de 1994.

5. Claire Pogue Kaiser, *Lived Nationality: Policy and Practice in Soviet Georgia, 1945-1978*, tesis de doctorado en Historia, Universidad de Pensilvania, 2015.

6. Cəmil Həsənlı, *Azərbaycanda Sovet liberalizmi. Hakimiyyət. Ziyalılar. Xalq (1959-1969)*, Qanun, Bakú, 2018.

7. Taline Papazian, *L'Arménie à l'épreuve du feu. Forger l'État à travers la guerre*, Karthala, Paris, 2016.

*Profesor titular de Historia Contemporánea en Sciences Po Lille, autor de *Histoire du Caucase au XXe siècle*, Fayard, Paris, 2020.

Traducción: Aldo Giacometti

Tras una amarga década posrevolucionaria

Egipto en búsqueda de influencia

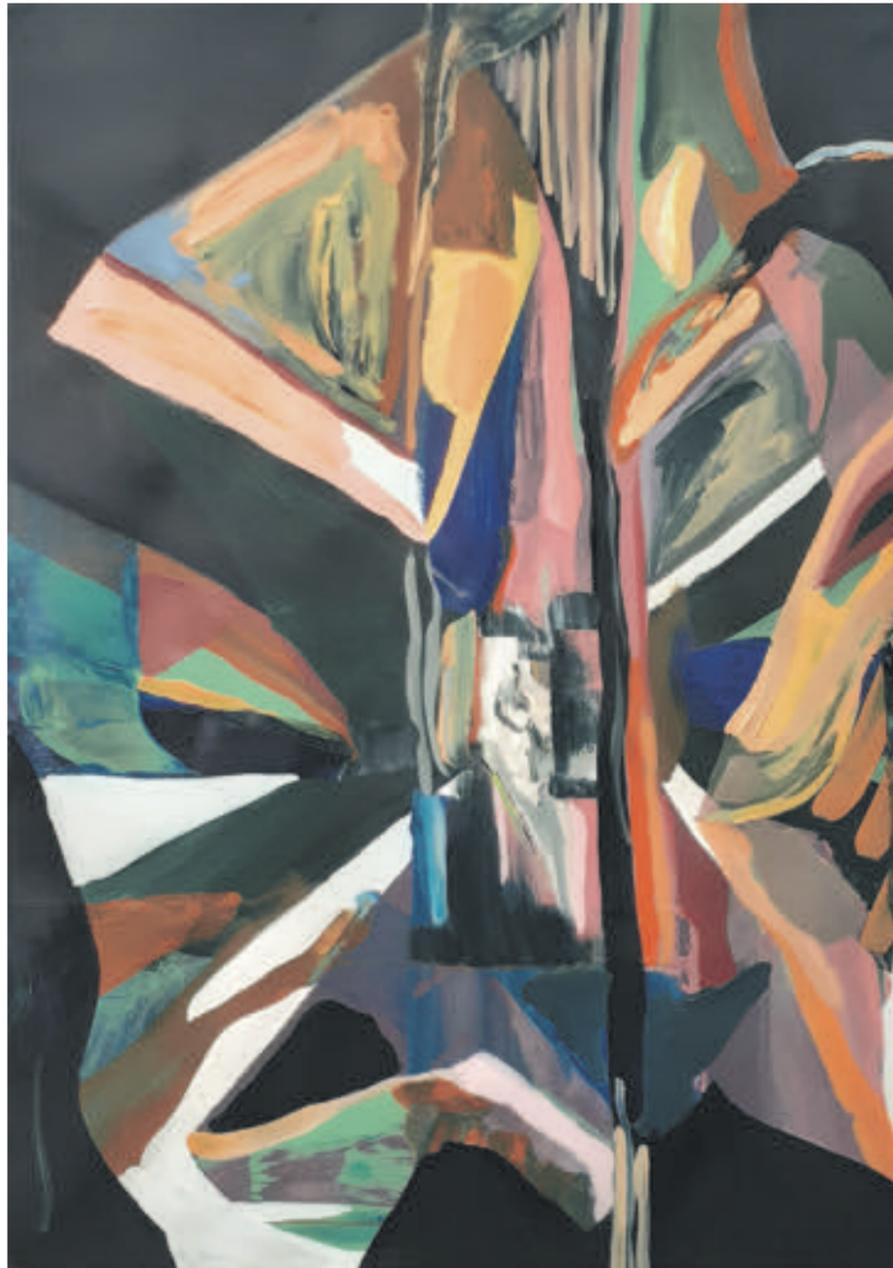
por Akram Belkaïd*

Al tiempo que multiplica las violaciones a los derechos humanos, el presidente Abdel Fatah Al Sisi busca reposicionar a Egipto en el centro del tablero diplomático regional. Quiere refozar sus relaciones con Arabia Saudita y evitar tensiones con la nueva administración estadounidense. No excluye intervenir en Libia y busca aliados para frenar el proyecto de represa etíope en las fuentes del Nilo.

El próximo 3 de marzo, los servicios de seguridad egipcios tendrán una razón especial para impedir las manifestaciones contra el régimen del mariscal-presidente Abdel Fatah Al Sisi. Ese día, se cumplen tres años desde que la Alta Corte Constitucional ratificó de manera definitiva la cesión de las islas de Tirán y Sanafir a Arabia Saudita. En 2016, El Cairo decidió entregar la soberanía de estos dos islotes que bloquean la entrada al Golfo de Aqaba, en el Mar Rojo, lo que provocó el rechazo de gran número de egipcios, quienes consideraron la medida como una afrenta al orgullo nacional y un reconocimiento de debilidad ante la monarquía wahabita. Así, los detractores de Al Sisi podrían verse tentados, una vez más, de denunciar esta cesión en las calles, tal como lo hicieron de manera masiva en 2016 y, luego, en la primavera boreal de 2017. Inclemente ante cualquier tipo de oposición (1), el Presidente no tolera que lo acusen de malvender la grandeza de su país. Todo lo contrario: la célebre expresión “*Misr, um al dunya*” [“Egipto, madre (o emblema) del mundo”] es la piedra angular de un discurso oficial chauvinista y revanchista.

Para el gobierno, se trata de volver a ocupar el centro del tablero regional y reafirmar su estatuto de potencia, muy afectado por las consecuencias de la revolución de 2011. Aunque Al Sisi no lamenta públicamente la caída del ex presidente Hosni Mubarak, suele recordar que la confusión posterior, en particular con la elección presidencial del candidato islamista Mohamed Morsi en 2012 –depuerto por el ejército un año después–, frenó una dinámica prometedora tanto en el plano económico como en el geopolítico (2). Lo cierto es que seis meses antes de la revolución, el Banco Mundial ignoraba deliberadamente los conflictos sociales recurrentes en las empresas del delta del Nilo, así como los altos niveles de desigualdad, y estimaba que Egipto formaba parte del club de los “mejores reformadores mundiales”, gracias a un plan de modernización de inspiración liberal (3). En el plano diplomático, el país se enorgullecía de que, menos de seis meses después de su llegada a la Casa Blanca, Barack Obama lo hubiera elegido para pronunciar, el 4 de junio de 2009, en la Universidad del Cairo, su discurso del “nuevo comienzo”, que tenía como objetivo refundar las relaciones entre Estados Unidos y el mundo musulmán en su conjunto.

El presidente Al Sisi busca así apuntalar su legitimidad recuperando un prestigio profundamente dañado por diez años de tumultos y

Paula Valenzuela, *Recomponer* (acrílico sobre papel), 2020

violencias. En el plano interno, esta búsqueda de grandeza se traduce, entre otras cosas, en el lanzamiento del “Mapa del futuro”, que prevé varios proyectos de construcción de infraestructura, entre los que se encuentra una nueva ciudad al este de El Cairo y diez aeropuertos. Estos proyectos faraónicos benefician, de paso, a las empresas que dependen del ejército (4). En el plano internacional, las consignas para la diplomacia son claras: hay que salir del rezago respecto de los demás países de la región, ya sea se trate de las monarquías del Golfo, Turquía, Irán o incluso Israel.

Ambiciones limitadas

La renuncia a Tirán y Sanafir puede parecer contradictoria con esta búsqueda de influencia, ya que las islas resultan estratégicas para controlar el acceso al puerto israelí de Eilat. Según la información que nos brindaron oficiales egipcios, el Presidente sopesó esta cesión con cuidado. Más allá de los argumentos engañosos esgrimidos –Egipto habría ocupado las islas a fines de los años cuarenta a pedido del rey Saúd, quien creía a su ejército incapaz de defenderlas de la marina israelí–, la

restitución tenía como objetivo principal conciliarse con Arabia Saudita y su nuevo poder, encarnado por el príncipe heredero Mohammed Ben Salman (MBS). Además de Estados Unidos, que provee 1.500 millones de dólares de ayuda anual a su ejército, el reino wahabita es el otro socio que El Cairo considera indispensable. Después de un período de desavenencias provocado por la caída de Mubarak, Al Sisi logró apaciguar con paciencia las tensiones bilaterales. Tras la “devolución” de las islas, ningún intelectual egipcio se animó a convocar a la revolución en la península arábiga y ningún dignatario de la Universidad de Al Azhar se arriesgó a calificar al wahabismo de “doctrina extremista”, como sí había sucedido en agosto de 2016, en la conferencia islámica internacional de Grozny, Chechenia (la institución religiosa fue obligada luego a presentar sus excusas a las autoridades sauditas).

Cuando se trata de tapar los agujeros en el presupuesto, financiar la modernización y la ampliación del Canal de Suez o construir la megalópolis de acero y cristal destinada a descongestionar la capital, el presidente Al Sisi acude en primer lugar a Riad. Esto lo obliga

a hacer algunas concesiones, que resaltan los límites de su ambición. Después de algunas críticas formales, en El Cairo aceptaron que la monarquía se mostrara indulgente con los Hermanos Musulmanes egipcios y, al mismo tiempo, se aseguraron de que la diáspora yemenita que vive en las márgenes del Nilo silenciara sus críticas ante la intervención militar saudita contra los hutíes (5). Una intervención a la que Egipto se incorporó con presteza, apenas fue lanzada, en marzo de 2015. Con esta acción, rompió con la época de Gamal Abdel Nasser, en la que El Cairo y Riad se enfrentaban militarmente por medio de aliados yemenitas interpuestos. Si bien es cierto que solo se movilizó a la marina y que en ningún momento se desplegaron tropas en tierra –un gran motivo de enojo entre ambas partes, en 2015–, lo cierto es que Al Sisi aseguró repetidas veces que pondría el ejército a disposición de Arabia Saudita en caso de una degradación dramática de su posición en Yemen. Además, aunque el ministro de Asuntos Exteriores Sameh Shoukry no se cansa de repetir que “la solución para la guerra en Yemen es de orden político”, tiene muy en claro que su país no puede tomar una iniciativa diplomática autónoma sobre este tema sin arriesgarse a encender chispas en Riad.

La crisis de 2017 con Qatar y su desenlace –provisorio– en enero también demostraron que El Cairo tiene muy poca autonomía en los asuntos del Golfo. En 2017, Riad y Abu Dhabi exigieron que Egipto y Bahrein rompieran relaciones diplomáticas con Doha (6). Se podría señalar que Al Sisi no tuvo reparos en castigar un país que nunca dejó de apoyar al ex presidente Morsi y que constituye una base de retaguardia para los Hermanos Musulmanes, pero lo cierto es que este asunto priva a Egipto de los varios miles de millones de dólares de ayuda presupuestaria prometidos por Doha y pone en una posición muy difícil a los miles de ciudadanos egipcios que viven en el emirato. “Los egipcios nos hicieron saber que habrían preferido una crisis menos virulenta y no el bloqueo que sufrimos por tres años y medio”, confía un diplomático qatari. Quienes estuvieron detrás de esta maniobra fueron el príncipe heredero saudí y su homólogo emiratí Mohammed Ben Zayed (MBZ). El Cairo no tuvo voz ni voto y debió conformarse con confiar que las intenciones de Qatar fueran “sinceras”. Ahora bien, Doha no hizo ninguna concesión de fondo ni satisfizo ninguna de las trece exigencias –como el cierre del canal informativo Al Jazeera– que le habían hecho llegar en el verano boreal de 2017. Esto podría hacer estallar una nueva crisis y, en ese caso, serán Riad y Abu Dhabi las que decidirán si es necesario o no desenterrar el hacha de guerra.

Prioridades diplomático-militares

Los dirigentes egipcios también se mostraron susceptibles a las presiones estadounidenses. A pocas semanas de su partida de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump quería presumir de un último éxito diplomático en la región. De hecho, su afán por reconciliar a los *chouyoukh* (jeques) alimentó las especulaciones sobre un posible bombardeo de último minuto contra las instalaciones nucleares iraníes. Esta perspectiva resultaba poco atractiva para El Cairo, consciente de que los primeros objetivos de las represalias iraníes serían las monarquías del Golfo, lo que obligaría a su ejército a prestar ayuda. Ahora bien, Egipto ya tiene tres prioridades

diplomático-militares que le impiden dispersarse. En orden creciente de importancia, se trata de las relaciones con Estados Unidos, el conflicto con Libia y las tensiones con Etiopía.

En El Cairo, no olvidan que Joseph Biden fue vicepresidente de una administración favorable a la renuncia forzada de Mubarak y que, en 2013, suspendió de manera temporal su ayuda financiera tras el golpe de Estado contra el presidente Morsi. En 2016, la prensa cairota celebró la elección de Trump y los círculos intelectuales difundieron ampliamente la hipótesis extraoficial de que las “primaveras árabes” habían sido una manipulación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del Partido Demócrata para instalar a los islamistas en el poder (7). Al Sisi se verá obligado, entonces, a negociar con una presidencia demócrata que podría resultar mucho más incómoda que el dúo formado por Trump y su yerno Jared Kushner. No obstante, contará con el apoyo del presidente francés Emmanuel Macron, quien, durante su visita a París en diciembre, le otorgó a escondidas la Gran Cruz de la Legión de Honor (8). Francia constituye para Egipto un proveedor de material militar particularmente conciliador, puesto que Macron se negó a imponer el respeto de los derechos humanos como condición necesaria para la alianza entre ambos países (9).

Ese material de guerra es muy bien recibido en la lucha del ejército contra los insurgentes islamistas en el Sinaí (10), pero también ante la perspectiva de un conflicto en el oeste. De hecho, Libia ha sido objeto de preocupación creciente para El Cairo desde los reveses del mariscal Khalifa Haftar tanto ante las tropas del Gobierno de Acuerdo Nacional (Government of National Accord, GNA) con base en Trípoli como ante las fuerzas turcas. Hasta 2019, el poder egipcio apostaba a una victoria de su aliado y le ofrecía apoyo logístico y diplomático. La incapacidad del mariscal para terminar con el GNA y la intervención de nuevos ac-

tores en el conflicto –Turquía junto a Trípoli, los Emiratos Árabes Unidos y Rusia en apoyo a Haftar– lo llevaron a implicarse aun más en el conflicto. Así, desde el año pasado, fue adoptando un tono cada vez más beligerante respecto de Trípoli, pero también del “ocupante invasor”, léase Turquía. El 20 de julio de 2020, el Parlamento autorizó el envío de “elementos del ejército egipcio a misiones de combate más allá de las fronteras del Estado egipcio para defender la seguridad nacional egipcia”, lo que daba vía libre a una intervención en Libia. La tensión bajó en octubre tras un alto el fuego de los beligerantes libios, pero la posición de El Cairo es clara: si se reinician los combates y el GNA intenta tomar la ciudad de Sirte, puerta de entrada a la rica zona petrolera, el ejército egipcio, con la fuerza de sus 450.000 hombres, marchará junto al mariscal Haftar.

Al Sisi busca apuntalar su legitimidad recuperando un prestigio profundamente dañado por diez años de tumultos y violencias.

Para muchos diplomáticos, la “madre de las prioridades” sigue siendo la amenaza existencial que representa el proyecto etíope de megarepresa hidroeléctrica en el curso del Nilo (11). El Cairo teme que si el ritmo de

llenado este embalse, que tiene 145 metros de altura y una capacidad de 74.000 millones de metros cúbicos, es demasiado rápido pueda provocar la muerte de su agricultura (12). En efecto, Egipto, el “regalo del Nilo”, depende en un 98% de este río por sus necesidades hídricas. En 1929, y luego en 1959, dos acuerdos internacionales le dieron primacía sobre sus aguas en nombre de un derecho histórico hoy discutido por Etiopía, que pretende usar la Represa del Renacimiento para dar electricidad a todo el país. En la década del noventa, Mubarak amenazó con enviar la aviación militar si no se llegaba a un acuerdo antes de que comenzaran las obras. Veinte años más tarde, las negociaciones están estancadas: Etiopía quiere llenar la represa en siete años mientras Egipto exige que se haga en veintuno y contar con derecho de supervisión sobre el funcionamiento de la infraestructura. Ahora bien, Addis Abeba comenzó las operaciones de llenado sin esperar a llegar a un acuerdo. Sin una opción militar factible –Francia y China, que participan de la construcción, se oponen con firmeza–, Egipto intenta en vano convencer a sus socios africanos de que lo ayuden a que Etiopía acepte sus condiciones. El país cuenta con solo dos aliados para esta batalla: Estados Unidos, que criticó a Addis Abeba por haber comenzado a llenar la represa, e Israel, cuya influencia en África Oriental va en aumento.

Los argumentos de El Cairo ante Tel Aviv consisten en presentarse como aliado indispensable respecto de la cuestión palestina. Su diplomacia apadrina las tentativas de conciliación entre Fatah y Hamas y sus servicios de seguridad aún tienen influencia en lo que sucede en la Franja de Gaza. Sin embargo, El Cairo ya no es el único interlocutor árabe de Israel. Con la normalización en curso, los Emiratos Árabes Unidos y las demás monarquías del Golfo, incluyendo Arabia Saudita, tratan directamente con Tel Aviv

y ya no necesitan mediación (13). Está claro que la paz con Egipto sigue siendo esencial para Israel, pero su idilio con los países del Golfo, así como la normalización en curso con Sudán, y pronto, quizás, con los países del Sahel, relativizan su importancia. ■

1. “Égypte : Une répression croissante qui perdure”, Human Rights Watch, 13-1-21, hrw.org
2. Esam Al-Amin, “Égypte : dialectique entre révolution et contre-révolution”, Middle East Eye, 10-9-15, www.middleeasteye.net
3. “Réformer en période difficile”, *Doing Business* 2010, <https://francais.doingbusiness.org>
4. Véase Jamal Bukhari y Ariane Lavrilleux, “Voracité de l’armée égyptienne”, *Le Monde diplomatique*, París, julio de 2020.
5. Véase Pierre Bernin, “Fracaso saudita en Yemen”, *Le Monde diplomatique*, edición chilena, enero-febrero de 2021.
6. Véase Angélique Mounier-Kuhn, “Bajo bloqueo, la península de Qatar levanta vuelo”, *Le Monde diplomatique*, edición chilena, octubre de 2018.
7. “A Western plot to dish the Arabs”, *The Economist*, Londres, 12-11-13.
8. Mehdi Chebil, “Une légion d’honneur au maréchal Sisi en catimini... qui finit par faire du bruit”, *France 24*, 15-12-20.
9. AFP, 7-12-20.
10. Allison McManus, “The Egyptian military’s terrorism containment campaign in North Sinai”, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, DC, 30-6-20.
11. Véase Habib Ayeub, “¿Quién se quedará con las aguas del Nilo?”, *Le Monde diplomatique*, edición chilena, agosto de 2013.
12. “‘Means our death’: Egyptian farmers fear effect of Ethiopia dam”, *Al-Jazeera*, 20-8-20, www.aljazeera.com
13. Véase Sarra Grira, “Émirats-Israël. Mohamed Ben Zayed creuse son sillon au Proche-Orient”, *Orient XXI*, 18-8-20, <https://orientxxi.info>

*Jefe de redacción adjunto de *Le Monde diplomatique*, París.

Traducción: Georgina Fraser

Libros impresos (\$3.950) y digitales (\$2.950)



En venta en librerías y en Le Monde Diplomatique, San Antonio 434 Santiago. Teléfono: 22 608 35 24
Por internet en: www.editorialauncreemos.cl

La destrucción de los sitios que marcaron la rebelión egipcia

Plaza Tahrir, un símbolo sitiado

por Martin Roux*, enviado especial

Epicentro hace diez años de la revolución egipcia, la Plaza Tahrir, en El Cairo, estuvo en el corazón de los enfrentamientos y las movilizaciones que condujeron a la caída del presidente Hosni Mubarak, el 11 de febrero de 2011. Desde el golpe de Estado militar del 3 de julio de 2013, el régimen tomó posesión de ese lugar, despojándolo de toda huella de la sublevación popular.

Cada vez que Nader Fahmi (1) atraviesa la Plaza Tahrir, en el centro de El Cairo, su ritmo cardíaco se acelera. Ni la emoción ni la nostalgia de la revolución de 2011 y de su fervor causan esta reacción, es el miedo: “Si los policías me interpellan y me piden que desbloquee mi teléfono móvil, corro el riesgo de ser detenido”, dice este militante de derechos humanos. En 2011, con apenas 20 años, había participado en las movilizaciones populares que debutaron el 25 de enero y que desembocaron en la renuncia del presidente Hosni Mubarak, el 11 de febrero. Se acuerda de las masas apretadas de manifestantes solidarios, de los eslóganes entonados al infinito, como “*El-sha'ab yourid isqat el-nizam*” (“El pueblo quiere la caída del régimen”) o “*Ir-hal!*” (“¡Fuera!”), y de los debates políticos improvisados en los campamentos que florecieron en la plaza. Hoy, sabe que a la menor sospecha puede unirse a los 60 a 100.000 prisioneros de opinión que contabiliza el Instituto de El Cairo para el estudio de los derechos humanos (2).

Desde que en septiembre de 2019 las manifestaciones contra el presidente Abdel Fatah al Sisi, en el poder desde 2014, agitaron el corazón de la capital egipcia y otros localidades del país, los controles arbitrarios en los alrededores de Tahrir se generalizaron. Como el régimen no tolera ninguna objeción, más de 4.400 personas fueron encarceladas en los quince días que siguieron a ese arrebato de ira, cerca de 900 de ellas en El Cairo (3). La plaza, por su parte, tomó “la apariencia de una guarnición militar custodiada por policías de civil –prosigue Fahmi–. Son más numerosos que los transeúntes. Se los reconoce por su aspecto, con su bigote y sus zapatos lustrados. La intimidación es permanente”.

Este bloqueo, instalado en nombre de la “lucha contra el terrorismo” y la “defensa de la estabilidad”, también se tradujo por un lavado de cara de la zona, que comenzó en octubre de 2019. Esa rotonda simbólica de 7,5 hectáreas (dos veces la plaza de la República en París) se transformó en un museo a cielo abierto consagrado al Egipto faraónico, según los deseos del gobierno, que invirtió en los trabajos cerca de 8 millones de euros. Actualmente, un obelisco de diecisiete metros de alto preside el centro de ese nudo urbano invadido por los autos. Cuatro esfinges con cabeza de carnero desplazadas del templo de Karnak enmarcan esa columna heredada del reino de Ramsés II. Al pie del monumento, una placa sobrevuela la historia moderna del lugar en cuatro revoluciones: aquella liderada por Saad Zaghloul para la independencia en 1919; el golpe de Estado de los Oficiales libres que, en 1952, instauró una república; la revolución del 25 de enero de 2011, que marcó el comienzo del fin para Mubarak; y, por último, la del 30 de junio de 2013, que llevaron a la destitución por parte del ejército de Mohamed Morsi, primer presidente civil democráticamente elegido de Egipto, el 3

de julio de 2013. Este último acontecimiento hizo de la Plaza Tahrir, y así está inscrito, un “símbolo de la libertad de los egipcios”.

Para los transeúntes es imposible fotografiar o acercarse a esa “libertad” grabada en el zócalo del obelisco, así como sentarse en los bancos recientemente instalados. En mayo de 2020, las autoridades encomendaron a la sociedad de seguridad Falcon que garantice la protección del sitio. En 2014, ese grupo, afiliado a los servicios de inteligencia militares (4), había arrasado en la licitación para “securizar” una decena de universidades públicas, entonces teatro de numerosas movilizaciones contra el régimen. “Tahrir es como una fortaleza en una guerra entre dos partes. La que se la adueña y la domina, gana”, analiza Galila El-Kadi. Arquitecta urbanista e investigadora emérita en el Instituto de Investigación para el Desarrollo (IID), El-Kadi ve en los recientes acondicionamientos la confesión del “temor” que obsesiona al poder desde la revolución: que los egipcios vuelvan a movilizarse allí. Muy anterior a 2011, el simbolismo político del lugar se remonta a comienzos del siglo XX, cuando todavía se llamaba Plaza Ismailia. A partir de 1930, bajo el impulso del partido independentista Wafd, el lugar se impuso, en detrimento de otras rotondas de la capital egipcia, como el “sitio de la ira, de la libertad y del cambio” (5).

Ahora bien, desde 1952, fecha en la cual tomó su nombre actual, la Plaza Tahrir (“Plaza de la Liberación”), no había sido ocupada sino en reuniones hechas por el régimen, con excepción de las manifestaciones estudiantiles de 1972 y de los “motines del pan” de 1977. Así, en el curso de los años que precedieron a la revolución de 2011, las manifestaciones del movimiento Kefaya (“Basta”), a favor de una democratización del país, se celebraron en plazas secundarias del centro de la ciudad. “Llegó la revolución y nosotros liberamos Tahrir”, resume Elham Aidaros, una militante política que estuvo en el origen de la formación, inmediatamente después del 25 de enero, de la Alianza Popular Socialista.

La sublevación

Los egipcios no olvidaron la intensidad y el fervor de ese período. En el curso de la sublevación de dieciocho días que precedió a la caída de Mubarak, frente a la extrema brutalidad policial, la valentía de los manifestantes en la plaza y sus inmediaciones, relevada en las redes sociales, contribuyó fuertemente a una “desmitificación de la imagen de omnipotencia de las fuerzas policiales” (6), por ejemplo cuando un hombre intentó rechazar un tanque con la fuerza de sus brazos, o cuando la juventud que manifestaba hizo frente sin retroceder a los múltiples asaltos de los *baltaguiyas* (rufianes) teleguiados por el régimen.

Frente al poder militar que luego se hizo cargo de la transición y que se lanzó con los Hermanos Musulmanes en un proceso electoral cuestionado, la Plaza se convirtió para las fuerzas revolucionarias en una zona a conservar para prolongar la movilización (7). “Era un espacio político reservado a la protesta contra todos los dirigentes, ya se tratase del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas o, luego, de Mohamed Morsi [elegido en junio de 2012]”, prosigue Aidaros.

Sin embargo, ese cruce de grandes arterias no era propicio para la ocupación ciudadana. El-Kadi soñó entonces con eternizar la experiencia revolucionaria de ese espacio público transformando su disposición. Al pie de sus edificios heterogéneos, propuso “volverlo peatonal llevando a los autos hacia las extremidades”. En vez de eso, la construcción de un garage subterráneo, interrumpida por la revolución, fue culminada des-

de la llegada al poder del presidente Al Sisi. Como ocupa casi la mitad de su superficie, amplias bocas de ventilación ahora desfiguran la plaza y rompen la continuidad de toda concentración.

Consejera ante el gobernador de El Cairo tras la revolución y hasta 2017, la arquitecta pudo comprobar que las decisiones de acondicionamiento de la plaza escapaban a las competencias de su superior. Son tomadas al más alto nivel del poder, al punto de constituir un “asunto de Estado”. Algunos días antes de derrocar a Morsi, fue allí donde el ejército escogió escenificar la legitimidad de sus intenciones. El 30 de junio de 2013, millones de personas afluyeron hacia Tahrir, encuadradas por tanques del ejército y entonando su rechazo a la presidencia de Morsi (8).

Esa estrategia de ocupación se mantuvo en octubre de 2013. En el gran estrado que sobrevuela la plaza, las festividades oficiales de la “victoria” egipcia en la guerra árabe-israelí de 1973 ofrecían el espectáculo de un “*copy paste* de las celebraciones de la era Mubarak –recuerda Aidaros–. Una nueva dictadura se instalaba, encabezada por Al Sisi y el mariscal [Mohamed Hussein] Tantawi, dirigente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Así, el poder se apoderó de Tahrir, como signo de control de todo el espacio público”.

La represión militar

A partir del mes siguiente, las manifestaciones no oficiales fueron prohibidas. En noviembre de 2013, un puñado de oficiales inauguró un monumento “a los mártires de las dos revoluciones” construido en apenas unos días. Algunos kilómetros más al este, en la Plaza Rabaa al-Adawiyah, ninguna placa jamás conmemoró a los centenares de muertos (1.200, según un balance extraoficial) de la represión llevada a cabo contra los partidarios de Morsi, el 14 de agosto de 2013...

Para El-Kadi, el monumento de Tahrir no es más que un “templete ridículo”. Ammar Abou Bakr denuncia por su parte la “hipocresía”. Este artista figura entre los autores de los famosos frescos de la calle Mohamed-Mahmoud, adyacente a la plaza. Allí, había pintado el día a día de la revuelta y las caras de sus “mártires”, esos centenares de manifestantes asesinados que siguen sin obtener justicia. Para protestar contra la apropiación memorial del régimen, recubrió el “muro de los mártires” con una capa de pintura que imita el camuflaje militar.

A fines de noviembre de 2013, algunos revolucionarios saquearon el monumento denostado. Pero el símbolo de Tahrir terminó por escaparse por completo en el tercer aniversario de la revolución. El 25 de enero de 2014, una multitud escogida con mucho cuidado y supervisada por el ejército celebró al mismo tiempo el aniversario de la revolución como la fiesta de la policía (9). El año siguiente, ya no eran más que una decena de militantes de la Alianza Popular Socialista los que intentaban conmemorar el acontecimiento *in situ*. En esa marcha pacífica, un policía mató a Shaima Sabbagh, una artista miembro de ese partido, con una bala en el cuello. “Ella ni siquiera pudo llegar a Tahrir –cuenta Aidaros–. El mensaje del régimen era muy claro: nadie debía acercarse a Tahrir, ni tratar de manifestar. Se acabó el juego”.

Un mes después de ese asesinato, un alto mástil con la bandera egipcia fue erigido en el centro de la Plaza. Con burla, los antiguos manifestantes de Tahrir lo apodaron inmediatamente el “empalamiento de la revolución”. En septiembre, la Universidad Americana de El Cairo, muy cercana, demolió uno de los muros del recinto, reduciendo a cascotes casi la totalidad de los frescos realizados por Abou Bakr en la calle Mohamed-Mahmoud. Así, los vestigios de la re-

vuelta desaparecieron uno a uno, a imagen de los bloques de hormigón que entorpecían ciertos accesos a la plaza y que algunos manifestantes habían pintado en trampantojo (10).

Esta borrada se acentúa por el hecho de que las administraciones estatales abandonan el centro de la capital. Así, en 2016, el muy temido Ministerio del Interior, contiguo a la plaza, se desplazó hacia la periferia. En 2021, otras administraciones deben seguir ese movimiento para unirse a la nueva capital, proyecto estrella del presidente Al Sisi, actualmente en obra al este de El Cairo. Frente al futuro palacio presidencial, el poder construye una nueva plaza, liberada de todo simbolismo revolucionario. “La ‘plaza del pueblo’ recibirá los funerales militares”, se vanagloria Hicham Naguib, responsable de la comunicación de la nueva capital. El centro de la ciudad histórica, por su parte, será “vaciado de su sentido sin sus actividades de mando”, observa El-Kadi. Son ellas, así como la instalación de la Universidad de El Cairo en la orilla opuesta del Nilo, las que habían posicionado a Tahrir en el centro del tablero de la impugnación, desde comienzos del siglo XX hasta la revolución.

Abou Bakr no lamenta la desaparición de sus frescos: “Formaban parte de una dinámica. Si su curso se interrumpe, no hay ninguna razón para que se conserven tal y como estaban”. Sin embargo, otros militantes pretenden conservar la memoria de los lugares. Así, cerca de ochocientas cincuenta horas de videos rodados por el colectivo Mosires entre 2011 y 2014 fueron puestos en línea como “archivo de la resistencia” (11). “No es solo una cuestión de preservación, sino también de disponibilidad. No es solo es un archivo; es un arsenal”, afirma uno de sus miembros.

Aunque poco a poco despojada de su memoria política y revolucionaria, Tahrir sigue siendo el teatro de muy escasas acciones simbólicas, como en noviembre de 2020, cuando un hombre se filmó mientras se inmolaba por el fuego para denunciar la corrupción del régimen. Pese a la obsesión del poder de borrar la historia de esa plaza, su identidad contestataria perdura. ■

1. Por razones de seguridad, nuestro interlocutor pidió que su nombre sea modificado.

2. Karine G. Barzegar, “Jamais l’Égypte n’a connu de période plus noire pour les droits humains”, TV5 Monde, 8-12-20, <https://information.tv5monde.com>

3. Informe disponible en árabe en el sitio de la Comisión egipcia para los derechos y las libertades, www.ec-rf.net

4. Yezid Sayigh, “Owners of the Republic: An anatomy of Egypt’s military economy”, Carnegie Middle East Center, Beirut, 18-11-19.

5. Galila El-Kadi, “Les places de la colère et du changement” (en árabe), *Amkenah*, N° 11, Alejandría, octubre de 2014.

6. “Défier l’autorité. L’homme face au blindé”, en Leyla Dakhli (dir.), *L’Esprit de la révolte. Archives et actualité des révolutions arabes*, Seuil, París, 2020.

7. Mona Abaza, “Post January Revolution Cairo: Urban wars and the reshaping of public space”, *Theory, Culture and Society*, Vol. 31, N° 7-8, Londres, 30-9-14.

8. Véase Alain Gresh, “A la sombra de los militares”, *Le Monde diplomatique*, edición chilena, agosto de 2013.

9. Céline Lebrun, “La révolution égyptienne au prisme de ses commémorations (2011-2016)”, bajo la dirección de Assia Boutaleb y Choukri Hmed, Universidad París-I Panthéon-Sorbona, junio de 2017.

10. Laura Monfleur, “À l’épreuve des murs. Sécurisation et pratiques politiques dans le centre-ville du Cairo post-révolutionnaire (2014-2015)”, *Égypte - Monde arabe*, N° 16, El Cairo, 15-10-17.

11. Los videos están disponibles en el sitio: <https://858.ma>

*Periodista.

Traducción: Víctor Goldstein

Partidarios y detractores retoman el debate en momentos de crisis

Las ilusiones del decrecimiento

por Leigh Phillips*

Una parte de los ecologistas considera que la crisis ambiental ha alcanzado el punto en que ya sólo existe una solución: el decrecimiento. Según ellos, el desorden climático no procede de un modo de producción guiado por el mercado, y por ende irracional, sino que es consecuencia directa del crecimiento, que incrementa la demanda energética y obstaculiza el objetivo de descarbonizar la economía. Reducir la producción de bienes produciría el efecto inverso; por lo tanto, sería conveniente mutilar la actividad. Este razonamiento plantea varias dificultades.

Olvidamos a veces que los humanos no siempre son impotentes frente a los desórdenes que producen. En los años 80, el peligro ecológico se corporizó en el “agujero de la capa de ozono”, ese gas que nos protege de los rayos del sol, pero cuya presencia estaba reduciéndose en la atmósfera. Anunciador de cánceres de piel, de epidemias de inmunodeficiencia, de una degradación de las reservas de agua, de una alteración de los ciclos bioquímicos y de una disminución de la producción agrícola, el fenómeno amenazaba tanto a la humanidad como el cambio climático. También en este caso las culpables eran las emisiones antropogénicas. Principalmente, los clorofluorocarburos (CFC), pronto reducidos en el discurso mediático a su utilización en los refrigeradores y aerosoles.

Intervención a los mercados

Desde el Protocolo de Montreal, que se firmó en 1987 y entró en vigor el 1º de enero de 1989, esas emisiones se redujeron en un 98% (1). En los años 2000, el fenómeno de destrucción del ozono se revirtió, y se espera que la capa atmosférica de gas recupere su estado inicial de aquí a 2075 (2).

Sin duda, quienes crecieron en los años 80 recuerdan haber perseguido a su madre, en uno u otro momento, para que dejara de comprar laca en aerosol para el cabello. No todas las madres cedieron a ese mandato. Los dirigentes políticos tampoco. Antes que apostar a la iniciativa individual, e insensible a los lamentos de los grupos de presión contratados por los industriales, el Protocolo de Montreal intervino directamente sobre los mercados, imponiendo una reglamentación.

Si hubiéramos intentado contener, por ejemplo, el aumento del número de refrigeradores en el mundo, o incluso, reducir su número total a escala planetaria, en lugar de implementar normas que imponen una mutación tecnológica, hubiéramos ido derecho a la catástrofe. Proclamar “Tantos refrigeradores, y ni uno más”, habría resuelto el problema del aumento de las emisiones, pero no el de las emisiones mismas, así como no se trata hoy de reducir los gases de efecto invernadero, sino de eliminarlos.

¿Y qué legitimidad habría podido esgrimir el Norte para explicar a los países del Sur que no podían disponer de los medios para conservar sus alimentos refrigerados? ¿Acaso el discurso progresista no consistía por el contrario en afirmar que hacía falta más refrigeración en el mundo? Felizmente, hoy constatamos un aumento de su uso, sin impacto en la capa de ozono, puesto que lo logramos mediante tecnologías que ya no destruyen ese gas.

Esa singular capacidad de los humanos de transformar su modo de vida es determinante, y explica por qué Thomas Malthus y sus epígonos modernos se equivocan. No somos semejantes a bacterias en una placa de Petri: contrariamente a otras especies, no consumimos recursos en un nivel constante. Gracias al progreso tecnológico y a decisiones políticas, podemos evolucionar si lo deseamos. Y cuando nos topamos con límites naturales, somos capaces de innovar para superarlos. Por otra parte, la historia de nuestra espe-



Carmen Valbuena, De la serie Diálogo con la geometría, 2018
(Exposición en Museo Ralli hasta el 31 de marzo)

cie podría reducirse a esa disposición. Las únicas fronteras insuperables de lo que podemos realizar son las leyes de la física y la lógica: es posible imaginar que nos teletransportemos algún día, ya que la idea no viola ninguna ley física; no es factible que inventemos una máquina de movimiento perpetuo, por la misma razón.

Es entendible que quienes promueven el decrecimiento no aprecien mucho la comparación con Malthus. Aunque una minoría deteste a la humanidad, que compara a un virus tóxico para el planeta, la mayoría forja sus convicciones en el fuego de las luchas contra las injusticias sociales que derivan de los desórdenes ambientales. También recuerdan que, contrariamente al reverendo británico, su movimiento no pone el foco en el tema de la superpoblación: se esfuerza por limitar el crecimiento económico, no demográfico.

Amenaza de caos

Pero imaginemos que hayamos identificado un límite superior a la cantidad de bienes que es posible producir sin desencadenar una catástrofe ecológica. Imaginemos que la economía mundial se satisface de ahí en más con esos volúmenes. Imaginemos, por último, que la sociedad lleva a cabo una distribución perfectamente igualitaria de esa producción a escala planetaria, pero que no existe ningún límite para el crecimiento de la población. ¿Qué ocurre entonces?

Cada año, nacen nuevos niños y los bienes disponibles se distribuyen equitativamente, pero en cantidad menor: la producción se estanca, no los nacimientos. Al cabo de cierto tiempo, todo el mundo se encuentra automáticamente desprovisto... a menos que la sociedad se imponga un techo demográfico. Al fin y al cabo, decir que hay demasiados bienes en circulación o demasiada gente en el planeta, equivale a lo mismo.

Algunos partidarios del decrecimiento, como Troy Vettese, conceden de buen grado que, a su modo de ver, la amenaza del caos ecológico justifica una dosis de “eco-austeridad” para las poblaciones del Norte: “Encontrar una solución a la crisis ambiental implica que la burguesía mundial, los pocos cientos de millones de personas más ricas, reduzcan su tren de vida” (3). Vettese no especifica quiénes son esos “millones de personas” que constituyen la “burguesía mundial”. Pero puesto que Europa Occidental y Estados Unidos cuentan con cerca de 800 millones de habitantes, sus lectores pueden imaginar que no se

refiere únicamente a Bernard Arnault o la reina de Inglaterra.

Otros, como el antropólogo Jason Hickel, alegan que el decrecimiento no es una política de la austeridad, sino de la abundancia. Explican que es posible imaginar una reducción planificada de la producción en las naciones de ingresos elevados, de manera de mantener los niveles de vida, o incluso mejorarlos. Según Hickel, eso implicaría, por ejemplo, redistribuir la riqueza existente.

Observemos más de cerca lo que ocurriría en ausencia de crecimiento económico. Por suerte, el economista Branko Milanovic, uno de los expertos mundiales en el tema de las desigualdades, nos ofrece el trabajo masticado: según sus cálculos, el ingreso promedio anual se estableció, en 2018, en torno a los 5.500 dólares (4). Ahora bien, la propuesta de Hickel implicaría reducir a ese monto todos los ingresos superiores, para poder elevar a los más pobres al mismo nivel.

¿Cinco mil quinientos dólares por año? La mayoría de los occidentales ganan más, y a veces, mucho más. En Francia, según el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE), el salario promedio anual bruto se elevaba a 26.634 euros en 2015 (últimas cifras disponibles). Por supuesto, no son más que estimaciones aproximativas, pero pasar de 26.000 a 4.700 euros constituiría una amputación del nivel de vida de los trabajadores franceses con la que nunca se atrevieron a soñar Alain Madelin, François Fillon o Bruno Lemaire. Según los cálculos de Milanovic, el 27% de la población mundial percibe más que el promedio y sus ingresos sufrirían una quita mayor a los dos tercios.

Actividad superflua

Los partidarios del decrecimiento explican que este proceso no estribaría en transferencias presupuestarias del Norte hacia el Sur: la gran igualdad derivaría de un mecanismo que autorizaría al Sur a desarrollar su producción mientras el Norte reduciría progresivamente la suya. En otras palabras, se trataría de reducir en alrededor de dos tercios la producción de riqueza en los países desarrollados. “Las fábricas, los trenes, los aeropuertos, no funcionarían más que un tercio del tiempo actual; la electricidad, la calefacción, el agua caliente estarían disponibles solo ocho horas por día; los propietarios de automóviles solo tendrían derecho a utilizarlos uno de cada

tres días; trabajaríamos no más de trece horas por semana”, concluye Milanovic.

¿Es una caricatura!, responden los decrecientos. La reducción de la producción occidental no se operaría de un modo tan transversal. Al contrario: todo lo que beneficia a la sociedad seguiría como antes, mientras lo inútil desaparecería. Y Hickel enumera los sectores “destructivos a nivel ecológico y que tienen poco o ningún interés para la sociedad”: el marketing, las 4x4, la carne vacuna, el plástico de un solo uso y los combustibles fósiles.

Indudablemente, producimos montañas de objetos y servicios inútiles, ¿pero realmente es posible sugerir que dos tercios partes de la actividad productiva occidental es superflua y genera dispositivos carentes de todo interés? De ahí, sin duda, las otras soluciones imaginadas por Hickel: la reducción de la semana de trabajo, la expansión del tiempo de ocio y la ampliación de servicios sociales generosos. Si bien todo progresista digno de ese nombre aplaudirá tales puntos de vista, nada indica que éstas compensarían la anunciada mutilación de los ingresos de la gente, ni que permitirían reducir la producción económica.

En primer lugar, ninguna cantidad de tiempo libre compensa los tormentos de la pobreza: la posibilidad de liberarse de las obligaciones laborales, a riesgo de no comer, ya se ofrece a todos, sin despertar mayor entusiasmo. “En la sociedad capitalista, lo único más duro que ser explotado, es no serlo.”

Por lo demás, la idea según la cual el entretenimiento y los servicios sociales emitirían menos gases con efecto invernadero se basa en la convicción de que estos no implican la utilización de productos manufacturados y por ende, no requieren energía ni extracción de recursos naturales. Pero los sectores del entretenimiento y los servicios, por cierto no tan “sucios” como la industria pesada, no resultan por ello menos contaminantes: los instrumentos de música se fabrican con madera, metal, plástico; los hospitales rebosan de equipamientos que requieren cientos de minerales distintos, así como derivados del petróleo; el material de montañismo, los kayaks, las bicicletas, provienen en definitiva de materiales que se extraen del suelo.

Si bien es crucial restaurar y desarrollar los servicios públicos, en particular para acabar con la crisis de la vivienda que padecen las sociedades desarrolladas, el Estado social no es la única fuente de nuestro bienestar: también están el cine, los juguetes, los moldes para panqueques, los televisores. La fantasía según la cual la ausencia de todos esos bienes de consumo –un retorno a una “vida simple”– sería la receta de la felicidad se reduce a las franjas más acomodadas de la burguesía, ya que es más fácil soñar con el despojamiento cuando todas las necesidades están cubiertas. Una de las críticas internas más persistentes a la Unión Soviética era que allí la vida era gris: no había ropa de colores, música ni piñas. Queremos pan, claro; pero también queremos rosas. ■

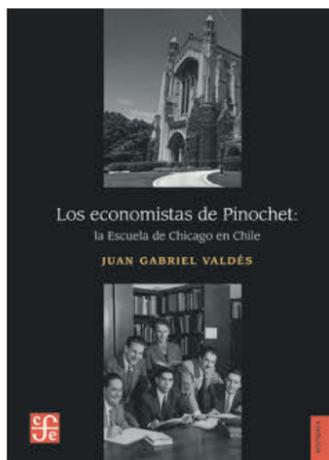
1. https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/meteorology/annual_data.html (con todo, en Asia Oriental se registró un repunte de las emisiones no declaradas a partir de la década de 2010, lo cual sugiere que alguien hace trampa en esa región).

2. “The Antarctic ozone hole will recover”, NASA, 4-6-15, <https://svs.gsfc.nasa.gov>

3. Troy Vettese, “To freeze the Thames”, *New Left Review*, N° 111, Londres, mayo-junio de 2018.

4. Branko Milanovic, “The illusion of ‘degrowth’ in a poor and unequal world”, *Global Inequality*, 18-11-17, <http://glineq.blogspot.com>

*Autor de *Austerity Ecology and the Collapse-porn Addicts: A Defence of Growth, Progress, Industry and Stuff*, Zero Books, 2015.



Los economistas de Pinochet La Escuela de Chicago en Chile

Juan Gabriel Valdés.
F.C.E. Chile, 2020, 358 páginas.

Estamos frente a una investigación doctoral que aborda el rol de los economistas de la Universidad de Chicago en Chile desde la década del cincuenta hasta su ascenso al poder durante la dictadura. Esta versión, hay una anterior en inglés, incluye un inédito comentario sobre el libro de Milton Friedman, criticando el texto: “Valdés no es economista y no entiende realmente el razonamiento económico que describe”. Sin embargo, se trata un trabajo cuidadoso, que recorre la larga relación de la Escuela de Economía de la Universidad Católica con la de la Universidad de Chicago. Un camino que llevó a la formación de una verdadera secta, denominada los “Chicago Boys”. Valdés queda con la convicción de que para ellos la economía era una ciencia, que estaba reservada sólo para un grupo de personas que tenían la capacidad de entenderla y que, en la medida que alguien quería ingresar al grupo, éste tenía que transitar por un periodo de re-educación pues, aunque fuera economista y usara sus mismos conceptos no podía tener razón en su argumentación porque no conocía “la música” de Chicago. Se trató de “un fenómeno de sectarismo y teología que se impuso en Chile como en ninguna otra parte”.

Esta relación con Chile se remonta a mediados del siglo pasado, cuando un pequeño grupo de economistas partió a Chicago. Este trabajo nos muestra el camino que recorren y como logran aprovechar la oportunidad que significó la dictadura militar para experimentar en sus teorías y modificar por completo el modelo económico en Chile. Valdés nos muestra a sus protagonistas, como le dieron a su misión un sentido casi religioso y cómo desarrollaron un complejo plan de capacitación preparado en Estados Unidos. Este grupo logró una enorme influencia y capacidad de acción, que daba cuenta de su ambición de poder y audacia. “Debo decir, nos recuerda el autor, que es de los grupos en Chile que no vaciló en usar la fuerza y que pensó que su revolución debía ser armada porque no había forma de hacer esto en paz”.

Es relevante señalar, sobre todo por el momento constitucional que estamos viviendo, que hubo otra escuela estadounidense que también fue tremendamente influyente en el periodo de la dictadura, la de James M. Buchanan y la *Public choice*. Llamo la atención sobre este grupo porque fueron muy influyentes en la redacción de la Constitución del 80. Para ellos era imprescindible amarrar los aspectos fundamentales del modelo económico a la constitución misma, de tal forma de hacerlos inamovibles. Esto no lo comprendieron del todo los Chicago Boys.

Estamos frente a una buena crónica de la historia de la Escuela de Chicago en nuestro país. Un trabajo que nos ayuda a reflexionar acerca de una parte oscura de nuestra historia, y que debía ser contada. Me quedo con su detalle del programa que desarrollaron previa y durante la dictadura, y su crítica al neoliberalismo. Un libro necesario en el camino a una nueva Constitución. ◆

Gonzalo Rovira



Una falla en la lógica del universo Cartas desde la cornisa

Aïcha Liviana Messina y Constanza Michelson
Ediciones Metales Pesados, 2020, 127 pp.

Este libro consiste en una larga conversación (vía email) entre la filósofa Aïcha Liviana Messina y la psicoanalista Constanza Michelson, situada en un lapso de tiempo que va desde las expectativas despertadas por el estallido social hasta el impacto de la pandemia (marzo a agosto de 2020). Es un libro que reflexiona los acontecimientos de nuestro tiempo más inmediato, pero como acaecer cotidiano, no necesariamente doméstico, sino en la medida que estos van poniendo en cuestión nuestros trayectos vitales, e incluso nuestras puras proyecciones y deseos. Pero es también un libro de “otro tiempo”, pues pese a la forma email, o WhatsApp, es en el fondo un intercambio epistolar que nos remite a un pasado en donde la lectura y la escritura ocupaban un lugar fijo y necesario para nuestras vidas, poniendo atajo a la aceleración del trabajo asalariado y doméstico, lo que hoy -cuando hace meses vivimos casi sepultados/as por la desaparición plena de los límites entre ambos, y todo lo demás- hace que ese ejercicio escritural adquiera cierta épica (es casi el testimonio de que hay un sujeto que persiste). No son casuales los horarios en que se registran los correos: en el desvelo o en unos minutos robados a la “labor”, dicho arendtianamente.

Pero sería inadecuado hablar ahora, por separado, de “lo que trata” el libro, no se puede disociar lo escrito de sus circunstancias, pues ese es precisamente el “tema” del libro, de cierto modo los escritos reunidos acá dan cuenta de la experiencia de un tiempo extraño, no solo por el ya aludido derrumbe de los límites entre los haceres diarios de nuestro “verosímil vida”, sino porque se trata de un lapso en donde las expectativas despertadas por el octubre chileno han debido ser -digamos- relativizadas, postergadas, corregidas o puestas en suspenso luego del repliegue social ligado a la pandemia y la reposición de la llamada “normalidad”.

Esas expectativas trajeron también la posibilidad de narrarse de otra manera, de ser otros/as (aunque suene grandilocuente). Se trata entonces de escritos en un tiempo de perplejidad. No es que simplemente de pronto se interrumpiera el sentido, sino la posibilidad misma de que hubiese otro sentido. Escribe Aïcha en abril: “La tranquilidad de la gente alrededor mío me empieza a afectar. Hay demasiada gente contenta de su vida sin mundo. Cocinan, se cortan el pelo. Ven noticias. No se implican”. (p. 28).

Quizá la gran virtud de este libro sea que se trata de una muestra de pensamiento aplicado a unas vidas que están cruzadas por las mismas experiencias que el lector, en donde el registro íntimo de la correspondencia permite asumir desde un principio, con todas sus consecuencias, la fragilidad y precariedad, no ya de nuestras vidas, sino de las ideas y certezas que nos hacemos de ésta. Siempre hay que corregir(se). ◆

Pablo Aravena Núñez



La victoria popular con Allende 4 de septiembre de 1970

JL. Urbina; J. Arrate; J. Leiva; R. Urriola; A. Tarrés; E. Ceppi; MI. Matamala y A. Pascal. Rafael Urriola, José Leandro Urbina y Michel Bonnefoy (Editores). LOM Ediciones, 2021, 205 páginas.

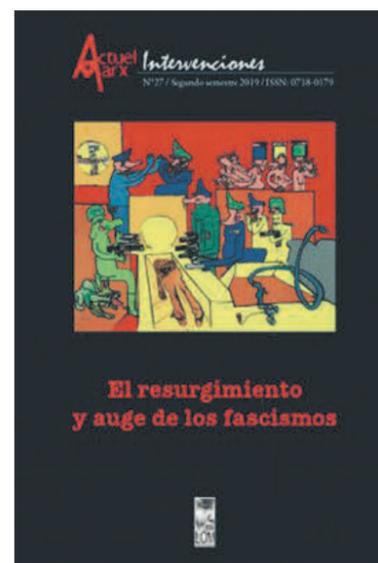
Si algo queda claro después de leer este libro es que, uno de los principales motivos del triunfo de Salvador Allende fue el desempeño de la Democracia Cristiana.

Todos los autores concuerdan en que el movimiento social en alza hacia los '70 se consolida como fuerza electoral capaz de derrotar en las urnas a la derecha chilena, capitalista, pro imperialista, monopólica. Los tres tercios del '58 se despliegan en un 31,56% para la derecha, un 28,85% para la izquierda y un 36,25% para el centro político, repartido entre un 20,70% la DC y un 15,55% para el P. Radical, un centro político “estabilizador” repartido en dos centros políticos irreconciliables, el discurso totalizador cristiano y el discurso laico-libre pensador del radicalismo.

En 1964 la derecha, ante el peligro que gane las elecciones Allende, decide apoyar al candidato DC, y el resultado es contundente, gana Eduardo Frei con un 56,09%, es decir, el centro totalizador cristiano junto a la derecha obtiene un 56,09% de los votos, seguido por la izquierda con un 38,93%, y el radicalismo casi desaparece con un 4,98%. La derecha intuye bien, con candidato propio, ganaba Allende. Pero queda a la luz el drama de la carencia de un centro político estabilizador, el cual se ve, por un lado cooptado por la derecha y el viejo conservadurismo que anida en la DC, y muestra de aquello es ese 56,09% que, como bien dicen, cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana. La DC, entre el “camino propio” y su discurso totalizador, carece de la ductilidad para ejercer de centro político estabilizador, antes al contrario, su gobierno termina en una grave polarización con intentos golpistas, en el poder se muestra desestabilizadora, y así llegamos al 4 de septiembre de 1970, con graves problemas económicos y sociales.

La derecha no perdona a la DC la reforma agraria y va con candidato propio; la DC con Tomic y con un programa parecido al de la izquierda prosigue la senda del “camino propio”. Allende alcanza un 36,63% de los sufragios, contra un 35,29% de Alessandri, y el “centro político estabilizador” un 28,08%. Lo que viene a continuación ya lo sabemos. ◆

Roberto Rivera Vicencio



El resurgimiento y auge de los fascismos

Actual Marx intervenciones, N°27/
segundo semestre 2019, LOM Ediciones,
238 páginas.

Esta publicación es una variante editorial de la revista francesa Actual Marx y está dedicada a la recepción y discusión de cuestiones teóricas fundamentales y de nuevas problemáticas críticas.

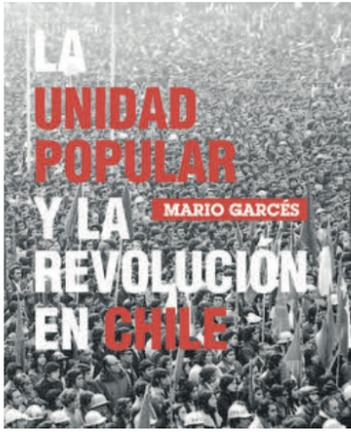
El presente número se aboca al actual auge de la extrema derecha en la huella de los fascismos históricos.

En los últimos años, en diversos países del mundo, se ha vivido una especie de “rebrote” de la derecha reaccionaria y autoritaria, que bajo diferentes versiones y ropajes reproduce la esencia de lo que caracteriza al fascismo a través del tiempo: el autoritarismo, el nacionalismo integral, la intolerancia religiosa o étnica (racista), la violencia policial/militar como sola respuesta a los problemas sociales y a la criminalidad. etc. Tal es la constatación a la que nos lleva el análisis de regímenes tan disímiles y sin embargo tan convergentes como son los de Trump en EEUU, Modi en India, Orban en Hungría, Erdogan en Turquía, Bolsonaro en Brasil, etc...

Esta obra permite una conceptualización clara al hacer una neta diferencia entre el término “populismo”, con el que solía definirse al Varguismo brasileño de los años 30-40 y al Peronismo argentino de los 40-50, con el fascismo propiamente tal. Este punto es fundamental a la hora en que en Europa, el término “populismo” está tan de moda en boca de los analistas que tienen tendencia a utilizarlo como un descalificativo más que como en definición conceptual.

Uno de los aspectos más interesantes de esta publicación, compuesta de diez artículos, es la de poner en correspondencia o en vincular situaciones históricas clásicas, como “Sobre el alza y la victoria del nazismo” del autor francés Jean Marie Vincent con realidades contemporáneas como “Para entender el neo fascismo en Brasil: un ensayo a partir de las contribuciones de Nicos Poulantzas”, del catedrático brasileño Caio Bugiato. Es precisamente gracias a esta variada dosificación que logramos entender la diversidad en la continuidad del fenómeno fascista como forma de gobernar y conservar el poder. ◆

Ricardo Parvex



La Unidad Popular y la Revolución en Chile

Mario Garcés
LOM, Santiago, 2020, 340 páginas.

Una obra historiográfica y artística sobre la Unidad Popular y lo que el autor denomina la revolución en Chile. Los procesos sociales, los partidos, los programas estratégicos y el devenir del país, desde el siglo XIX, hasta los mil días que buscaron transformar a Chile a favor de las mayorías sociales, son el material histórico que conforman este libro sobre uno de los procesos políticos sociales más ilusionadores, no solo en Chile, en el siglo XX. El proceso que llevó a las fuerzas políticas de izquierda, a construir un programa popular de unidad, es analizado con fuentes históricas, testimonios, discursos, propuestas gráficas, artísticas culturales y sociales, incorporando elementos técnicos de última generación para hacer revivir la memoria sensorial y corporal de la experiencia del gobierno de la Unidad Popular, encabezado por Salvador Allende Gossens y una pléyada de actores y actrices, unos públicos y otros anónimos cotidianos. No solo el riguroso y ameno relato de la investigación historiográfica hace

parte de esta obra, sino también un archivo de múltiples soportes permite revivir o conocer la experiencia que buscó para Chile el controvertido *socialismo con empanadas y vino tinto*. ¿Qué puede tener de similar el proyecto de la Sociedad de la Igualdad de la segunda mitad del siglo XIX, con el proyecto de la Unidad Popular de los años 70? ¿Es posible pensar desde el proyecto de J. Balmaceda y las confrontaciones de clase, políticas y sociales el Chile de los años 70? La Constitución de 1925, nos enseña que el pueblo organizado puede ser derrotado cuando el proyecto de la clase dominante se une para impedir su avance, por ejemplo, en lo que pudo ser la primera Asamblea Constituyente en la época. Son reflexiones teóricas históricas que nos amplían el conocimiento para mejor entender lo que fue el proyecto de ampliación política y social propuesto por la Unidad Popular, que provocó la alegría de la mayoría del pueblo y la reacción iracunda y violenta del sector dominante y de capas medias de la época. El Chile actual que se conforma posdictadura, una dictadura que buscó borrar a sangre y muerte la historia de los movimientos sociales, políticos y estratégicos que propusieron en Chile proyectos de alcance estratégico progresistas y socialistas. Proyectos que buscaron incorporar, a las y los trabajadores, a los pobladores, al campesinado, estudiantes, artistas en la aplicación de programas que buscaban resolver las desigualdades de clase, cultura, y hacer un país más democrático que confrontó y enfrenta permanentemente a la clase dominante que se ha apropiado de las tierras, y los medios de producción para imponer sus imaginarios y proyectos políticos y sociales desde sus intereses diversos. Nunca antes el proyecto social ha estado tan presente en nuestra sociedad, y este libro nos muestra magníficamente desde la posibilidad histórica en larga duración. ♦

Margarita Iglesias Saldaña



Abecedario para cambiar el mundo Palabras de una futura constitución

Daniel Ramírez y Federica Matta
Editorial Aún Creemos en los Sueños,
2020, 80 páginas.

Las chilenas y chilenos están viviendo, por primera vez en su historia, un proceso constituyente. Aunque no se ha logrado recuperar completamente la soberanía popular, el pueblo en las calles conquistó la posibilidad de cambiar la Constitución pinochetista.

En este libro el filósofo Daniel Ramírez y la artista Federica Matta interactúan con palabras e imágenes, avanzando en conceptos que nos invitan a debatir e inventar juntos nuevas maneras de

convivir, participando activamente en este "momento constitucional" que Daniel Ramírez considera *una cita privilegiada de un pueblo consigo mismo; tesoro y piedra angular de la democracia... La Constitución debe absolutamente surgir de un organismo salido de las bases de una sociedad*.

Necesitamos una Constitución que contemple la justicia social, que resguarde esencialmente los derechos de la población y no los privilegios. Los derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la vejez digna, al agua, a la igualdad de género, que contemple la autonomía de los pueblos originarios, etcétera.

Una Constitución que defina una nueva manera de hacer política, en que sea el pueblo soberano el que decida, con una participación real. Hay que promover la creatividad y explorar nuevas formas de elegir a los representantes, más democráticas, incluyendo el método de el sorteo.

La ecología, concebida como *el que-hacer de todo hacer*, la defensa del medio ambiente, atraviesa todo este libro, un tema esencial en la teoría y práctica de ambos autores. Federica Matta utiliza el término de "Acupuntura urbana", para sus intervenciones y esculturas que, con colores y creativas formas, reactivan las energías de las ciudades.

Se trata finalmente de *El Buen Vivir*, de soñar juntos una nueva manera de convivir, en libertad, lo que implica cambiar el mundo, con valores que cultivamos entre todos, haciendo realidad el eslogan "Otro mundo es posible". ♦

Víctor Hugo de la Fuente

**¡Súmate ya!, a la
COMUNIDAD DE LECTORXS LOM**

Tenemos 4 modalidades de suscripción,
elige la tuya y recibe tu libro en casa.
Despacho gratuito.

Suscríbete en
www.lom.cl

LOMediciones @Lomediciones @lom_ediciones

Ediciones Espartaco

<p>Carlos Marx Federico Engels</p> <p>MANIFIESTO COMUNISTA</p> <p>EDICIONES ESPARTACO</p>	<p>Mao Tse-tung</p> <p>SOBRE LA CONTRADICCIÓN</p> <p>EDICIONES ESPARTACO</p>	<p>LENIN</p> <p>EL ESTADO Y LA REVOLUCIÓN</p> <p>EDICIONES ESPARTACO</p>	<p>SALVADOR ALLENDE</p> <p>LA VÍA CHILENA AL SOCIALISMO</p> <p>EDICIONES ESPARTACO</p>	<p>TROTSKY</p> <p>PROGRAMA DE TRANSICIÓN</p> <p>EDICIONES ESPARTACO</p>
<p>ALEXANDRA KOLONTAI</p> <p>LAS RELACIONES SEXUALES Y LA LUCHA DE CLASES</p> <p>EDICIONES ESPARTACO</p>	<p>ROSA LUXENBURGO</p> <p>REFORMA Y REVOLUCIÓN</p> <p>EDICIONES ESPARTACO</p>	<p>ALBERT EINSTEIN FEDERICO ENGELS CLARA ZETKIN JEAN JAURES</p> <p>SOCIALISMO Y COMUNISMO</p> <p>EDICIONES ESPARTACO</p>	<p>FLORA TRISTÁN</p> <p>TRÉS TEXTOS DE UNA FEMINISTA DEL SIGLO XIX</p> <p>EDICIONES ESPARTACO</p>	<p>VÍCTOR SERGE</p> <p>4 TEXTOS HISTÓRICOS INCLUYE EL "TRATAMIENTO POLÍTICO" TRABAJO, AÑO POSTERIO A LA REVOLUCIÓN RUSA</p> <p>PRESENTACIÓN DE CARMEN CASTELLO</p> <p>EDICIONES ESPARTACO</p>
<p>FIDEL CASTRO</p> <p>FEEDBACK DE LA REVOLUCIÓN</p> <p>EDICIONES ESPARTACO</p>	<p>GEORGE PORTER</p> <p>MANIFIESTO COMUNISTA LIBERTARIO</p> <p>EDICIONES ESPARTACO</p>	<p>FEDERICO ENGELS</p> <p>EL PAPEL DEL TRABAJO EN LA TRANSFORMACIÓN DEL HOMO EN HOMBRE</p> <p>EDICIONES ESPARTACO</p>	<p>LOUISE MICHEL</p> <p>LA COMUNA DE PARÍS</p> <p>HISTORIA Y RECUERDOS</p> <p>EDICIONES ESPARTACO</p>	<p>LUIS EMILIO RECABARRÉN</p> <p>PROYECTO DE CONSTITUCIÓN PARA LA REPÚBLICA FEDERAL, PROYECTO DE LEY Y OTROS TEXTOS</p> <p>EDICIONES ESPARTACO</p>

Libros digitales \$2.950, libros impresos \$3.950: www.editorialauncreemos.cl



Nuevo libro
Reforma tributaria

JUSTICIA FISCAL

Chile necesita reformas tributarias progresivas
por Michel Jorratt y Ricardo Martner

La ruta de los superricos y los "otros"
por Juan Apablaza Gallardo

Un impuesto al patrimonio de forma permanente
por Ramón E. López y Gino Sturla

Justicia tributaria, paraísos fiscales y flujos ilícitos de fondos
por Jorge Andrés Thibaut

Nuevos vientos tributarios: impuestos a la riqueza
por Rosa Cañete Alonso

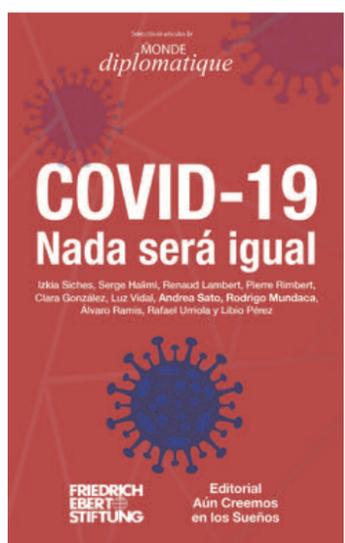
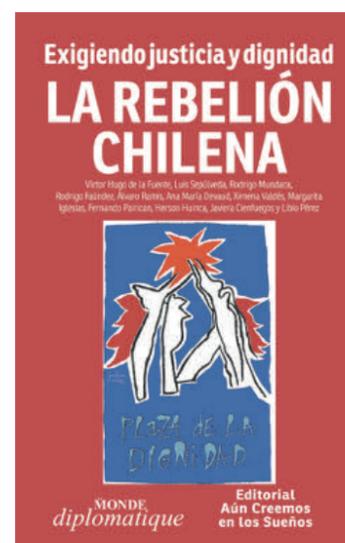
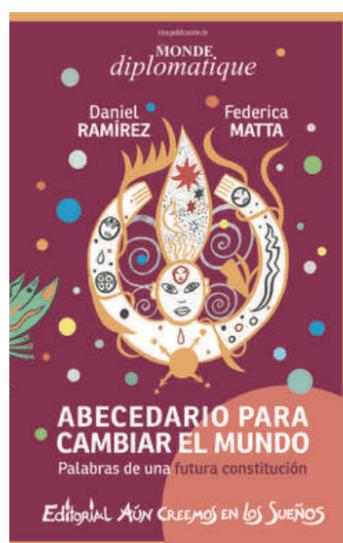
La vacuna para la justicia social
por Nayareth Quevedo

Problemáticas del sistema tributario chileno
y en especial de la Ley del Impuesto a la Renta
por Facultad de Derecho

Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile

Disponible por ahora solo en versión digital a \$2.950 en:
<https://editorialauncreemos.cl>

Libros impresos (\$3.950) y digitales (\$2.950)



Librería Le Monde Diplomatique, San Antonio 434, Santiago. Teléfono: 22 608 35 24
Compre por internet en: www.editorialauncreemos.cl